

Protocolo de Atención Integral a Víctimas de la Violencia Contra la Mujer en Supuestos de Violencia Doméstica y de Violencia Intrafamiliar y Guía de Adecuación Técnica para su Aplicación

Poder Judicial de Honduras

Colección Documentos de Política nº 20
Área Justicia



PROGRAMA FINANCIADO
POR LA UNIÓN EUROPEA

Edita:

Programa EUROsociAL
C/ Beatriz de Bobadilla, 18
28040 Madrid (España)
Tel.: +34 91 591 46 00
www.eurosocii-ii.eu
info@eurosocii-ii.eu

Con la colaboración:

Poder Judicial de Honduras



Fundación Abogacía Española



Justice Coopération Internationale (JCI)



La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de los autores y en ningún caso se debe considerar que refleja la opinión de la Unión Europea.

Edición no venal.

Realización gráfica:

Cyan, Proyectos Editoriales, S.A.

Honduras, noviembre 2013



No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Protocolo de Atención Integral a Víctimas de la Violencia Contra la Mujer en Supuestos de Violencia Doméstica y de Violencia Intrafamiliar y Guía de Adecuación Técnica para su Aplicación

Documento de Política nº 20

Serie: Guías y manuales

Área: Justicia



PROGRAMA FINANCIADO
POR LA UNIÓN EUROPEA

Edita:

Programa EUROsociAL
C/ Beatriz de Bobadilla, 18
28040 Madrid (España)
Tel.: +34 91 591 46 00
www.eurosociasocial-ii.eu

Con la colaboración:

Fundación Abogacía Española



Justice Coopération Internationale (JCI)



Poder Judicial de Honduras



La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de los autores y en ningún caso se debe considerar que refleja la opinión de la Unión Europea.

Edición no venal.

Realización gráfica:

Cyan, Proyectos Editoriales, S.A.

Honduras, 2014



No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Agradecimientos

Socios Operativos

Justice Cooperation Internationale - JCI
Fundación Abogacía Española

Consultores

Magistrada María Tardon Olmos, *Consultora Internacional EUROsociAL Justicia II*
Fiscal Daniel Lecrubier, *Consultor Internacional EUROsociAL Justicia II*
Abogado Jose Gustavo Zelaya Mendoza, *Consultor Nacional EUROsociAL Justicia II*
Abogada Marcela Laitano Barahona, *Consultora Nacional EUROsociAL II*
Doctora Ileana Ruth Paredes Alvarado, *Consultora Nacional EUROsociAL II*

Equipo Internacional

Mikel Córdoba Gavín, *Técnico de Proyectos Fundación Abogacía Española*
Emilie Bousquier, *Técnica de Proyectos GIP Justice Coopération Internationale*
Jose de la Mata Amaya, *EUROsociAL Justicia II*
Rosaly Ledezma, *Unidad de Seguimiento EUROsociAL Justicia II*

Equipo Nacional

Rosa de Lourdes Paz Haslam, *Magistrada de la CSJ*
Roxana Morales, *Coordinadora de la UNACIJ*
Mildren Georgina Dubón Villeda, *Jefa de la Unidad de Programas Especiales/Poder Judicial*
Lilian Maldonado, *Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial*
Yunior Alexander Matute, *Auxiliar Administrativo Programas Especiales/Poder Judicial*
Liana Molina, *Técnico de Apoyo Programas Especiales/Poder Judicial*
Abogada Vivian Linck, *Unidad de Genero del Poder Judicial*
Abogado Luis Fernando Reyes, *Técnico Especializado Unidad de Genero del Poder Judicial*
Ana Concepción Romero, *Coordinadora Juzgado Especial Contra la Violencia Domestica*
Irma Grissel Amaya, *Fiscalía Especial de la Mujer*

Alma Coello, *Instituto Nacional de la Mujer*
 Karla Martinez, *Fiscalía de la Mujer*
 Ana Lourdes Ramírez, *Coordinadora Programa Derechos de la Mujer/CONADEH*
 Indira Ever, *Unidad de Género Policía Nacional*
 Maribel del Carmen Salinas, *Unidad de Género Policía Nacional /Secretaría de Seguridad*
 Ana Margarita Ochoa, *Conserjerías de Familia Secretaria de Salud*
 Ana Cruz, *Calidad de Vida*
 Abogada Reina Dalila Flores, *Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla*
 Iris Ondina Castro, *Defensora Pública /Poder Judicial*
 Yolanda Perez Molina, *Vice Ministra Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social*
 Cesar Efraín Ramos, *Técnico de Apoyo Jurídico UNACIJ - Poder Judicial*
 Comisaria Sulma Reyes, *Unidad de Género Policía Nacional*
 Licenciada Carolina Padilla, *Programa Nacional de Salud Mental – Secretaria de Salud*
 Abogada Dora Marina Raudales, *Dirección General de Normalización - Secretaria de Salud*
 Licenciada Mirian Navarro, *Comisionada Nacional de los Derechos Humanos*
 Licenciada Mirian Dominguez, *Oficina de la Mujer Alcaldía Municipal del Distrito Central*
 Abogada Erlinda Esperanza Flores, *Directora Consultorio Jurídico Gratuito Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNAH*
 Rosibel Quiroz Landa, *Secretaria Académica Consultorio Jurídico Gratuito Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNAH*
 Juana Apolonia Trejo, *Representante Oficina Municipal de la Mujer*
 Abogada Ana Lizzeth Cruz, *Asociación Calidad de Vida*
 Licenciada Evelyn Cuellar, *Centro de Estudios de la Mujer*
 Licenciada Ivania López, *Centro de Derecho de Mujeres*
 Doctora Silvia Yolanda Nazar, *Directora General de Normalización - Secretaria de Salud*

Comisión Técnica Interinstitucional contra la Violencia hacia la Mujer



Índice

PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN SUPUESTOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	7
I. Objeto del Protocolo	9
a) Objetivo.....	9
b) Introducción.....	10
c) Justificación	11
d) Los mecanismos de coordinación interinstitucional	11
II. Delimitación conceptual	13
III. Principios rectores	19
IV. Marco normativo nacional e internacional	21
V. Coordinación institucional.....	23
Mecanismos de coordinación y derivación	23
VI. Mujeres víctimas de violencia.....	25
Derechos de las víctimas	25
VII. Ruta de atención a la denuncia	27
a) Secretaría de Seguridad.....	28
b) Ministerio Público	37
c) Poder Judicial.....	46
d) Organismos e Instituciones que brindan Asistencia Legal	55
d.1) Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).....	55
d.2) Instituto Nacional de la Mujer (INAM)	55
d.3) Alcaldías Municipales	56
e) Asistencia Social	56
f) Servicios de Salud	63

VIII.Recomendaciones 69

IX. Anexos 71

GUÍA DE ADECUACIÓN TÉCNICA PARA SU APLICACIÓN 109

I. Objeto de la Guía 111

II. Criterios de actuación por sectores 115

1. Secretaria de Seguridad..... 115

2. Ministerio Público 118

3. Organos judiciales 121

4. Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 125

5. Secretaría de Salud 127

**PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTEGRAL
A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER EN SUPUESTOS
DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**

I. Objeto del Protocolo

a) Objetivo

La violencia contra la mujer constituye uno de los ataques más flagrantes a los derechos fundamentales esenciales de las personas que la sufren, pues no solo representan un ataque al derecho a la vida, la integridad física, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad y la seguridad de las víctimas, sino también a su derecho a no ser sometido a un trato degradante, la inviolabilidad de su domicilio, y protección del núcleo familiar.

La violencia contra las mujeres, es asimismo, una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que trasciende a todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingreso, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases.

La violencia que sufren las mujeres, por su mera pertenencia al sexo femenino, supone, la más brutal de las manifestaciones de la desigualdad entre hombres y mujeres, como instrumento para mantener el papel de subordinación de éstas, en los distintos ámbitos de relación de la persona, especialmente, en el de la pareja, por parte de aquéllos hombres que sean o hayan sido sus cónyuges, compañeros de hogar o cualquier relación afín a una pareja, en la que medie o haya mediado o no cohabitación, y que se manifiesta en violencias físicas, sexuales o psicológicas, así como en las amenazas de tales actos, y otras actuaciones contra la libertad de las víctimas (Art. 1 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Resolución de la Asamblea General ONU, 48/104 del 20 de diciembre de 1993).

El plan de igualdad y equidad de género 2010-2022, es el instrumento técnico político que contiene en su segundo eje: Promoción, protección y garantía del derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a la paz y a una vida libre de violencia.

Asimismo, el Plan Estratégico del Poder Judicial Hondureño aprobado para los años 2011-2016, en su objetivo estratégico número uno y línea de acción 1.2 Acceso a la

Justicia, considera como una de sus prioridades el incremento de las facilidades para acceder al servicio de justicia, haciendo énfasis en los grupos vulnerables, como ejes transversales. Este Plan Estratégico está enmarcado dentro del Plan de Nación Visión de País, que constituye la política pública del Estado de Honduras, el cual incorpora el Género como eje transversal.

El presente instrumento, tiene como objetivo general, el de establecer un sistema de pautas de actuación homogéneas y normalizadas a seguir por cada servicio profesional implicado (ámbitos judicial, policial, Fiscal, de salud, social, y educativo) que permitan mejorar la respuesta de las instituciones públicas en la persecución y sanción de los actos de violencia contra las mujeres, en la asistencia integral y adecuada protección de las mismas, a fin de evitar su victimización secundaria.

Como objetivos específicos, el Protocolo de Actuación ha de coadyuvar a promover el empoderamiento, para el reconocimiento y real ejercicio de sus derechos, a las mujeres, que sufren violencia.

Formar a los distintos gestores de justicia, con competencias en la ruta de atención y protección a las víctimas, contribuyendo al mismo tiempo, a sensibilizar a la población general sobre este grave problema social, común en muchas familias hondureñas.

b) Introducción

Siendo que nuestra Constitución establece que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y que todos estamos en la obligación de salvaguardar su integridad física, psíquica y moral, no queremos que esta afirmación sea únicamente una declaración sin contenido, es así, que partiendo de esa aseveración, nos queremos enfocar en la temática de un ser humano vulnerable como es la mujer y las barreras que han diagnosticado, para que este grupo social no cuente con las estrategias y mecanismos necesarios para tener acceso al derecho y por ende acceso a la justicia.

A través de los años ha sido necesario estudiar el fenómeno de la violencia doméstica e intrafamiliar, en todos sus aspectos tanto sociales, económicos, culturales y políticos. De igual manera se han venido involucrando en la problemática de este tipo de violencia tanto instituciones públicas como privadas, para promover políticas preventivas en contra de cualquier forma de violencia contra la mujer, precisamente por el maltrato y discriminación del cual ha sido objeto, es por eso que los diferentes actores del sistema han adquirido un compromiso que coadyuve a implementar mecanismos de protección eficientes y eficaces, para la investigación, juzgamiento y sanción de los agresores tanto en el ámbito de la violencia doméstica como violencia intrafamiliar.

El presente protocolo tiene como finalidad proveer a las mujeres víctimas de este tipo de violencia de una atención integral, brindándoles, no solo atención en la recepción de la denuncia, sino también de proveerles del acompañamiento necesario, hasta lograr que se rompa con el círculo de la violencia.

Es importante señalar que las mujeres merecen en todo su contexto mejor atención a los diferentes problemas a los cuales son susceptibles de sufrir por su condición de mujer, es por ello, que es necesario sensibilizar y empoderar a los gestores de justicia encargados de darle tratamiento a las mujeres víctimas de todo tipo de violencia.

Por lo tanto, la problemática de la violencia doméstica debe ser tratada con mucha responsabilidad por los gestores de justicia, por lo que deben tener la capacidad de ver este problema como una realidad en el núcleo de la familia y no como un simple conflicto de pareja. Creemos que atacando esta violencia primaria, iremos avanzando en la disminución de la violencia que abate nuestra sociedad, contribuyendo a disminuir la conflictividad y por ende construyendo una cultura de paz.

c) Justificación

El diseño de un Protocolo que contenga los lineamientos sobre los cuales se basará la atención, que cada uno de los gestores de justicia, tiene la obligación de brindar a las mujeres víctimas de violencia, para garantizar el acceso a la justicia, la diligencia debida en los procesos de investigación, persecución y sanción, la recuperación física y emocional, el resarcimiento de daños y restitución de derechos, que ocasiona los actos de violencia contra las mujeres y su núcleo familiar.

Al identificar y concretar sus responsabilidades y obligaciones en el proceso, de cada uno de los gestores involucrados respecto a sus competencias y evitar la revictimización en el proceso de las mujeres víctimas de violencia.

d) Los mecanismos de coordinación interinstitucional

Debemos entender como mecanismos de coordinación, la articulación de los diferentes gestores de manera dinámica, para detectar las situaciones de violencia contra las mujeres, desde el momento que se tiene conocimiento de su existencia, brindándole la atención integral y su adecuada protección.

La Ley contra la Violencia Doméstica dispone además, la necesidad de establecer niveles de coordinación adecuados, entre los actores involucrados encargados de la prevención, atención y sanción de la violencia doméstica, para garantizar la atención de las denuncias en días y horas hábiles e inhábiles.

Y atribuye al Instituto Nacional de la Mujer (INAM), el encargo, de coordinar las políticas dirigidas a la mujer, con las entidades de derecho público o privado, vinculadas a la materia, disponiendo que celebrara convenios con las organizaciones no gubernamentales legales reconocidas, que desarrollen programas de refugios, atención legal y emocional a mujeres afectadas por violencia doméstica. Asimismo, que diseñe el instrumento de medición y control para evaluar la incidencia de la violencia doméstica, proporcionándoselo a las instituciones encargadas de su aplicación, y, finalmente, que disponga de los procedimientos que le permitan mantener estadísticas actualizadas.

II. Delimitación conceptual

Para alcanzar una mejor comprensión del presente Protocolo, definiremos, a continuación, los conceptos más relevantes en los que descansa:

A. Violencia contra la mujer

Se entiende por violencia contra la mujer todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada y es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, en los distintos ámbitos de relación de la persona: afectivo, social, laboral, institucional, etc.

No obstante, tanto por su mayor incidencia como porque ha de acotarse el ámbito de intervención para facilitar el adecuado abordaje a un tipo de violencia que presenta características específicas que la diferencian con claridad de otro tipo de agresiones, y teniendo como referencia, obviamente, el marco normativo hondureño, hemos optado por delimitar el ámbito objetivo de este Protocolo respecto de *la violencia de carácter físico, psicológico, sexual, patrimonial y/o económica, que se ejerce contra la mujer por aquéllos hombres que sean o hayan sido sus cónyuges, compañeros de hogar o cualquier relación afín a una pareja en la que medie o haya mediado o no cohabitación, y es manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.*

En consecuencia, deben entenderse comprendidas en este ámbito, las siguientes formas de violencia:

A.1. Violencia Doméstica

Todo patrón de conducta asociado a una situación de ejercicio desigual de poder que se manifieste en el uso de la violencia física, psicológica, patrimonial, y/o económica

y sexual; y, 2. Ejercicio desigual de Poder: Toda conducta dirigida a afectar, comprometer o limitar el libre desenvolvimiento de la personalidad de la mujer por razones de género.

Se consideran formas de Violencia Doméstica:

A.1.1. Violencia Física

Toda acción u omisión que produce un daño o menoscabo la integridad corporal de la mujer, no tipificada como delito en el Código Penal;

A.1.2. Violencia Psicológica

Toda acción u omisión cuyo propósito sea degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de la mujer por medio de la intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento, encierro o cualquier otra conducta u omisión que implique un perjuicio en el desarrollo integral o la autodeterminación de la mujer, o que ocasione daño emocional, disminuya la autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la mujer, disminuya la autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la mujer, como ejerciendo actos en descrédito de la mujer o menosprecio al valor personal o dignidad, tratos humillantes o vejatorios, vigilancia, aislamiento, insultos, el chantaje, degradación ridiculizar, manipular, explotar o amenazar con el alejamiento de los (as) hijos (as), entre otras.

A.1.3. Violencia Sexual

Toda conducta que entrañe amenaza o intimidación que afecte la integridad o la autodeterminación sexual de la mujer, tal como las relaciones sexuales no deseadas, la negación a anticoncepción y protección, entre otras, siempre que dichas acciones no se encuentren tipificadas como delito en el Código Penal; y

A.1.4. Violencia Patrimonial y/o Económica

Todo acto u omisión que implica pérdida, transformación, negación, sustracción, destrucción, retención de objetos, documentos personales, bienes muebles y/e inmuebles, valores, derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer o del grupo familiar, incluyendo el menoscabo, reducción o negación que afecten los ingresos de la mujer o el incumplimiento de obligaciones alimentarias.

A.2. Violencia intrafamiliar

El delito de violencia intrafamiliar tiene por objeto las situaciones que en el ámbito del hogar impliquen el ejercicio de la fuerza, la intimidación o persecución a su cónyuge o ex cónyuge, a la persona con quien conviva o haya mantenido una relación concubinaria, a aquella con quien haya procreado hijos, con la finalidad de causarle daño físico, emocional o para dañar sus bienes.

Se establecen como supuestos agravados cuando la violencia se ejerza penetrando a la morada de la persona o su lugar en que esté albergada o depositada para consumir el hecho; le infiera grave daño corporal; utilice armas para la comisión del delito, actúe en presencia de menores de edad; que induzca, incite u obligue a la persona a consumir drogas, estupefacientes u otras sustancias psicotrópicas o embriagantes; se haga objeto de malos tratos a un menor de edad; y, por último, si se utiliza como pretexto para restringir su libertad, que la víctima padece enfermedad o defecto mental.

Siempre que a lo largo del presente Protocolo nos refiramos a la violencia contra las mujeres, sin otras especificaciones, estaremos haciendo referencia genérica a hechos violentos susceptibles de calificarse en cualquiera de las categorías definidas.

B. Asistencia judicial a las víctimas de la violencia contra la mujer

Es el conjunto de medidas y servicios que se realizan por las distintas instituciones que forman parte del sistema de justicia cuando se tiene conocimiento de la existencia de una situación de violencia contra la mujer, ejercida por parte de aquéllos hombres que sean o hayan sido sus cónyuges, compañeros de hogar o cualquier relación afín a una pareja en la que medie o haya mediado o no cohabitación.

C. Atención a las víctimas de violencia Doméstica y violencia Intrafamiliar

Conjunto de servicios de atención social, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral, prestados bajo el principio de multidisciplinariedad e integralidad, que incluye, por tanto, la información a las víctimas, la atención psicológica, el apoyo social y acompañamiento, el asesoramiento legal, el apoyo educativo a la unidad familiar, la formación dirigida al desarrollo personal y la adquisición de habilidades en la resolución de conflictos.

D. Protocolo de atención integral a las víctimas de violencia Doméstica y violencia Intrafamiliar

Modelo normativo sobre el procedimiento y servicios de atención a las víctimas de violencia contra la mujer que ha de identificar las pautas de actuación adecuadas y el conjunto de las buenas prácticas aplicables que permitan a los distintos operadores del sector justicia y otros que tengan que cooperar en la atención integral y la protección a las víctimas contar con las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo de la manera más eficiente, que incluye:

- a) Los principios rectores de la actuación intersectorial y multidisciplinario de los diferentes actores que participan en el proceso, o ruta crítica de intervención.
- b) Pautas de actuación en los ámbitos de salud, policial, judicial, de los servicios sociales, de la asistencia jurídica y educativo, definiendo las concretas tareas y responsabilidades que a cada uno corresponden.
- c) Modelo de centro o unidad de atención integral a las víctimas de violencia contra la mujer, determinando los principales instrumentos que debe emplear cada actor en su cometido concreto.

E. El proceso de la violencia

La violencia contra las mujeres es una violencia **estructural**. No se debe a rasgos singulares y patológicos de una serie de individuos, sino que tiene rasgos estructurales de una forma cultural de definir las identidades y las relaciones entre los hombres y las mujeres. La violencia contra las mujeres se produce en una sociedad que mantiene un sistema de relaciones de género que perpetúa la superioridad de los hombres sobre las mujeres y asigna diferentes atributos, roles y espacios en función del sexo. Hasta hace no muchos años, la restricción en el desarrollo personal y social de las mujeres, la exigencia de su dedicación exclusiva a la familia, su deber de acatar la autoridad masculina, eran consideradas como algo “normal” y “natural”, validado por las costumbres y la ley. En ese contexto se toleraba socialmente que los hombres utilizaran la violencia para afianzar su autoridad.

La violencia contra las mujeres es además **instrumental**. El poder de los hombres y la subordinación de las mujeres, que es un rasgo básico del patriarcado, requiere de algún mecanismo de sometimiento. En este sentido, la violencia contra las mujeres es el modo de afianzar ese dominio. La violencia Doméstica y violencia Intrafamiliar más que un fin en sí mismo, es un instrumento de dominación y control social. Y en este caso se utiliza como mecanismo de mantenimiento del poder masculino y de reproducción del sometimiento femenino.

Los hombres maltratadores han aprendido a través del proceso de socialización que es diferente para mujeres y hombres que la violencia es la mejor forma de conseguir el control y dominar a la mujer.

En el caso que aquí venimos completando, de violencia Doméstica y violencia Intrafamiliar en el ámbito de la pareja, lo más frecuente es el comienzo del maltrato con conductas de abuso psicológico al inicio de la relación, que suelen ser atribuidas a los celos del hombre o a su afán de protección de la mujer. Suelen ser conductas restrictivas y controladoras que van minimizando la capacidad de decisión y autonomía de la mujer, produciendo dependencia, aislamiento y temor, como por ejemplo el control sobre la ropa, las amistades o las actividades.

El aumento progresivo de la violencia puede extenderse durante un largo periodo de tiempo, y suele ser difícil para la víctima darse cuenta del proceso en el que está inmersa. La **Teoría del Ciclo de la Violencia** de Leonor Walker plantea que este fenómeno comprende tres fases:

- **Acumulación de tensión:** Se caracteriza por una escalada gradual de la tensión, donde la hostilidad del hombre va en aumento sin motivo comprensible y aparente para la mujer. Se intensifica la violencia verbal y pueden aparecer los primeros indicios de violencia física. Se presentan como episodios aislados que la mujer cree puede controlar y que desaparecerán. La tensión aumenta y se acumula.
- **Explosión o agresión:** Estalla la violencia y se producen agresiones físicas y/o psicológicas y/o sexuales. Es en esta fase donde la mujer suele denunciar o pedir ayuda.
- **Calma o reconciliación o “luna de miel”:** En esta fase el agresor manifiesta que se arrepiente y pide perdón a la mujer. Utiliza estrategias de manipulación afectiva (regalos, caricias, disculpas, promesas) para evitar que la relación se rompa. Por lo tanto, esta estrategia por parte de la pareja, provoca que la mujer, termine pensando que todo cambiará.

En la medida que los comportamientos violentos se van afianzando y ganando terreno, la fase de reconciliación tiende a desaparecer quedando sólo las fases de tensión y de agresión. Es entonces cuando las mujeres suelen plantearse con mayor frecuencia la separación y/o buscan ayuda y es también en ese momento, cuando los episodios violentos se agravan, son cada vez más frecuentes y el riesgo de muerte a manos de su agresor se incrementa.

A lo largo del proceso de la violencia la mujer sufre una pérdida progresiva de autoestima, y pierde también las esperanzas de cambio de la situación, aumentando la sumisión y el miedo hacia el agresor.

Para el hombre maltratador será la ratificación de que su estrategia funciona.

Todo esto dificulta que la mujer pueda poner fin a la relación.

Por eso, cuando una mujer pide ayuda, debe recibir en todas las ocasiones apoyos concretos para cambiar su situación, respetando y no culpabilizándola por sus decisiones. Para que sea consciente del peligro que corre, es importante que comprenda que la violencia continuará e irá en aumento y que no podrá corregir la conducta de su agresor.

Esta dinámica permite entender por qué muchas mujeres, aún cuando estén sufriendo actos de violencia, no se separan de su agresor, por qué retiran las denuncias, llegan a pedirle a la policía que deje libre al agresor, que se suspendan las medidas de seguridad o por qué denuncian una y otra vez y, con la misma frecuencia, retiran la denuncia o se retractan de sus declaraciones anteriores sobre las violencias sufridas...

III. Principios rectores

Principios rectores

- a) **IGUALDAD.** La atención prestada a las víctimas de violencia contra la mujer en el marco del presente protocolo deberá garantizarse sin ningún tipo de discriminación. El origen social, étnico, la edad, la orientación sexual, el estado civil, las ideas religiosas o políticas, la condición física o psicológica serán tomados en cuenta únicamente para establecer prioridad en la atención en razón a la especial necesidad o vulnerabilidad, pero nunca constituirán motivos que impidan el acceso a los distintos servicios o que indirectamente influyan en la calidad de las prestaciones.
- b) **PREVENCIÓN.** Una de las finalidades últimas de este protocolo es impedir que las situaciones de violencia se repitan hacia las víctimas en los contextos de convivencia. Otra es que a nivel social pueda contribuir a cortar el círculo de la violencia en el que muchas mujeres se hallan sumidas y en tercer lugar, que los mensajes que se lancen desde las instituciones involucradas en el protocolo contribuyan a prevenir las actitudes violentas entre niños, niñas y adolescentes.
- c) **PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD EN LA ATENCIÓN.** Toda la información que se revele en los procesos de atención a las víctimas considerará la legislación sobre protección de los datos personales y en cualquier caso respetará el derecho a la intimidad y a la protección de la propia imagen de las entrevistadas. Las entrevistas se realizarán en lugares privados, lo más recogidos y agradables posibles, respetando las circunstancias y el estado emocional en el que la víctima se encuentre y los profesionales actuarán respetando la cláusula de confidencialidad en todos los casos.
- d) **ASISTENCIA INTEGRAL Y DE PROXIMIDAD.** Existirá una valoración personalizada que permita determinar las necesidades de cada caso, poniéndose a disposición de las víctimas de violencia contra la mujer todos los recursos, servicios y prestaciones más idóneos y más próximos a la víctima.
- e) **COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS.** Las máximas que dirigen las actuaciones contenidas en este protocolo son la coordinación entre los distintos sectores institucionales (justicia, seguridad, servicios de atención social y ámbito educativo) y las pautas colaborativas entre instituciones. Sin que se produzca esta toma de conciencia y este compromiso interinstitucional, la articulación de las medidas aquí contenidas no será posible.

- f) **EVITAR LA VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA.** La también llamada “revictimización” es una de las “patologías” o falencias más habituales de los servicios de atención a las víctimas, en la medida en que las intervenciones de los profesionales pueden ocasionar que la víctima reviva de forma traumática episodios del ciclo violento. La sensibilización y capacitación de los profesionales en este sentido es el mejor instrumento para evitar estas situaciones, garantizando que las víctimas sufren las menores molestias posibles al ser atendidas.
- g) **POTENCIACIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LA MUJER.** El empoderamiento de las mujeres es un fin en sí mismo en todas las actuaciones en materia de violencia contra la mujer. Permite que las mujeres adquieran herramientas psicosociales para afrontar los conflictos de manera más adecuada, que recompongan su autoestima después de los procesos de degradación personal a los que han estado sometidas y que dispongan de recursos profesionales productivos y ayudas sociales que posibiliten iniciar una vida autónoma, sola o en compañía de sus hijos e hijas.
- h) **VALORACIÓN, DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL.** Las intervenciones en el ámbito de la atención por los trabajadores o asistentes sociales deben iniciarse con el estudio del caso, continuar con la valoración de las circunstancias y las opciones y la toma de decisión entre la atención directa o la derivación a otros servicios. La derivación habitualmente se producirá entre los servicios de atención más básicos o generales (servicios de salud por ejemplo) a aquellos más especializados (atención a víctimas, o especializados para mujeres, servicios de orientación jurídica, etc.) y requiere un conocimiento exhaustivo y actualizado de los servicios disponibles en el ámbito geográfico concreto de actuación. Sin coordinación previa entre las instituciones la derivación no es posible.
El seguimiento que se realiza a las víctimas debe modelarse conforme a su situación, siendo más intenso cuando su situación es más grave, desde la entrevista semanal hasta el seguimiento cada dos meses.
- i) **EFICACIA Y CELERIDAD DE LAS ACTUACIONES.** Muchas de las situaciones que se van a afrontar a través de este Protocolo requieren de actuaciones inmediatas. Estas actuaciones precisan de una articulación ágil y eficaz de los procedimientos y la respuesta de las instituciones. En muchos casos de ello dependerá la seguridad y protección de la víctima.
- j) **ESPECIALIZACIÓN.** Ha de añadirse que en este ámbito debe tenderse a hacer efectivo el principio de especialización, que implica la capacitación y formación específica y especializada sobre cuestiones de género, relacionadas con la igualdad y la no discriminación y los derechos de las mujeres de los distintos colectivos profesionales que intervienen a lo largo de todo el proceso de atención y protección a la mujer víctima de violencia contra la mujer, como medio de facilitar el trato cercano y confiado a las víctimas.

IV. Marco normativo nacional e internacional

Los instrumentos nacionales e internacionales más relacionados con el tema de violencia contra la mujer se constituyen esencialmente de las declaraciones de las Naciones Unidas y la Convención de la Organización de los Estados Americanos siguientes:

1	Constitución de la República
2	Ley Especial Contra la Violencia Doméstica*
3	Código Penal
4	Código Procesal Penal
5	Convención de los derechos políticos de la mujer del 20 de diciembre de 1952
6	Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer de 1979
7	Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer de 1993
8	Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer "Convención de Belem Do Pará" de 1994
9	Convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, de 27 de junio de 1989

* Aprobada por Decreto Legislativo n° 132-1997 de 15 de noviembre, modificada por Decreto Legislativo n° 253-2005 y 35-2013.

V. Coordinación institucional

Las instituciones o actores involucrados en la ruta de atención de las denuncias son las siguientes: las Secretaría de Seguridad, a través de las Direcciones Nacionales de Policía Preventiva, y de Investigación Criminal, del Ministerio Público, Dirección de Medicina Forense, y los Juzgados especiales contra la violencia doméstica y Juzgados no especializados, Defensa Pública, Juzgados de Ejecución de Sentencia, Cortes de Apelaciones.

Los mecanismos de coordinación entre los actores involucrados en la resolución de las denuncias desarrollan roles que tienen que ver con: la recepción, valoración e investigación de la denuncia; evaluación médico forense; medidas de seguridad y demás mecanismos de protección; procesamiento/sanción /sentencia/recursos; seguimiento a mecanismos de protección/ejecución de sentencia o sanción; servicios de atención, protección a la víctima y grupo familiar, de orientación y apoyo emocional a la víctima y reeducación del denunciado.

Mecanismos de coordinación y derivación

En la ruta crítica de atención a las denuncias, las instituciones involucradas establecen los siguientes mecanismos de coordinación, derivación, prevención y detección temprana de situaciones de violencia:

1. **Instituciones involucradas:** los centros educativos, servicios de salud y los servicios sociales, que deberán coordinarse por el ministerio público y la policía.
2. **Recepción, valoración, investigación:** instituciones involucradas la Policía Preventiva y la Policía de Investigación Criminal, bajo la dirección técnico-jurídica del Ministerio Público (Fiscalía Especial de la Mujer).
3. **Evaluación médico forense o servicios de salud:** si la víctima presenta lesiones o no, debe ser remitida por la Policía Preventiva, DNIC o Ministerio Público a la Dirección de Medicina Forense que realiza la evaluación del daño físico y psicológico, y los servicios de salud pública para la atención clínica.
 - En los lugares donde no existe médico forense, la víctima se remite al Centro de Salud más cercano.

4. Imposición de medidas de seguridad: estas deben ser impuestas por la Policía Preventiva, Ministerio Público y el Juzgado competente, y vigilar su cumplimiento hasta la celebración de la audiencia.

- Acompañamiento y protección a la víctima y sus hijos y testigos, en los supuestos en que resulte necesario.

5. Servicios sociales de atención y protección: las instancias policiales y judiciales coordinan con las ONG o alcaldías municipales (OMM) que cuentan con albergues o casas refugio en la derivación de las víctimas y sus hijos cuando se encuentran amenazados en su integridad física o moral por los denunciados, respetando los protocolos o políticas de atención institucional.

- Coordinan con las consejerías de familia dependientes de la Secretaría de Salud Pública en la derivación de las víctimas y su grupo familiar.
- En el caso de los denunciados coordinan con las Alcaldías, Consejerías de Familia y otras instituciones públicas o privadas que puedan colaborar para el cumplimiento de los mecanismos de protección, sentencias/sanciones que señalan procesos de rehabilitación y reeducación, trabajos comunitarios.

Ámbito de intervención	Coordinación interinstitucional										
	PNP	DNIC	MP	Juzgados VD/ no VD/ penal	Def. Púb.	Medicina Forense	Corte apel.	Juzg. Ejec.	Alcald. OMM	ONG Casa Ref.	Cons Fam.
Instancias de denuncia e investigación	•	•	•	•					•	•	•
Imposición mecanismos de protección y medidas de seguridad	•	•	•	•				•			
Evaluación física, psicológica de la víctima /lesiones			•			•					
Juzgamiento/ Sentencia/ sanción/recursos			•	•	•					•	•
Seguimiento medidas, sentencia/ sanciones	•	•									•
Servicios de atención/ protección/re educación: víctimas, grupo familiar, agresores	•	•									•

VI. Mujeres víctimas de violencia

Derechos de las víctimas

Debemos iniciar este apartado con el enunciado del derecho básico y fundamental en la materia, que se recoge en el artículo 3 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, de Belem do Pará, de 1994: *“Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.”*¹

Una vez que la misma se ha producido, la víctima de violencia Doméstica y violencia Intrafamiliar tiene, en primer término, **una serie de derechos asociados al procedimiento judicial**, encabezados, por *el derecho a ser informada desde su primer contacto con la autoridad competente, cualquiera que ésta sea, de los derechos que le asisten*. Entre dichos derechos se incluirán, en todo caso:

- a) *El derecho a la defensa jurídica gratuita*, entendida como el derecho a la asistencia/defensa y representación/patrocinio legal en todas las fases del proceso penal y civil derivado de la violencia doméstica y violencia intrafamiliar, a través de un abogado/a particular sufragado/a por el Estado o a cargo del presunto agresor y con formación especializada en violencia doméstica y violencia intrafamiliar, que le asistirá y representará desde la interposición de la denuncia ante la policía o fiscalía hasta la finalización del proceso por resolución firme. La gratuidad alcanzará igualmente a las actuaciones judiciales.
- b) *El derecho a declarar en su propio idioma*, ya sea lengua extranjera o alguna de las lenguas o dialectos oficiales del país, debiendo ser asistida por intérprete en la interposición de la denuncia, en la información de derechos y, en su caso, en la práctica de cualesquiera otras diligencias hasta la finalización del proceso. La asistencia de intérprete será siempre gratuita. En las zonas en que no exista intérprete oficial, la ausencia de intérprete podrá suplirse por la asistencia de persona de confianza de la víctima, que puede actuar como tal.
- c) *El derecho a obtener una respuesta oportuna y efectiva* de las autoridades involucradas en la prevención, asistencia, protección, sanción y erradicación de la violencia Doméstica y violencia Intrafamiliar.

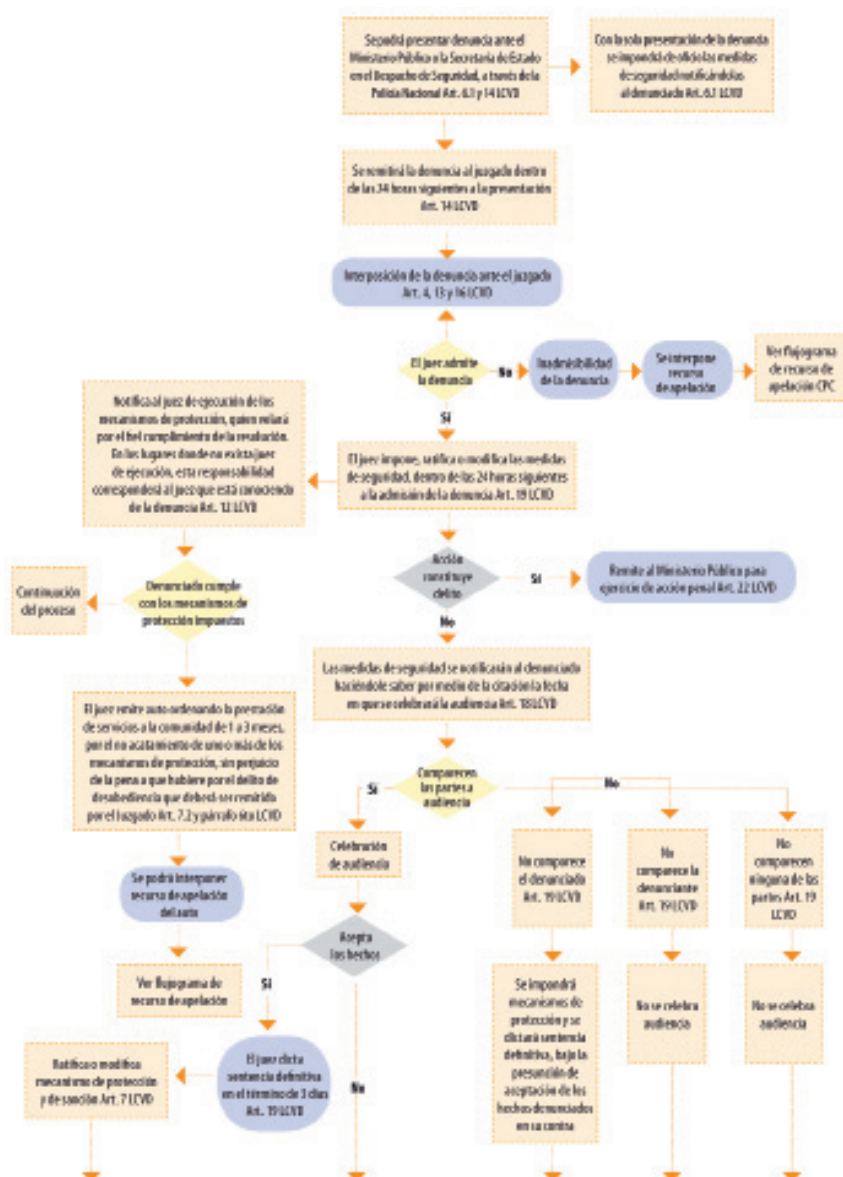
1. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”

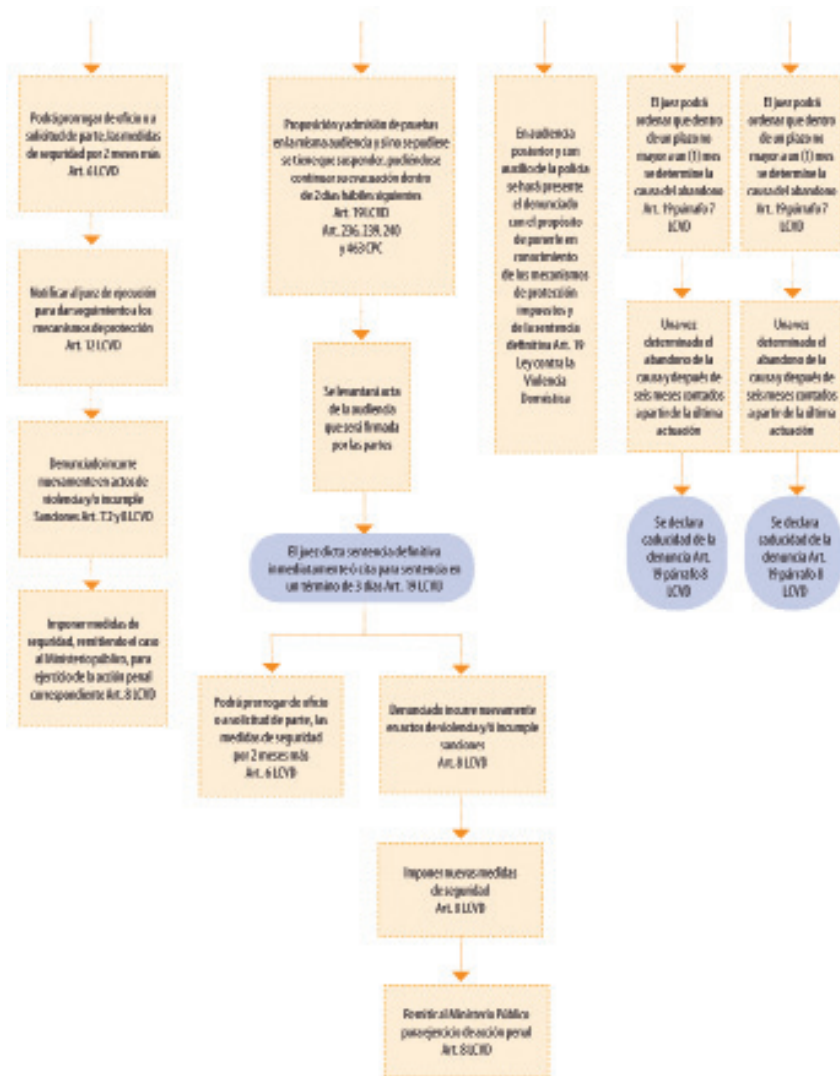
- d) *El derecho a contar con protección urgente* a través de las medidas de protección, de cualquier tipo que sean.
- e) *El derecho de la víctima y de sus familiares a recibir información sobre el desarrollo del procedimiento judicial y de ser oída personalmente por la autoridad competente*, en el momento procesal oportuno, debiendo ser notificada de cualquier decisión que pueda afectar a sus intereses, incluso cuando haya manifestado de forma expresa su intención de no denunciar o de no participar en el proceso.
- f) *El derecho a que su opinión sea tenida en cuenta* al tiempo de adoptar cualquier decisión en la investigación o en el procedimiento que pudiera afectarle, por ejemplo, para la solicitud y adopción de medidas de protección, para solicitar el sobreseimiento de las actuaciones, la acusación o, en su caso, cualquier salida alternativa del proceso.
- g) *El derecho de la víctima a participar en la investigación y en el procedimiento*, así como a conocer el curso de las actuaciones, accediendo a la información y resoluciones procesales y a todo aquello que puede referirse a su protección e intereses.
- h) *El derecho a solicitar que se incorporen a las actuaciones acciones concretas* para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos.
- i) *El derecho a la protección de su intimidad*, garantizando la confidencialidad de las actuaciones.
- j) *El derecho a recibir un trato humanizado*, evitando la revictimización.
- k) *El derecho a oponerse a la realización de inspecciones sobre su cuerpo* por fuera del estricto marco del orden judicial. En caso de consentirlas y en los peritajes judiciales tienen derecho a ser acompañadas por alguien de su confianza y a que sean realizadas por personal profesional especializado y formado con perspectiva de género, preferentemente de sexo mujer.

Además de los derechos procesales que corresponden a las víctimas de la violencia Doméstica y violencia Intrafamiliar en el ámbito de los procedimientos judiciales, deben contemplarse, también, como derechos de la mujer **los relativos a la atención y asistencia social integral** que la permitan superar las graves consecuencias físicas y/o psicológicas derivadas de la misma, y recuperar su autonomía personal y rehacer su vida. En particular:

- *En el área social*: la recepción de las víctimas, el estudio de su situación personal, familiar, laboral y social, la concreción de las necesidades de la víctima, información y orientación sobre recursos asistenciales y económicos disponibles, coordinación con otros recursos sociales o residenciales, y el acompañamiento y/o seguimiento en las diferentes instancias de la investigación y del proceso judicial.
- *En el área psicológica*: la atención psicológica de urgencia; la evaluación de la situación emocional de la víctima y las posibles consecuencias psicológicas del delito o violencia sufridos, potenciando la autonomía personal, y coordinándose con otros profesionales terapéuticos y recursos sanitarios.

VII. Ruta de atención a la denuncia





A) Secretaría de Seguridad

Corresponde a la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad proponer la política nacional de seguridad interior, formular programas, planes, proyectos y estrategias en el marco de la política pública aprobada, así como coordinar, dirigir y administrar la Policía Nacional.

La organización interna de la Dirección de Policía Nacional está dividida en seis direcciones nacionales entre estas, la de Policía Nacional Preventiva (PNP) y de Investigación Criminal (DNIC) son las dos instancias policiales que tienen una intervención directa en la atención de las denuncias de VD y VIF.

Principios que deben regir la actuación policial:

- **Rapidez en la atención:** la intervención debe ser rápida e Inmediata, para evitar que continúen los actos violentos.
- **Respeto de derechos:** se debe tratar a la denunciante como una víctima, pero sobre todo como sujeto de derechos o sea que se le debe dispensar un trato respetuoso.
- **Actitud profesional:** como servidores públicos, la policía que atienda a las víctimas deben demostrar profesionalismo y ética en cada caso que atienda. Implica, que se debe evitar transmitir sus sentimientos a las mujeres, y que sus experiencias de vida, prejuicios y juicios de valor influyan sobre la atención que brindan.
- **Empatía con la denunciante:** la atención que reciben las mujeres en el momento de interponer la denuncia es clave en el desarrollo de la ruta crítica que siguen. Es imprescindible que en este primer contacto institucional se sientan comprendidas, respetadas y bien atendidas, para que no se retraigan y decidan continuar su proceso. Es importante que perciban que existe una ley e instituciones que las protegen y que hay actuaciones que pueden realizarse de inmediato para prevenir consecuencias aun más graves de los actos de violencia.

La Policía

Entre sus principales atribuciones está el practicar las primeras diligencias ante un hecho delictivo, previo a la intervención de cualquier diligencia de investigación criminal o servicios de investigación del Ministerio Público, así como de colaborar con las organizaciones encargadas de proteger entre otros a las madres solteras y grupos vulnerables.

En las distintas postas de los distritos de la Policía Nacional Preventiva, es donde comúnmente las víctimas acuden a presentar las denuncias, las que posteriormente son remitidas o derivadas en el término de 24 horas al Juzgado competente.

Se coordina en asuntos de su competencia con policía de investigación y/o fiscalías especiales o de turno, Juzgados especializados y no especializados, medicina forense, alcaldías municipales (OMM), casas refugio, ONG.

Está bajo la dirección técnica-jurídica del Ministerio Público y la dirección legal, jerárquica y administrativa de la Secretaria de Seguridad, es la responsable de la investigación de delitos comunes y de instancia particular y tiene como objetivo proveer a los fiscales de los elementos probatorios necesarios en el ejercicio de la acción penal pública.

El nivel de intervención y coordinación de la Policía de Investigación (DNIC) en los casos por denuncia de VD conforme a lo establecido en la ley contra la violencia doméstica y las atribuciones que le otorga la Ley Orgánica de la Policía (LOPN) y en los casos de violencia intrafamiliar por lo prescrito en el Código Procesal Penal (CPP) que entre

otras está obligada a realizar las diligencias investigativas de las denuncias o delitos que lleguen a su conocimiento e informar inmediatamente en el término de 6 horas al agente fiscal especializado o de turno y este en el término de 24 horas presentar la denuncia ante los juzgados competentes.

Coordina sus actuaciones con el Ministerio Público y Policía Nacional Preventiva, Juzgados especializados y no especializados, Medicina Forense.

Inicio de la investigación

La investigación se puede iniciar de oficio o a instancia de parte por denuncia interpuesta por la propia víctima o por terceros ante los servicios de policía, ante el Ministerio Público o ante cualquier otra autoridad competente.

En todo caso, quien reciba la denuncia debe iniciar de forma inmediata las diligencias oportunas, para asegurar la protección de la víctima y la sanción al agresor, procediendo a imponer las medidas de protección de forma inmediata.

Colaborará en la realización de las investigaciones ordenadas por el Fiscal y los Juzgados y auxiliará a éstos en la ejecución de las sentencias, y el cumplimiento de las sanciones, medidas de seguridad y demás mecanismos de protección impuestos por el órgano judicial.

Una buena atención policial en los casos de violencia contra las mujeres es de vital importancia, ya que con esta intervención se pueden evitar daños graves en la integridad física, psíquica, sexual y económica de la mujer. El área policial se encarga de ofrecer atención inmediata en casos de emergencia o de flagrancia, asesoría y orientación legal a las mujeres víctimas de violencia.

En estos casos, deben tenerse en cuenta los aspectos psicológicos que afectan a la víctima. La actuación ideal, sería la disposición de una oficina de atención integral en las propias dependencias policiales, para poder apoyarse en esta área sobre un o una psicólogo/a y un o una trabajador/a social.

Ello tiene como objeto,

- Brindar primeros auxilios emocionales a la mujer.
- Concienciar a las mujeres para que se hagan aconsejar y/o acompañar por ONGs, asociaciones, defensores.
- Elaborar una estrategia de seguridad.

La policía tiene que gestionar lo necesario para que las mujeres reciban una atención social adecuada por parte de los demás prestadores de servicios sobre todo en los momentos de crisis. Esto es fundamental si no existe casa refugio.

Si no existiera una oficina de atención integral a la víctima, o no se dispusiera del auxilio de un/una trabajador/a social, la Policía deberá auxiliar a las mujeres, realizando las siguientes tareas:

- Realizar visitas domiciliarias o patrullajes.
- Facilitar grupos de apoyo.
- Establecer la coordinación interinstitucional necesaria.

En caso de flagrancia

Recibida llamada telefónica de auxilio o requerimiento de intervención en la policía a través de la víctima o del aviso de terceras personas; es importante que el reporte o parte policial refiera el contenido exacto de las manifestaciones y requerimiento realizados por el/la interlocutor/a. En concreto deberá recoger: lugar de los hechos, nombre de la persona que realiza la llamada o aviso, identidad y relación con la víctima, identidad del agresor, identidad de posibles testigos, hechos de violencia relatados, referencia a posibles lesiones físicas, ruidos ambientales de la llamada (llantos, gritos, golpes, rotura de objetos) pudiendo ingresar en el domicilio, sin autorización de su propietario/a ni de la autoridad judicial, siempre que actúen salvaguardando la integridad física de la víctima, de sus hijos o de terceras personas que puedan hallarse en el domicilio o lugar cerrado. Una vez ingresen en el domicilio, deberán comunicarlo al Ministerio Público, de manera inmediata o, en todo caso, dentro de las 6 horas siguientes.

Con el fin de garantizar la protección de la víctima, si al llegar al lugar de los hechos no fuera posible constatar de manera directa la flagrancia del delito (silencio en el interior del local cerrado, luces apagadas, ausencia de personas en el exterior), los servicios de policía deberán hacer todas las comprobaciones necesarias para descartar que se trata de una llamada falsa, confirmaran que la dirección del lugar es la correcta y comprobaran los hechos con los vecinos/as o posibles testigos de los hechos. Si concluyeran que existe un posible riesgo de perpetración de nuevo hecho violento o fuera necesario para practicar la detención del presunto agresor, procederán a ingresar en el domicilio, sin autorización del propietario/a, como en el supuesto anterior.

En caso de duda, deberán consultar previamente a ingresar en el domicilio con la autoridad competente, preferiblemente con el/la Fiscal representante del Ministerio Público de guardia o turno.

Con el fin de garantizar la protección de la víctima, se procederá a separar a la víctima y al posible responsable, quien será reducido y/o detenido, si fuera necesario, y a situar a la víctima en lugar seguro, evitando la confrontación visual con el agresor. Deberán al mismo tiempo preservar la escena de los hechos violentos.

Una vez la víctima sea trasladada a un lugar protegido y lejos de la confrontación visual o auditiva con el agresor, los servicios de policía recogerán la primera manifestación espontánea de la víctima sobre lo sucedido. Igualmente se observará si la víctima presenta lesiones físicas externas así como su estado anímico al tiempo de narrar los hechos. En el parte/reporte policial se incluirá el reporte de los agentes que se personaron en el lugar, donde deberán hacerse constar las manifestaciones espontáneas de la víctima, así como las lesiones observadas y, en su caso, el estado de la víctima y el lugar en que sucedieron los hechos.

Los servicios de policía deberán informar a la víctima de los derechos que le asisten, en particular, su derecho a recibir asistencia médica, si lo precisara, a interponer denuncia, a designar un abogado/a que le represente en el proceso, a obtener reparación del daño causado así como a solicitar la adopción de medidas de protección en cualquier momento de la investigación o procedimiento. Se documentará por escrito esta diligencia de información de derechos.

Los servicios de policía observarán la escena, realizando una primera valoración de lo sucedido (objetos rotos, mobiliario roto o golpeado, prendas rotas o por el suelo, desorden, manchas de fluidos por pared o suelo, presencia de armas...) y describiéndolo con el mayor detalle posible en el acta respectiva, que se unirá al reporte policial.

Con relación al agresor, procederá a leerle sus derechos en caso de estar detenido, así como adoptar todas las cautelas necesarias para evitar que genere cualquier situación de riesgo para la víctima o los agentes, tratando de calmarle y consignar una relación de los hechos. Los agentes observarán igualmente su estado físico y anímico así como la posible influencia de bebidas alcohólicas o drogas. Todas las observaciones que realicen serán reflejadas en el informe que se incluirá en el reporte policial a remitir a la fiscalía.

La policía efectuará un registro corporal del agresor, a fin de incautar aquellos objetos que tenga en su poder y que puedan estar relacionados con el hecho violento o puedan ser propiedad de la víctima (llaves, teléfono, etc.).

En caso de flagrancia o hechos graves, los agentes de la policía procederán a la aprehensión/detención del posible responsable para su inmediata puesta a disposición del Ministerio Público. En cualquier otro caso deberá ser debidamente identificado a fin de facilitar su posterior localización por la fiscalía.

En caso de que el presunto agresor lo precise, será trasladado a un centro médico para ser tratado de las lesiones que pueda presentar.

Si existen testigos de los hechos, deberán ser identificados, consignando su nombre completo, cédula de identidad o identificación similar, domicilio y número de teléfono, a fin de garantizar su localización posterior.

En caso de denuncia ante la Policía

La recepción de las denuncias fuera de los casos de emergencia, es una de las tareas importantes de la policía. Se actuará bajo los siguientes criterios:

Para la presentación de una denuncia e imposición de medidas de seguridad a que se refiere la Ley Contra la Violencia Doméstica, no se requerirá la representación de un profesional del Derecho.

La denuncia de violencia doméstica podrá presentarla

- La mujer directamente afectada.
- Cualquier miembro del grupo familiar.
- Cualquier funcionario, empleado público o profesional que por razones de su cargo tenga contacto con la mujer directamente afectada o con algunos de los integrantes de su grupo familiar.
- Las instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales que asuman la defensa de los derechos fundamentales de la mujer y que en general, atiendan la problemática familiar y los derechos humanos.
- Cualquier persona que conozca del caso.

La denuncia se presentará en forma verbal o escrita

Hay que recordar que cuando una mujer busca ayuda, llega en situación de crisis y que tomó la decisión de denunciar porque ha vivido actos de violencia, por lo que se debe valorar la gravedad de la situación.

Requerimientos para la atención en la policía

- La recepción de la denuncia se debe realizar en un lugar privado, donde pueda tomarse la declaración a la mujer con tiempo suficiente, y sin la interferencia de otras personas.
- Se deben utilizar los formatos diseñados para estos efectos.

Registro de las denuncias

Todos los casos de violencia doméstica y de violencia intrafamiliar que se atiendan, se deben registrar en un libro de entrada, con el fin de ir conformando un sistema estadístico de los casos. El conocimiento de la incidencia de estos hechos, permite, no solo un mejor tratamiento del tema por parte de la policía, sino que constituye un elemento muy valioso de trabajo, en el que pueden apoyarse otras instituciones con competencia en la materia.

Imposición de medidas de seguridad

- **Valoración del riesgo**

La entrevista va a permitir tener suficiente información para valorar el riesgo vital o la situación de peligro que enfrenta la mujer y las posibles soluciones a su problema. Es imprescindible estimar el riesgo que corre la mujer en caso de que no se sienta del todo decidida a abandonar el hogar.

Para ello se le formularán a la mujer las preguntas que se contemplan en el documento que establece los parámetros de dicha valoración conforme a la “Escala de Valoración del Riesgo en Casos de Violencia Doméstica y/ o Intrafamiliar” que se acompaña como formato Anexo a este Protocolo, del que derivará la asignación de la existencia de un riesgo bajo, moderado o alto.

- **Formular una estrategia de seguridad**

Una vez valorado el riesgo vital o el peligro que enfrenta la mujer, se debe trazar una estrategia de seguridad. Si se considera que no se presenta un riesgo inmediato, se debe elaborar con ella un plan de protección. Si el riesgo es inmediato y se ha decidido abandonar el hogar, es recomendable dar las siguientes sugerencias:

- Elegir un momento en que la situación en el hogar sea tranquila.
- No dar ningún indicio de la intención de huida.
- Conocer previamente los lugares donde puede acudir.
- No difundir la dirección del lugar en el que se va a alojar.
- Evitar los lugares donde pueda encontrarse el agresor.
- Tener preparada una lista de teléfonos de amigos y familiares, y tener depositados en algún lugar de confianza la tarjeta de identidad, una agenda del centro de salud o del seguro social.
- También tendrán accesibles su partida de nacimiento y las de sus hijos/as, así como documentos que acrediten sus estudios, contratos de trabajo, o bienes que sean de su propiedad, que luego puede necesitar.
- Tener guardado dinero para cubrir las necesidades básicas, tarjeta del banco y tarjetas de crédito.
- Cosas de uso personal: toallas sanitarias, desodorante, cepillo dental, etc.
- Medicinas habituales y pastillas de planificar.
- Ropa para ella y sus hijas/os.
- Llaves.
- Pedirle a la policía que la acompañe a retirar sus pertenencias.
- Las precauciones enumeradas no son únicas ni limitativas: tienen que servir de orientación en la determinación de las que puedan resultar más útiles para la mujer y su familia, en cada caso.
- Debe tenerse presente que el hecho de salir del domicilio tiene que ser, siempre, el último y más extremo recurso. Por el contrario, la medida de seguridad que debe constituir la regla en supuestos de riesgo para la víctima, debe ser el agresor quien abandone la vivienda familiar.

- La Ley Contra la Violencia Doméstica atribuye a la policía la facultad de imponer medidas de seguridad:

Medidas de seguridad

Son aquellas que persiguen evitar y detener la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y prevenir males mayores. Con la sola presentación de la denuncia se impondrán de oficio, por el juzgado competente, por el Ministerio Público o la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, a través de la Policía Nacional.

En la unidad policial debe haber formularios disponibles donde se consignen que medidas de seguridad son impuestas su duración y otros datos.

Las medidas de seguridad deben ser leídas al denunciado en el momento de su imposición. De ser posible, se le debe entregar una copia escrita a la denunciante y al denunciando de la imposición de las medidas, advirtiéndole de las consecuencias de su incumplimiento.

La policía su papel de información y de guía a la mujer

Información sobre sus derechos, registro y remisión de la denuncia

- **Información**

Previo a la remisión de la denuncia, el personal de la policía facilitará a la mujer la información necesaria para que comprenda su caso y tome las mejores decisiones para resolver su situación.

- **Informarle sobre los recursos disponibles**

Se deberá informar a la mujer sobre los recursos sociales y teléfonos de emergencia disponibles. Se le debe dar el teléfono de la policía y recordarle que puede llamar o solicitar ayuda cualquier momento del día y en cualquier día de la semana.

- **Informarle sobre sus derechos procesales**

De acuerdo con el Art. 23 de la Ley Contra la Violencia Doméstica, las mujeres afectadas tienen los siguientes derechos procesales:

- Demandar el auxilio de la Policía Nacional, en cualquier circunstancia donde se vea amenazada su seguridad personal o la del grupo familiar;
- Demandar el auxilio de la Policía Nacional, mediante orden Judicial, para ejecutar lo establecido en el artículo 6 numeral 1) literal h) de esta ley;
- Ser respetada en el interrogatorio;
- Ser atendida para dictamen y reconocimiento por la Dirección de Medicina Forense, cuando fuere remitida por el Ministerio Público o Juzgado competente, o cualquiera de las instituciones igualmente competentes para imponer medidas de seguridad.
- No ser sometidas a pericias médicas o psicológicas inadecuadas o innecesarias.

- No ser sometida a confrontación con el denunciado, si no está en condiciones emocionales para ello.

- **Informarle sobre sus derechos sociales**

Además de informarle de su derecho a recibir la atención social que fuere precisa, se aclarará a la víctima que la ausencia del domicilio por temor a su integridad física o psíquica, o la de sus hijos/as, no supone abandono de hogar.

Tiene derecho a recibir información sobre las medidas de seguridad que le fueron impuestas al denunciado (tipo de medidas, tiempo de duración, cumplimiento, etc.).

- En caso que exista una reiteración de las agresiones se procederá a denunciar al agresor por el delito de violencia intrafamiliar.
- Que el hecho que haya denunciado por violencia doméstica o intrafamiliar no excluye la posibilidad de que denuncie por otro tipo de delitos de que pudiera haber sido también víctima.
- Explicarle que si ella no quiere denunciar puede hacerlo la policía, siempre y cuando se trate de delitos perseguibles de oficio.
- Darle información sobre la existencia de casas refugio y organizaciones de mujeres a las que puede acudir.
- Que tiene derecho a denunciar a cualquier profesional del Estado que la haya atendido cuando sienta que ha recibido un trato ofensivo, degradante, humillante o discriminatorio. Se le debe explicar que nadie debe efectuar comentarios sobre su situación que tiendan a culparla. Por ejemplo, en los delitos sexuales, hay que explicarle que nadie debe decirle que tuvo la culpa de una violación o una agresión sexual porque andaba sola, era de noche, o andaba vestida de manera provocativa.
- Al proporcionar información sobre estos derechos se puede lograr que las mujeres se reconozcan a sí mismas como sujetos de derechos, y que en base a ello pueden tomar las decisiones que más les convenga.

Remisión a la Fiscalía o al Juzgado

La Policía Nacional, una vez recibida la denuncia e impuestas las medidas de seguridad, remitirá las diligencias al Ministerio Público o al Juzgado competente, donde no exista Ministerio Público, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes. Si se hubiere detenido al agresor, la Policía dará cuenta inmediata al Ministerio Público o, en todo caso, dentro de las 6 horas siguientes a la detención.

- **Se deberán remitir a los juzgados o la Fiscalía el reporte policial, con los siguientes documentos:**
 - Copia de la denuncia.
 - Acta de imposición de medidas.
 - Acta de detención.
 - Acta de lectura de derechos del imputado.
 - Acta de lectura de derechos a la víctima.

- Acta de declaración de la denunciada.
- Acta de declaración de testigos u otras pruebas practicadas.
- Acta de decomiso, junto con las evidencias y efectos que hayan sido recolectadas.
- Copia de las denuncias anteriores si las hubiera.
- **Documentos que se le deben dar a la denunciante:**
 - Copia de su denuncia. En caso de que ello suponga un riesgo para la víctima, se le entregará a persona de su confianza designada por ella.
 - Copia del acta de imposición de las medidas de seguridad impuestas.
- **Seguimiento de la denuncia**

La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad será competente para vigilar la ejecución y el cumplimiento de las medidas de seguridad que se impongan, cesando en esta obligación hasta la celebración de la audiencia que será asumida por el juzgado correspondiente. Asimismo compete al Juzgado de ejecución el cumplimiento de las medidas impuestas, debiendo solicitar el auxilio policial en caso necesario.

Sensibilización, formación y capacitación en género e investigación desde la perspectiva de género

- El Instituto de Educación Policial incluirá en sus planes de formación de acceso a la Policía, actividades de sensibilización en género y capítulos específicos sobre los delitos de violencia contra la mujer, cuestiones relacionadas con la igualdad y la no discriminación así como también el género y los derechos de las mujeres.
- Todos/as los/las Policías que se incorporen a una unidad especializada en violencia contra la mujer deberán recibir previamente sensibilización y formación específica sobre la materia.

B) Ministerio Público

Es la institución del Estado que representa, defiende y protege los intereses generales de la sociedad; colabora y vela por la pronta, recta y eficaz administración de justicia, especialmente en el ámbito penal.

Fiscalía Especial de la Mujer (FEM)

Es una dependencia especializada del Ministerio Público, creada en julio de 1994, cuyo propósito es representar y defender a la mujer en todos sus derechos, además de velar por el cumplimiento de las leyes que norman, regulan y protegen la violación de los derechos humanos de la mujer.

Esta Fiscalía Especial, estructuralmente está integrada por cinco áreas: Instrucción, psicosocial, violencia doméstica, delitos contra la vida (muertes violentas y femicidios), oficina de atención integral de la víctima.

- *Área violencia doméstica*: representa a la mujer en los juzgados especializados y no especializados, en las audiencias previa asistencia técnica y jurídica gratuita a las víctimas.
- *Área de atención integral de la víctima*: los módulos de atención integral (MAI), es la unidad en la cual se brinda atención integral a las víctimas, con el propósito de atenderla de forma expedita y personalizada, evitar la revictimización y los efectos e impacto del delito, está conformada por un equipo interdisciplinario de profesionales: Abogados, Trabajadores Sociales, Psicólogos y Médicos Forenses.

Si la víctima acude al Ministerio Público a interponer la denuncia, el fiscal especializado o de turno debe remitir la denuncia al juzgado competente en el término de 24 horas.

En los casos de VD, corresponde al Ministerio Público, la Policía Preventiva y juzgados competentes, la imposición de las medidas de seguridad al denunciado y vigilar su cumplimiento hasta la celebración de la audiencia.

Coordina con las siguientes instituciones:

Con la Policía Preventiva o de investigación criminal (imposición de medidas de seguridad e investigación de los delitos en general), medicina forense, la comisión interinstitucional de seguimiento de la LCVD o redes Interinstitucionales de justicia (planteamiento, solución y acuerdos a problemas de coordinación, seguimiento sobre el tema de VD), las oficinas municipales de la mujer (OMM), consejerías de familia y otras instituciones públicas o privadas (ONG) que presten servicios de albergues temporales o casa refugio a la víctima y su grupo familiar.

a. Función del Ministerio Público

La tarea del Ministerio Público es conducir la acción pública. Tiene un papel general de seguimiento de la delincuencia y de orientación de las repuestas a darle. El Ministerio Público puede pedir a las fuerzas policiales reforzar su acción sobre algunas prioridades.

También el Fiscal puede recibir las denuncias o actuar de oficio y aplicar las medidas de seguridad necesarias, remitiendo las actuaciones al Juzgado, acompañando a las mujeres y comprobando que se les fije la audiencia. Velará porque los procedimientos se tramiten con rapidez y se realicen las notificaciones y comunicaciones oportunas, especialmente en materia de medidas de seguridad y medidas cautelares que puedan imponerse al agresor en los casos en los que la víctima no sea parte en el proceso.

Participa en la práctica de las audiencias para la ratificación, modificación o prórroga de medidas de seguridad, cautelares y precautorias, y práctica de pruebas, así como cualquiera de las actuaciones judiciales que se realicen, ejerciendo la defensa de la víctima, y sosteniendo la acción pública durante la fase de enjuiciamiento.

a.1 Registro de casos de violencia doméstica y violencia intrafamiliar

- a) El Ministerio Público reforzará el sistema de registro de los casos de violencia contra la mujer.
- b) El sistema de registro deberá contar con información cualitativa y sustento tecnológico adecuado que permita disponer y proveer de datos fiables a las distintas instituciones públicas y privadas y que sirva como sustento para la toma de decisiones y para la elaboración e implementación de políticas generales y sectoriales adecuadas y oportunas.

a.2 Elaboración de estadísticas desagregadas por sexo y otras variables

- a) El Ministerio Público en coordinación con el resto de instituciones responsables de la prevención, asistencia, investigación, sanción y erradicación de la violencia Doméstica y violencia Intrafamiliar, reforzará el sistema estadístico que permita dar cuenta de la evolución de la criminalidad por razones de género y evaluar periódicamente la actuación del Ministerio Público.
El registro estadístico deberá cuantificar las diferentes formas de violencia ejercida, en particular elaborará un registro de las mujeres fallecidas por un acto de violencia Doméstica y violencia Intrafamiliar.
- b) El Ministerio Público en coordinación con el resto de instituciones elaborarán y publicarán anualmente los datos estadísticos obtenidos, a fin de que sirvan de sustento para la toma de decisiones, para la mejora de la lucha contra la impunidad y de la atención a las víctimas. Lo harán con el observatorio de las estadísticas de la violencia de Honduras

a.3 Unidades Especializadas del Ministerio Público en la investigación de delitos de violencia contra la mujer

Para responder a la violencia contra la mujer, la organización del Ministerio Público responderá a los siguientes principios:

- a) El principio fundamental en la investigación de los delitos de violencia contra la mujer es la especialización del Ministerio Público, dado que la naturaleza de los delitos y las condiciones de especial vulnerabilidad de las personas víctimas de éstos requieren un abordaje y atención especial.
- b) En virtud de lo anterior, el Ministerio Público fortalecerá o ampliará progresivamente las unidades especializadas en la investigación de los delitos de violencia contra la mujer, dotándoles de los medios personales, materiales y técnicos necesarios.
- c) En las fiscalías territoriales se crearán, progresivamente, fiscalías especializadas en violencia contra la mujer, con personal designado para la atención exclusiva o al menos prioritaria de esta sensible materia.
- d) En el caso de las fiscalías territoriales con limitaciones importantes de personal y siempre que el impacto de las denuncias de violencia contra la mujer no sea significativo, se optará por designar uno/a o varios/as fiscales con competencia para conocer de forma prioritaria de estos delitos, junto al resto de los asuntos de criminalidad común.

- e) Las dependencias de la fiscalía especializada en delitos de violencia contra la mujer, deberán acondicionarse físicamente para garantizar la protección de la víctima, la no confrontación con el posible agresor u otros testigos, así como para crear espacios que faciliten la confianza en el sistema de justicia. Deberán acondicionarse salas donde la víctima pueda esperar a ser atendida en compañía de sus hijos/as menores de edad, así como crear salas de recogida de denuncia que garanticen la privacidad y la confidencialidad, en un ambiente cálido y cercano a la víctima.
Las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer contarán con una oficina de atención a la víctima cuya función consista, entre otras, en informar a la víctima de los derechos, recursos y servicios disponibles, asegurar la coordinación con los servicios policiales, sociales y judiciales y mantener informada a la víctima del curso de la investigación y del procedimiento. La oficina de atención a la víctima será igualmente responsable de valorar, en coordinación con otras instituciones como la policía o medicina forense, la situación de riesgo para la víctima, en base a la cual se adoptarán por la autoridad competente las medidas de protección oportunas. La oficina será responsable de informar a la víctima de las medidas adoptadas y del cese de las mismas, en particular la medida cautelar de prisión preventiva o provisional.
Para asegurar la atención directa y personalizada la víctima contará en la citada oficina con una persona designada de forma específica para el seguimiento de su caso.
- f) El Ministerio Público se dotará de sistemas de grabación y de cámaras Gesell para recibir denuncias y declaraciones, especialmente en el caso de víctimas menores de edad, como medio para asegurar el bienestar físico, psicológico, la dignidad y privacidad de víctimas y testigos y evitar la posible revictimización.
- g) Las víctimas de violencia contra la mujer recibirán atención de forma inmediata y prioritaria.

a.4 Audición de las víctimas

En caso de denuncia ante la Fiscalía, el Ministerio Público para recoger la denuncia, deberá actuar con perspectiva de género, adoptando todas las cautelas para evitar la revictimización. Para ello:

- a) Todo el personal que preste servicio en el Ministerio Público contará con formación especializada en atención a víctimas de violencia contra la mujer.
- b) La autoridad fiscal establecerá un adecuado contacto con la víctima, empleando la empatía, la escucha activa, y una posición cercana respetuosa.
- c) Deberá auxiliar a la víctima, examinar con ella el problema objetivamente, no minimizar ni dramatizar, ayudándole a la toma de decisiones.
- d) El fiscal ayudará a la víctima a la sistematización y puesta en orden de la información facilitada.
- e) No es conveniente proceder a la toma de declaración inmediatamente, es mejor que la víctima relate los hechos de forma libre, pueda desahogarse y después se proceda a sistematizar la información.
- f) Deberá estimularse la denuncia como acción que se emprende para romper una rela-

ción abusiva. Se debe entender el estado emocional de la víctima, y no juzgar su decisión en caso de no querer presentar denuncia o en el caso de retirarla posteriormente, evitando comentarios que culpabilicen a la víctima o minimicen el acto de violencia.

- g) El objetivo de la entrevista con la víctima será, no sólo conocer el hecho concreto de violencia que ha motivado la interposición de la denuncia, sino indagar los antecedentes de la violencia, esto es, hechos anteriores siempre que se pueda ubicar espacio y tiempo en que se produjeron.
- h) Durante la entrevista se indagará sobre las distintas formas de violencia que haya sufrido la víctima sea violencia física, psíquica, sexual o patrimonial. Para acreditar los diversos actos de violencia deberá reflejarse el lugar y fecha de comisión, los medios empleados, posibles testigos de los hechos, informes médicos anteriores, tratamientos médicos o psicológicos que haya seguido la víctima, datos referentes a su situación patrimonial.
- i) Del mismo modo la entrevista tendrá por finalidad valorar la situación de riesgo en que se encuentra la víctima, conforme a los parámetros a que aludiremos en su apartado correspondiente.
- j) Si la víctima presenta lesiones físicas que requieren asistencia de salud será trasladada por los servicios de policía o agentes de fiscalía, previamente a interponer denuncia, al centro médico donde reciba asistencia. El informe médico se incorporará a la denuncia.
- k) Si la víctima refiere haber sido víctima de violencia sexual, será trasladada a centro médico para recibir atención de las lesiones físicas, si las tuviere. Los miembros del instituto de medicina legal o equivalente deberán trasladarse al centro médico para aplicar el protocolo de atención a las víctimas de violencia sexual.
- l) En el caso de denuncia interpuesta ante los servicios de policía, el parte o reporte policial que incluya la denuncia interpuesta, datos de filiación de la víctima, agresor y posibles testigos, informe médico, referencia a denuncias previas interpuestas o medidas de protección acordadas, deberá ser remitido a la fiscalía sin dilación alguna.
- m) En caso de que la víctima manifieste su intención de no formular denuncia o de no participar en la investigación así como en caso de retractación, deberá dárseles las direcciones de asociaciones de víctimas o de mujeres para que puedan profundizar sus situaciones.
- n) Las quejas no seguidas deberán ser puestas a disposición de la fiscalía diariamente para que ella vigile si algunos actos no merecen intervención hasta si la mujer no lo desea.
- o) La denuncia, cualquiera que sea la autoridad competente para recogerla, deberá incluir toda la información que permita identificar a las partes, conocer el marco y circunstancias en que se desarrolla la violencia así como los hechos objeto de denuncia.

b. La tarea del Ministerio Público es dirigir la acción pública

b.1 Al Ministerio Público le corresponde la Dirección, Coordinación y Control Jurídico de las actividades que realicen los servicios de Policía

Tiene que recibir todos los reportes de la policía en las 24 horas siguientes al inicio de las investigaciones. La Policía informará al Ministerio Público de la práctica de cualquier detención o imposición de medidas de seguridad por violencia doméstica, o ingreso domiciliario, inmediatamente, y, en todo caso, dentro del plazo de 6 horas.

El Fiscal verificará que la víctima ha sido correctamente escuchada, que el presunto autor de los hechos también lo ha sido y que las investigaciones mínimas han sido realizadas correctamente.

b.2. Corresponde al Ministerio Público la investigación de los delitos

* **Al recibir una denuncia**, o parte/reporte policial, el Ministerio Público realizará las diligencias de investigación necesarias en el menor tiempo posible y con la debida diligencia, debiendo señalar y realizar las conductas tendientes a ejercer la acción que corresponda:

- El Ministerio Público tomará declaración de las personas que puedan aportar algún dato sobre la investigación.
- El Ministerio Público incorporará a la investigación todos los documentos que permitan acreditar la existencia de hechos previos de violencia, adjuntando testimonio de resoluciones judiciales condenatorias por hechos o delitos de violencia Doméstica y violencia Intrafamiliar, resoluciones por las que se haya aplicado la suspensión condicionada del proceso por delitos de la misma naturaleza o cualquier otra resolución judicial que muestre el carácter violento del posible responsable o la existencia de antecedentes previos de violencia. Del mismo modo se incorporará a las actuaciones documentación acreditativa de las medidas de protección acordadas y del cumplimiento de las mismas. En caso de desobediencia/desacato a la medida de protección, se hará igualmente constar en las actuaciones.
- Se incorporarán a la investigación, todos los informes médicos o psicológicos que acrediten la atención recibida por la víctima, como consecuencia de presuntas agresiones previas, así como los documentos relativos a la valoración del riesgo en que pueda encontrarse la víctima de la violencia doméstica.
- La víctima tendrá derecho a ser informada de la marcha de la investigación aunque no intervenga representada por abogado/a en el proceso. En cualquier momento que solicite del Ministerio Público información al respecto, deberá prestársele de forma clara, concisa y accesible. A tal efecto se tomarán en consideración posibles aportes que la víctima realice a la marcha de la investigación a fin de incorporar la práctica de nuevos medios de prueba.

c. Detención del presunto agresor

En caso de flagrancia tanto la Policía como cualquier persona puede detener al agresor, poniéndolo inmediatamente a la disposición del Ministerio Público.

d. Decisiones a adoptar por el Ministerio Público una vez finalizada la investigación

Una de las tareas más importantes del Ministerio Público es la de decidir si presenta el caso de inmediato al juzgado o no. Si le envía una convocatoria por la policía o por citación. O si se sigue el procedimiento como violencia doméstica (VD) o por delito de violencia intrafamiliar (VIF).

En cualquiera de los supuestos tiene que presentar el caso en los juzgados competentes en el término de 24 horas.

Para valorar si estamos ante uno u otro los criterios que deben atenderse para determinar ante qué tipo de violencia estamos, son:

1. Analizar las circunstancias del hecho, para valorar la gravedad de la violencia ejercida.
2. Valorar el riesgo de que el agresor puede ejercer actos de violencia constitutivos de delito.
3. Antecedentes de violencia, si los tuviera.
4. Habitualidad, entendiendo por tal la permanencia en la situación de violencia en que coloca a la víctima.
5. Si hay daños directos o indirectos respecto de menores integrados en el núcleo familiar.

e. Valoración del riesgo en sede fiscal

- e.1. Recibida la denuncia o el parte/reporte policial, el Ministerio Público, a través de las oficinas de atención a la víctima y en coordinación con otras autoridades (servicios de policía, instituto de medicina legal, etc.) realizarán una primera valoración del riesgo a fin de adoptar o solicitar las medidas de protección más adecuadas y sin perjuicio de las que se adopten posteriormente a la vista del resultado de las diligencias de investigación.

En los lugares en que no exista oficina de atención a la víctima, el Fiscal o la Fiscal actuante deberá efectuar la valoración del riesgo en cada caso, con arreglo a los datos de que disponga a través de las investigaciones practicadas.

- e.2. Para la valoración del riesgo se tomarán en cuenta diversos indicadores relativos a la víctima y al presunto agresor, a la relación previa existente entre ambos y al tipo de violencia ejercida, conforme al sistema de valoración del riesgo que se incluye en Anexo a este Protocolo.

Para ello se le formularán a la mujer las preguntas que se contemplan en el documento que establece los parámetros de dicha valoración conforme a la “Escala de Valoración del Riesgo en Casos de Violencia Doméstica y/o Intrafamiliar” que se acompaña como formato Anexo a este Protocolo, del que derivará la asignación de la existencia de un riesgo bajo, moderado o alto.

Esta valoración se complementará con otros elementos de investigación basados en las averiguaciones policiales o pruebas periciales. En todo caso permitirán valorar el riesgo y solicitar la medida de protección proporcionada a las necesidades de protección de la víctima.

f. La adopción o solicitud de mecanismos de protección y de medidas cautelares

- f.1. Si a la vista de la valoración del riesgo, el Ministerio Público estimare que existe peligro para la víctima de sufrir nuevos ataques a su integridad, deberá adoptar o

solicitar medidas de protección. En la misma medida deberá valorarlo, cuando la víctima exprese sentir miedo o temor a sufrir nuevos ataques contra ella, sus hijos/as o algún miembro de su familia

- f.2. Los mecanismos de protección podrán adoptarse o solicitarse en cualquier momento de la investigación o del procedimiento.
- f.3. Las peticiones sobre medidas cautelares deben solicitarse en la primera audiencia y pueden modificarse o revocarse en cualquier momento del proceso, y estas decisiones deben ser debidamente motivadas.
- f.4. El Ministerio Público tiene la obligación de dar seguimiento al cumplimiento de mecanismos de protección y medidas cautelares.
- f.5. Si por cualquier medio los servicios de policía o cualquier persona tuvieran conocimiento del desacato o desobediencia de la medida de protección por parte del presunto agresor, deberán comunicarlo de forma inmediata al Ministerio Público. En caso de flagrante delito, procederán a la aprehensión/detención del sospechoso y lo pondrán a disposición del o de la Fiscal.

g. Obligaciones del Ministerio Público con respecto a los derechos de la víctima.

Asistencia Técnica y Jurídica

- g.1. Como ya se ha venido señalando, la víctima de violencia contra la mujer, tiene derecho a ser informada desde su primer contacto con la autoridad competente, cualquiera que ésta sea, de los derechos que le asisten, que constituyen para los intervinientes en el procedimiento, en este caso, el Ministerio Público, una correlativa obligación de reconocimiento y respeto. En lo que respecta de forma más específica en este momento, entre dichos derechos se incluirán, en todo caso:

El derecho a la defensa jurídica gratuita, entendida como el derecho a la asistencia/defensa y representación/patrocinio legal en todas las fases del proceso penal y civil derivado de la violencia Doméstica y violencia Intrafamiliar, a través de un abogado/a particular sufragado/a por el Estado o a cargo del presunto agresor y con formación especializada en violencia Doméstica y violencia Intrafamiliar, que le asistirá y representará desde la interposición de la denuncia ante la policía o fiscalía hasta la finalización del proceso por resolución firme. La gratuidad alcanzará igualmente a las actuaciones judiciales.

En todo caso, debe recalcar que, aun cuando la víctima decida designar su propio defensor, el Ministerio Público debe continuar siendo parte en la causa.

- g.2. El Ministerio Público deberá ofrecer a la víctima la asistencia y acompañamiento necesarios para lograr su participación en la investigación y en el proceso, por sí mismos o coordinados con otras instituciones, servicios u organizaciones de la sociedad civil.
- g.3. En caso de que la víctima, en cualquier momento de la investigación o del procedimiento, manifieste su intención de no denunciar o no seguir adelante con el proceso, el Ministerio Público debe dejar sin efecto todas las medidas de seguridad que hubiera adoptado para garantizar la protección de la víctima.

h. Sensibilización, formación y capacitación en género e investigación desde la perspectiva de género

- h.1. El Ministerio Público, incluirá en sus planes de formación de acceso a la fiscalía actividades de sensibilización en género y capítulos específicos sobre los delitos de violencia Doméstica y violencia Intrafamiliar, cuestiones relacionadas con la igualdad y la no discriminación, así como también el género y los derechos de las mujeres.
- h.2. Todos/as los/as fiscales que se incorporen a una unidad especializada en violencia Doméstica y violencia Intrafamiliar, deberán recibir previamente sensibilización y formación específica sobre la materia.

i. Medicina Forense

Interviene o, más precisamente, puede intervenir en distintos momentos del proceso. En primer lugar, al inicio del mismo, pues de presentar la víctima lesiones u otros signos físicos externos y/o psicológicos derivados de la violencia sufrida, cualquiera de los receptores de la denuncia, remitirá a la víctima al médico/a forense, para que realice la evaluación del daño sufrido.

Posteriormente, puede emitir un dictamen de las evaluaciones realizadas o cualquier otra que el Ministerio Público o el Juzgado puedan solicitarle en el juicio penal o la audiencia para pruebas de la causa de violencia doméstica.

La remisión de las mujeres a la Dirección de Medicina Forense o los servicios de atención en salud para obtener un dictamen médico forense es obligatorio, para acreditar los hechos denunciados por violencia doméstica, en estos casos se debe priorizar la atención inmediata para la evaluación de las víctimas.

El dictamen preliminar practicado debe ser enviado inmediatamente al Juzgado competente.

i.1. Atención a la víctima

- Se debe brindar información a la víctima sobre el alcance de la evaluación a realizar, se deberá explicar a la mujer en el caso de un examen físico cuáles son las etapas del examen y que el mismo se realizará en presencia de un familiar o acompañante.
- Informarle que el examen se hace en presencia de una testigo femenina.
- Recordarle que esta prueba es necesaria para tener evidencias.
- Recordarle que cuenta con el apoyo emocional de la trabajadora social y de la psicóloga y que puede volver después del examen.

i.2. Diagnóstico de la víctima

El dictamen médico forense deberá contener la siguiente información:

- *El examen físico* contendrá los datos de la víctima, motivo del examen, el historial médico forense, descripción de la lesiones, comentario del médico forense, conclusiones.

En las conclusiones se deberá detallar el tipo de lesión, tipo de incapacidad: parcial o total, permanente o en peligro de muerte, tipo de arma que causó las lesiones, además el médico recomendará de ser necesario, que la víctima sea evaluada por psicólogo o psiquiatra y la realización de las correspondientes investigaciones de campo.

- *La evaluación psicológica* se deberá realizar a partir de un test de evaluación que determinará los niveles de estrés que sufre la víctima (somatizaciones, cuadros ansiosos o depresivos, consumo de sustancias, cuadros psíquicos severos o secuelas generadas por la violencia sufrida).

El Estudio de investigación de campo deberá determinar la afectación patrimonial / económica.

i.3. Valoración de los efectos del contexto violento en personas menores de edad

Los hijos e hijas de las mujeres que están sufriendo violencia física, sexual o emocional por sus parejas o ex parejas, son siempre, víctimas directas de la violencia contra la mujer. La exposición reiterada a un ambiente de maltrato hacia la madre, constituye una forma grave de maltrato psicológico hacia las hijas e hijos a su cargo, que están expuestas/os a una amplia gama de experiencias

Por ello es preciso prestar atención a la sintomatología en adolescentes y jóvenes, que puede ser una manifestación de su exposición, a la violencia Doméstica y violencia Intrafamiliar, para actuar en colaboración con el resto de profesionales que intervienen en el proceso, tanto para llevar a cabo su derivación a los servicios sanitarios, psicológicos o de atención social especializada, como a su adecuada evaluación para determinar las consecuencias derivadas de la violencia ejercida.

i.4. Valoración del agresor

Esta prueba forense global incluirá, no sólo los datos sobre las lesiones o el hecho delictivo sino también, un examen psicológico y otros aspectos sobre el riesgo de reiteración de las conductas violentas o el incremento del nivel de violencia.

i.5. Valoración de los riesgos

Facilita la adopción de mecanismos de protección para detener futuras agresiones, la respuesta judicial y la asistencia social a la víctima.

El Médico Forense en la valoración del caso, no deberá hacer referencia sobre los antecedentes de la mujer o el denunciado. Estos puntos son competencia del Fiscal y del Juez.

C. Poder Judicial

Es la institución encargada de impartir justicia en forma transparente, accesible, imparcial, pronta, eficaz y gratuita, por Magistrados y Jueces independientes, únicamente sometidos a la

Constitución, los tratados internacionales y el ordenamiento jurídico interno, para garantizar la seguridad jurídica, la paz social y afirmar la vocación republicana y democrática en el marco del Estado de Derecho.

Sensibilización, formación y capacitación en género

- a) El Poder Judicial incluirá en sus planes de formación de acceso a la judicatura actividades de sensibilización en género y capítulos específicos sobre los delitos de violencia Doméstica y violencia Intrafamiliar, cuestiones relacionadas con la igualdad y la no discriminación así como también el género y los derechos de las mujeres.
- b) Todos/as los/as Jueces/zas que se incorporen a un Juzgado especializado o con competencia en violencia contra la mujer, deberán recibir previamente sensibilización y formación específica sobre la materia.

Procedimiento Judicial

Esta fase está integrada por el conjunto de actuaciones que tienen lugar en los distintos ámbitos que integran el sistema de la administración de justicia, desde que se recibe la denuncia por los hechos de violencia contra la mujer de que se trate, valorando e investigando los hechos, hasta que se cumplen las penas, sanciones, medidas de seguridad, cautelares, precautorias o cualquier otra decisión que pudieran adoptar los Juzgados competentes.

En este sentido amplio, intervienen a lo largo del proceso judicial: la Policía Preventiva y de Investigación Criminal, el Ministerio Público, la Dirección de Medicina Forense, la Defensa Pública, y los Juzgados y Tribunales especiales contra la violencia doméstica y no especializados.

Conforme a lo que ya anticipábamos, describiremos aquí la secuencia lógica de las actuaciones que integran el procedimiento judicial, agrupadas por cada uno de los actores intervinientes, debiendo tenerse presente que su contenido práctico de prueba, adopción o no de medidas de seguridad, evaluación psicológica o socioeconómica, etc. dependerá de las circunstancias de los hechos y las necesidades de la víctima en cada caso:

Los hechos que constituyen manifestación de violencia, pueden dar lugar a la comisión de un delito de violencia intrafamiliar o de agresiones de violencia doméstica, el desarrollo del procedimiento y los órganos judiciales competentes dependerá de su calificación jurídica.

En el procedimiento penal por delito de violencia intrafamiliar, ante los Juzgados de Letras de lo Penal se desarrolla una fase o etapa de audiencia preliminar, seguida

de una fase de enjuiciamiento en los Tribunales de Sentencia que concluye con el dictado de la sentencia, cuyo cumplimiento corresponde a los Jueces/zas de Ejecución de Sentencias. Sin perjuicio de la tramitación y resolución de los recursos pertinentes ante las Cortes de Apelación y la Suprema Corte de Justicia.

En las causas por violencia doméstica, todas las instituciones que reciben las denuncias deben remitirlas en el término de 24 horas a los Juzgados de Violencia Doméstica o no especializados los siguientes: Juzgados de Paz (móviles), Juzgados de Letras de Familia, Departamentales o Seccionales, donde tiene lugar una primera audiencia para ratificar, modificar o prorrogar las medidas de seguridad, precautorias o cautelares dictadas al denunciado. A continuación, se abre el juicio a prueba, tras lo cual dicta la sentencia que si fuera declarada "Con Lugar" impondrá al agresor la sanción correspondiente. Si se presentase recurso, sería resuelto por la Corte de apelaciones.

Coordina sus actuaciones con las instituciones siguientes: Policía Preventiva, DNIC, Ministerio Público, Defensa Pública, Juzgados de ejecución sentencia, Cortes de Apelaciones, INAM, Alcaldías Municipales, ONG's que cuenten con albergues temporales o casas refugio o aquellas que desarrollen programas de atención legal y emocional a mujeres que sufran violencia doméstica.

La recepción de la denuncia

- El Juzgado competente puede ser el órgano ante el que se presente la denuncia o tener conocimiento de los asuntos de violencia Doméstica y violencia Intrafamiliar por la remisión del parte de lesiones desde los centros de salud, del informe policial o las diligencias de la fiscalía.
 - Si la denuncia se presentara ante el Juzgado, será recibida por el funcionario auxiliar, que, una vez complete los datos necesarios sobre los hechos y las circunstancias personales de la denunciante y el denunciado dará cuenta al Juez de su recepción. El funcionario que reciba la denuncia deberá garantizar la privacidad de la denunciante, y, teniendo en cuenta el estado emocional en que se encuentre y, en atención a sus circunstancias personales, le dispensará un trato especialmente respetuoso y preferente
- Si el Juez considera que se está en presencia de un acto de violencia doméstica, dictará un Auto de admisión y señalará día y hora para la celebración de la audiencia. El Auto ha de ser puesto en conocimiento del Ministerio Público y, en su caso, del defensor público o privado que hubiere podido designar la víctima, para que la asista a lo largo del procedimiento, y del denunciado, advirtiéndole de que la audiencia se llevará a efecto en el día y hora señalados, aunque no compareciera.
- Si la denuncia se hubiera presentado ante el Ministerio Público o la Policía:
Tras examinar el contenido íntegro del reporte o expediente tramitado, que deberá comprender la integridad de las actuaciones que hayan tenido lugar, incluyendo partes médicos, declaraciones de la víctima, averiguaciones pertinentes con testi-

gos, vecinos, etc., y, una vez que se comprueba que los hechos son de violencia doméstica, el Juez dictará el Auto de admisión y señalará día y hora para la celebración de la audiencia.

Si se impusieron medidas por la Policía o por el Ministerio Público, se resolverá si se mantienen, modifican o amplían las existentes.

Y si no se hubieran impuesto previamente, se pueden adoptar, sin necesidad de oír antes a la mujer, dentro del propio Auto de admisión.

- Si la víctima presenta lesiones que requieran asistencia de salud, o si se sospecha de su existencia aunque no sean visibles, se dará cuenta inmediatamente al titular del Juzgado de la presencia de la mujer, considerándose convenientes las siguientes actuaciones:
 - El traslado y acompañamiento por la policía judicial a la mujer al servicio médico correspondiente.
 - En caso de agresiones o abusos sexuales, el traslado será al hospital más próximo y se informará a la víctima de que ni debe lavarse ni cambiarse de ropa, así como tampoco comer ni beber si se han producido agresiones por vía bucal.
 - El traslado del médico o médica forense al centro de salud a objeto de prever el aseguramiento de pruebas y realizar la recogida de muestras.

Siempre que se practique una evaluación médico forense, se deberá remitir al órgano judicial un informe, al menos de carácter preliminar, de forma inmediata. En caso de que no hubiera Médico Forense, deberá remitirse al órgano judicial el parte médico o evaluación realizada, con la misma inmediatez.

- Se considera relevante que se lleve a cabo el reconocimiento médico inmediato por parte del/la médico/a forense quien extenderá el correspondiente informe en el que se deberán observarse posibles lesiones psicológicas.
- Se considera igualmente conveniente que se soliciten los oportunos informes psicológicos periciales a los equipos psicosociales y en su caso informes sociales a los servicios de asistencia a la y/o a los servicios sociales correspondientes víctima.

En los casos en que la mujer se presente por primera vez en el Juzgado a formular la denuncia y/o siempre que se encuentre en una situación emocional de especial afectación, el equipo psicosocial deberá efectuar una intervención previa de contención y acompañamiento para permitir a la mujer afrontar su declaración de forma razonable y una vez hubiera recuperado la presencia de ánimo. En el caso de que no dispusiera de un equipo psicosocial adscrito al órgano judicial, el Juez o Jueza procurará los medios de apoyo precisos para que la víctima reciba la necesaria atención de esta naturaleza.

En caso que la mujer no requiera asistencia médica: Se informará a la víctima de forma que le resulte comprensible, de los trámites que seguirá el procedimiento, tras la interposición de la denuncia y de la solicitud de las medidas de protección que puede solicitar.

En caso de que la víctima muestre su disposición a ser asesorada, desde las dependencias judiciales se realizarán las gestiones oportunas para ello:

- En la denuncia se hará constar la mayor información posible sobre los hechos a objeto de facilitar la acumulación de autos o diligencias a que hubiese lugar en su caso, así como los antecedentes de agresiones si las hubiesen, frecuencia de los maltratos, si los denunció.
- Asimismo, los órganos judiciales efectuarán a la denunciante el ofrecimiento de las acciones que le correspondan en el procedimiento y de los recursos disponibles, haciéndole entrega de un volante informativo en la que conste el contenido del ofrecimiento y en la que se incluya la dirección y el teléfono de los servicios de asistencia a las víctimas y otros servicios especializados. Los órganos judiciales facilitarán el contacto con dichos servicios donde informarán y asesorarán a la víctima sobre su derecho a solicitar medidas de protección y cautelares, su derecho a la representación legal y sobre la posibilidad de solicitar las ayudas y recursos de atención social disponibles.
- Una vez que se reciba la declaración de la denunciante y obtenidos los resultados de las diferentes actuaciones que hayan podido practicarse disponibles, el Juzgado, si ha sido el primero en recibir la denuncia, o, en el caso de que, por cualquier causa no se hubiere efectuado previamente, deberá realizar obligatoriamente la correspondiente valoración del riesgo vital o respecto de su integridad física o moral en que pueda encontrarse la víctima respecto de su agresor.

Para ello se le formularán a la mujer las preguntas que se contemplan en el documento que establece los parámetros de dicha valoración conforme a la “Escala de Valoración del Riesgo en Casos de Violencia Doméstica y/ o Intrafamiliar” que se acompaña como formato Anexo a este Protocolo, del que derivará la asignación de la existencia de un riesgo bajo, moderado o alto.

Medidas de seguridad

Después de recibida la denuncia en el Juzgado el Juez, tras efectuar la correspondiente valoración del riesgo en que se pueda encontrar la víctima, adoptará las medidas de seguridad que estime pertinentes.

Si la denuncia se hubiese presentado ante la Policía o la Fiscalía, y ya se hubieran impuesto medidas de seguridad por estas instituciones, el Juez las revisará, ratificando las adoptadas, modificándolas o imponiendo nuevas medidas.

Estas medidas de seguridad tienen carácter temporal y su imposición no será inferior de dos meses ni superior a 6 meses. No obstante, el Juzgado competente, de oficio o a petición de la denunciante, podrá prorrogar por dos meses y por una sola vez una o varias de las medidas que estimare conveniente

En su adopción, se deberá atender a los siguientes criterios: proporcionalidad, idoneidad, necesidad, utilidad, pertinencia y efectividad.

Notificación

El juzgado enviará a un "Receptor" para notificar las medidas de seguridad y citar al imputado para la celebración de la audiencia. El hecho que este último sea notificado es esencial porque el procedimiento tiene carácter contradictorio, por lo que es preciso que sea citado para que pueda continuarse la tramitación del procedimiento, aunque su incomparecencia no impida la celebración de la audiencia.

Bastará con que la notificación sea dejada en la puerta del que va a ser notificado si no se le encuentra en el domicilio en el que resida.

A estos efectos, sólo se solicitará el acompañamiento de la víctima en los casos en que resulte estrictamente necesario, y salvaguardando en todo caso la integridad física de la mujer.

En los supuestos de especial gravedad, el notificador deberá acudir acompañado de personal de seguridad.

Estas medidas entrarán en vigor de forma inmediata, una vez sean notificadas.

Celebración de la audiencia

Hasta que se desarrolle la audiencia, se procurará que las partes permanezcan en lugares separados, evitando que la denunciante se confronte con el agresor y exista comunicación física entre ellos.

Es necesario que la audiencia se celebre con la presencia simultánea del denunciante y denunciado, para garantizar la debida contradicción del procedimiento.

No obstante, si el denunciado, citado, no comparece, se celebrará la audiencia, de todos modos. Si fuera la denunciante quien no comparece, no podrá celebrarse la audiencia.

En este caso, el Juez investigará las razones de la incomparecencia, por un plazo no mayor de un mes. Al cabo de dicho término, el Juez deberá resolver si ha de convocarse una nueva audiencia o determinar el abandono de la causa por parte de la denunciante. En este último caso, si se hubieran adoptado medidas de seguridad el Juez acordará el cese de las mismas, todas estas decisiones se adoptarán en Auto motivado, que será notificado a la denunciante, al denunciado y al Ministerio Público.

Transcurridos seis meses desde esta actuación, el Juez declarará la caducidad de la denuncia.

En el caso de que dentro de este término, la denunciante compareciera y solicitara la continuación de esta causa, deberá procederse a la reapertura del procedimiento y determinarse nuevamente el señalamiento de la audiencia.

Si se apreciase la necesidad de adoptar nuevas medidas de seguridad, habrá de tenerse presente el plazo máximo de su duración seis meses, teniendo en cuenta el tiempo por el que hubiesen estado vigentes las que ya hubieran podido adoptarse antes de dictarse el Auto de abandono.

El Ministerio Público asume en todo caso la representación de la mujer, pero si la víctima lo solicitare, podrá concurrir al procedimiento con la asistencia jurídica de un Abogado que la defienda, público o de designación particular. En este caso, el Ministerio Público deberá seguir actuando como parte esencial del procedimiento.

Abierta la audiencia, se oír a primer lugar a la denunciante. A continuación se oír al denunciado. Y, seguidamente se cede la palabra a los representantes procesales de cada una de las partes.

Si el denunciado, debidamente citado, no compareciere, tras oír a la denunciante, el Juez dictará sentencia declarando CON LUGAR la denuncia.

A continuación se requerirá al denunciado para que comparezca ante el Juzgado para la lectura de la sentencia.

Si el denunciado comparece y reconoce los hechos, se actúa del mismo modo, dictando la sentencia que declare CON LUGAR la denuncia.

Si el denunciado comparece y niega los hechos, propondrá a través de sus apoderados la apertura del procedimiento a prueba, y los medios de que intente valerse, y, con la propuesta de pruebas que solicite, en su caso, la defensa, se procederá a practicarlas a continuación y, si no pudieren realizarse en el mismo acto, se señalará para que se practiquen en una audiencia de pruebas, que deberá celebrarse dentro de los dos días siguientes.

Se procurará dotar a los Juzgados con competencias en violencia contra la mujer de salas con Cámaras Gesell o sistemas de grabación que permitan realizar una entrevista única para evitar la revictimización derivada de la reiteración de declaraciones sobre unos mismos hechos violentos, especialmente cuando se trate de testigos menores de edad o víctimas especialmente vulnerables.

El Juez sólo resolverá practicar pruebas, de oficio, de forma excepcional. Y, en tal caso, tendrá en cuenta la naturaleza del procedimiento y su duración, absteniéndose de practicar las pruebas que impliquen dilaciones en su tramitación incompatibles con aquélla.

Tras la práctica de las pruebas, el Juez dictará sentencia preferiblemente en el mismo acto, pues ello permite que las partes puedan quedar en ese mismo momento enteradas del contenido de la resolución judicial.

Si no resultase posible, la sentencia se dictará, en todo caso dentro de un término no mayor de tres días.

La sentencia debe contener los hechos que considera probados, la fundamentación jurídica en que apoya la decisión, y, si fuera declarada CON LUGAR los mecanismos de protección que impone, y la sanción que se establece. (Prestación de servicios a la comunidad por término de 1 a 3 meses). Se procurará que la motivación de la sentencia justifique suficientemente las diferentes decisiones que incorpore, especialmente las relativas a medidas de protección y sea redactada en lenguaje claro y fácilmente comprensible a todos los implicados en el procedimiento, aunque no tuvieran conocimientos de derecho.

La sentencia recaída puede ser recurrida en apelación, en el mismo acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes.

Este plazo específico para la interposición del recurso de apelación rige, igualmente, para la formulación de las alegaciones por la parte apelada, pues nos encontramos en un ámbito especializado, en el que se reduce el plazo de interposición que se establece en el procedimiento civil ordinario.

Así, no puede entenderse que el Código Procesal Civil rija con carácter supletorio para una de las partes del recurso, la apelada, por elementales exigencias del principio de igualdad de armas de las partes en el procedimiento judicial.

Funciones del Juzgado de Ejecución

Como se establece en la LCVD, la vigilancia y control de la ejecución de los mecanismos de protección, medidas de seguridad, medidas precautorias y medidas cautelares, prorroga de medidas y sanciones impuestas por los Juzgados, estará a cargo de un Juez o Jueza de Ejecución, quien velará por el fiel cumplimiento de las resoluciones, además impondrá las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento de mecanismos de protección. En los lugares donde no exista Juez o Jueza de Ejecución, esta responsabilidad corresponderá al Juez (a) que este conociendo de la denuncia.

Una vez impuestos los mecanismos de protección, el Juez o Jueza de Ejecución es quien debe velar por el cumplimiento de los mismos y tiene la responsabilidad de remitir las diligencias al Ministerio Público en caso de existir algún incumplimiento de las sanciones impuestas y/o de constituir delito.

Para lograr el cumplimiento de las medidas impuestas, la LCVD faculta al Juzgado de Ejecución o al Juez que este conociendo de la denuncia, a solicitar el auxilio policial en caso de ser necesario.

Coordina su actividad jurisdiccional con la Policía, los juzgados especializados y no especializados, consejerías de familia, alcaldías municipales y demás instituciones públicas donde el denunciado cumple medidas de protección o sanción.

Seguimiento de la sentencia

Una vez dictada la sentencia corresponde al Juez de Ejecución ejecutar su contenido.

Para el cumplimiento de la sanción de trabajos en beneficio de la comunidad, el Juez se auxiliará de las Alcaldías y las instituciones en las que puedan llevarse a cabo las actividades correspondientes y los programas de formación que vinieren obligados a desarrollar, implementando las medidas de coordinación necesarias con las instituciones y organismos correspondientes.

Las instituciones correspondientes notificarán al Juzgado el cumplimiento de los trabajos y/o actividades formativas que se hubiesen determinado, o, en su caso, si se hubiere producido algún incumplimiento.

En este último caso, el Juzgado procederá a constatar su posible existencia, averiguando los motivos por los que se produjo tal incumplimiento. Si no resultase justificado, mandará que se proceda por el delito de desobediencia en vía penal, remitiendo las actuaciones al Ministerio Público.

Si en la sentencia se hubiesen impuesto medidas de seguridad, se deberá informar a la Policía más cercana al domicilio de la denunciante y/o el denunciado para que pueda auxiliar al Juzgado en su cumplimiento y vigilancia.

Cortes de Apelaciones

Conocen del recurso de apelación sobre resoluciones y sentencias que dictan los Juzgados correspondientes.

Defensa Pública

Es la institución del Estado dependiente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que en cumplimiento del precepto constitucional, señala que el derecho a la defensa es inviolable e irrenunciable y ante la obligación del Estado de proveer asistencia letrada gratuita a las personas de escasos recursos económicos.

La tarea actual de la defensoría Pública en los casos de violencia doméstica e Intrafamiliar es la de defender tanto a los autores como a las víctimas.

En aplicación de este derecho el defensor puede intervenir a lo largo de todo el proceso judicial prestando asistencia técnico jurídica a la víctima y el denunciado.

El rol de defensor puede ser asumido por un Abogado público o privado y/o por el Ministerio Público.

Los servicios de defensa pública al proveer esta defensa a las víctimas tendrían que establecer una especialización, pero por lo menos una capacitación para los abogados retomando estos casos.

Las mujeres víctimas de violencia doméstica y de violencia intrafamiliar tienen derecho a la defensa jurídica gratuita.

En desarrollo de este derecho, y el que corresponde a toda persona imputada en un procedimiento, este actor puede intervenir a lo largo de todo el proceso judicial, prestando asistencia técnico-jurídica gratuita al denunciado y, ocasionalmente, a la víctima, en todo el proceso, coordinando sus actuaciones con el defensor privado, el Ministerio Público y el Juzgado.

D. Organismos e Instituciones que brindan Asistencia Legal

d.1. Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)

Es el defensor del pueblo, que está al servicio de cualquier persona para protegerla ante las violaciones a sus derechos fundamentales, como de hechos que impliquen ejercicio ilegítimo, arbitrario, abusivo, defectuoso, negligente o discriminatorio de parte de la administración pública, no sustituye a las instituciones existentes en el ordenamiento jurídico interno sino de hacerlas cumplir sus obligaciones en favor de los derechos de las personas.

La fundamentación legal de creación se encuentra en el artículo 59 de la Constitución de la República y decreto 153-95 Ley Orgánica del CONADEH.

Definición de tareas y funciones: la Ley orgánica del CONADEH define entre una de sus atribuciones principales conocer a petición de parte, los casos de violencia que perjudiquen la integridad moral, psíquica y física de los cónyuges, descendientes y demás miembros de la familia y evidencien infracción a la norma penal, denunciándolos ante la autoridad competente

d.2. Instituto Nacional de la Mujer (INAM)

Es la institución estatal encargada de coordinar las políticas dirigidas a la mujer y en coordinación con las entidades de derecho público o privado diseñar el plan de acción

nacional de atención contra la violencia doméstica, como la planificación y ejecución de acciones para la erradicación gradual y progresiva de estas conductas.

d.3. Alcaldías Municipales

Gobiernos locales o municipales autónomos, en cuya estructura institucional cuentan o deben contar con una oficina municipal de atención a la mujer (OMM).

Tienen como función:

- Brindar servicios de albergues temporales o casa refugio de protección a las víctimas y su grupo familiar.
- Emitir las constancias de cumplimiento de las medidas de seguridad o precautorias impuestas a los denunciados por los juzgados competentes.
- Remitir los informes mensuales y dictamen individual que soliciten los juzgados competentes sobre el cumplimiento de medidas de seguridad y precautorias impuestas a los denunciados.
- Brindar apoyos de orientación a las víctimas y de reeducación a los denunciados.
- Coordina sus actividades con los Juzgados de VD, Juzgados de ejecución, Policía Nacional Preventiva, Ministerio Público, DNIC.

No todas las Alcaldías cuentan con una OMM ni prestan los servicios de apoyo a las víctimas.

E. Asistencia Social

e.1. Asistencia y apoyo social

Este ámbito de intervención tiene como objeto, esencialmente, prestar apoyo a la mujer víctima de violencia contra la mujer, brindarle el necesario acompañamiento e informarle sobre la disponibilidad en la atención a su situación, recursos existentes y vías alternativas de solución al problema, considerando el derecho a la asistencia social integral que le asiste, tanto a ella, como a las personas menores de edad que se encuentren bajo su patria potestad o guarda y custodia, para que solicite, en su caso, de los servicios de atención social las ayudas que le pudieran corresponder.

Dependiendo del modo en que se inicie la ruta crítica de la intervención, el papel de estos servicios en el proceso tendrá distinto contenido.

En el caso de que hubiera sido en un recurso de atención social donde se hubiere tenido la primera noticia de la existencia de la situación de violencia, corresponderá a éste valorar la necesidad de que la víctima requiera asistencia sanitaria, o de que, en su caso, existiese riesgo para su seguridad o integridad física. En cualquiera de estos casos, y actuando con la rapidez e inmediatez que resulte necesaria para evitar la continuación de los actos violentos, se solicitará la presencia policial para que acompañe a la víctima al servicio médico, y adopte las medidas de seguridad precisas para su protección.

En el supuesto de que la víctima, u otra persona o institución o desde el propio servicio hubiesen formulado la denuncia y se hubiese iniciado, ya, el correspondiente proceso judicial, por parte de los servicios de atención social se realizará un seguimiento del caso durante todo el proceso, brindando apoyo y acompañamiento emocional a la víctima, realizando la evaluación de los daños psicológicos, socioeconómicos o de otra naturaleza derivados de la violencia, y elaborando los informes necesarios para que puedan servir como medios de prueba para acreditarlos.

Corresponde a los servicios de atención social, en cualquiera de los casos, informar a la mujer de los recursos existentes en su municipio o comunidad para situaciones de malos tratos (psicológicos, económicos, socioeducativos, de alojamiento, de empleo, de vivienda, etc.), y, en su caso, le gestionará o facilitará el acceso a los mismos realizando, cuando proceda, la derivación al servicio especializado o de otro tipo correspondiente.

e.2. Asistencia y apoyo educativo

Enunciamos esta fase de forma expresa y diferenciada, tanto por su relevancia en el desarrollo de la posible intervención ante las situaciones de maltrato, como por su importancia en el ámbito de la prevención de la violencia contra la mujer.

A través de la educación, en sus distintos niveles, se puede encontrar el mejor cauce para combatir los patrones de socialización sexista, origen y causa de la violencia contra la mujer, mediante la transmisión de valores de respeto a la dignidad de las mujeres y a la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y la resolución pacífica de los conflictos.

El ámbito educativo resulta, además, esencial, en la detección de situaciones de violencia contra la mujer entre el alumnado, debiendo articularse las actuaciones necesarias (recogida de información, consultas, etc.) para constatar o descartar su existencia en caso de sospecha.

Y, en caso de constatarse que alguna alumna es víctima de violencia por parte de algún alumno o miembro del personal educativo, valorar, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, la intervención necesaria en cada caso, atendiendo de forma prioritaria a la adopción de las medidas que garanticen la inmediata seguridad de la alumna agredida, solicitando, si llegase a resultar preciso, la presencia policial en el centro, para que acompañe a la víctima a los servicios de salud para que reciba asistencia médica, y adopte las medidas de seguridad necesarias para evitar la continuación de los actos violentos.

Este ámbito debe prestar, igualmente, el apoyo necesario a la escolarización de los y las personas menores de edad dependientes de las víctimas de la violencia contra la mujer, cuando, por consecuencia de la situación creada, se vean obligadas a salir de sus lugares de residencia habitual.

e.3. Servicios de atención social

Definimos en este apartado las tareas que corresponde efectuar a todos aquéllos organismos e instituciones públicas, así como a aquéllos de carácter privado, especialmente las ONGs que tienen como objeto la defensa de los derechos de las mujeres y la atención a las víctimas de la violencia contra la mujer, que tienen por objeto esencial el de brindar servicios de atención integral a las víctimas y su grupo familiar, proporcionar servicios de albergue temporal o casa refugio a las víctimas, su acompañamiento y orientación a lo largo de todo el proceso, y, en su caso, la reeducación de los agresores.

No existe un perfil concreto de mujer víctima de violencia contra la mujer. La situación psicosocial de cada mujer es singular y tiene unas necesidades diferentes, y tampoco existe un itinerario-tipo de atención a través de los recursos disponibles.

Para determinar el alcance de la atención social de las mujeres víctimas de violencia contra la mujer, es preciso diseñar un catálogo de sus derechos como víctimas merecedoras de una especial atención y poner en marcha los servicios definidos en este catálogo y/o establecer en función de los recursos sociales existentes políticas que prioricen el acceso a este colectivo.

En todos los casos, se debe realizar un análisis y valoración individual de la situación en que se encuentra cada mujer, adaptándose a las necesidades personales y los tiempos que cada mujer necesite teniendo en cuenta, además, las situaciones de especial vulnerabilidad. Corresponderá a cada profesional decidir qué recurso es más apropiado en cada momento, para lo cual es muy importante contar con un equipo interdisciplinario.

En este sentido es fundamental disponer de un inventario básico de los diferentes servicios que integran la ruta de protección y apoyo a la mujer que sufre violencia contra la mujer y sus hijas, así como un mapeo de los recursos existentes en materia de protección o atención social en cada área de actuación (estado, municipio, departamento, etc.) que se actualice periódicamente y que incluya tanto recursos públicos como privados (asociaciones de mujeres, ONGs...etc) que puedan apoyar a la víctima en su proceso de recuperación personal y la incorporación a una vida normalizada y libre de violencia.

Ante situaciones de emergencia social, en las que los profesionales de los servicios de atención social detecten que es precisa la asistencia inmediata, utilizarán los servicios de atención de urgencia que pueden activarse a través de un teléfono específico, disponible en Unidades de Policía, Fiscalía y Juzgados, y que, dependiendo de la situación de la mujer, recabarán el apoyo de estos recursos para contener situaciones de crisis y, en su caso, derivar a la mujer a una Casa refugio, en situaciones excepcionales de riesgo vital.

En este ámbito, se definen las siguientes pautas de actuación:

1. Si la víctima presenta lesiones que requieran asistencia de salud, o se sospecha de su existencia aunque no resulten visibles, se acompañará a la víctima, si lo precisa, al servicio médico correspondiente. Asimismo, se le indicará que solicite un parte de evaluación, a fin de poder presentarlo en el momento de realizar la denuncia.
2. Si existiese riesgo para la seguridad o integridad física de la mujer, se recabará la atención policial. En los lugares en que existan los Centros Integrados de Justicia no formal o Casas de Derechos, se derivará a la mujer a estos recursos, de forma preferente.
En caso de que se trate de una agresión o abuso sexual reciente, se acompañará a la víctima al servicio de urgencias del hospital más cercano y se le informará de que no debe lavarse ni cambiarse de ropa, así como tampoco comer ni beber si se han producido agresiones por vía bucal a efectos de evitar que se eliminen posibles pruebas esenciales para un futuro proceso judicial.
3. Si se le remite al hospital, desde las dependencias de la institución de asistencia social en que se haya atendido a la víctima, dará aviso telefónico previo para que aquél avance en la preparación del dispositivo de atención y será el hospital el que realice las gestiones oportunas para que se persone el médico o médica forense al objeto de que se pueda practicar el reconocimiento médico y la toma de muestras en el mismo acto que las exploraciones ginecológicas correspondientes. En cualquier caso, se proporcionarán al o a la forense todos los datos disponibles sobre el hecho.
4. En caso de que no requiera asistencia de salud, se proporcionará a la mujer una atención adecuada y prioritaria, considerando el especial estado emocional en que se encuentre la víctima.
Se garantizará un ambiente de intimidad durante las entrevistas, sin la presencia de familiares u otras personas de su entorno, salvo excepciones que califique el profesional en cada caso, y no se compartirá información sobre la mujer con miembros del equipo en espacios que no sean estrictamente profesionales.
5. La primera entrevista tendrá como objetivo prestar apoyo a la mujer e informarle sobre la disponibilidad en la atención a su situación, recursos existentes y vías alternativas de solución al problema, considerando el derecho a la asistencia social integral que le asiste, tanto a ella, como a las personas menores de edad que se encuentren bajo su patria potestad o guarda y custodia. Se le comunicará que se pondrán a su disposición todos los medios disponibles para preservar su seguridad y, en su caso, la de sus hijas e hijos.
6. Sin perjuicio de proporcionarle una información más cualificada que se ofrezca a la víctima en los servicios de asesoramiento jurídico existentes, el profesional de los servicios sociales le informará y asesorará, de forma básica, sobre sus derechos y los posibles trámites y procedimientos judiciales a emprender, especialmente, sobre su derecho a denunciar los hechos ante la policía, el Ministerio Público y el Juzgado, a recibir asesoramiento jurídico gratuito con vistas a la posible formula-

- ción de denuncia, a solicitar el alejamiento del agresor, o a solicitar medidas de protección ante la jurisdicción competente.
7. Se comunicará también a la víctima la posibilidad y conveniencia de solicitar a la Policía, al Ministerio Público o al Juzgado, que adopte medidas para su protección de tipo penal prisión provisional, prohibición de comunicación del agresor, de tipo civil prohibición del uso de la vivienda al agresor, limitación de sus derechos sobre los hijos e hijas, detención del agresor y para que solicite, en su caso, de los servicios sociales las ayudas que le pudieran corresponder.
 8. Si la víctima no quiere denunciar los hechos ni solicitar medidas de protección, para motivarla a hacerlo se le explicará que denunciar no es sólo un derecho sino también una forma de romper con la relación violenta que está sufriendo y la manera de acceder a los mecanismos de protección de la Administración de Justicia —alejamiento de la persona agresora, protección policial, suspensión de los derechos del padre respecto al hijo o hija, uso de la vivienda, pensión de alimentos, etc.
 9. Asimismo, se explicará a la víctima que la consideración de la violencia contra la mujer como delito o infracción de acción pública obliga a los profesionales a poner los hechos en conocimiento del Juzgado.
 10. En aquellos casos en los que la víctima decidiera no presentar denuncia o aquellos otros que se estime pertinente, los servicios sociales podrán denunciar al Juzgado competente para el conocimiento de la violencia doméstica o el Juzgado Penal a quien correspondan las causas por violencia intrafamiliar, los actos de esta naturaleza de que tengan conocimiento, solicitando las medidas más urgentes que resulten necesarias. La canalización de estas solicitudes debe hacerse a través del Ministerio Público al que se dirigirán los mencionados servicios a fin de hacerlas efectivas.
 11. Asimismo, se informará a la mujer de los recursos (jurídicos, psicológicos, económicos, socioeducativos, de alojamiento, de empleo, de vivienda, etc.), existentes en su municipio o departamento para situaciones de malos tratos y violencia sexual y, en su caso, se le gestionará o facilitará el acceso a los mismos realizando, cuando proceda, la derivación al servicio especializado o de otro tipo correspondiente.
 12. Se recordará a la mujer la importancia de hacer uso de los recursos existentes para la superación de la situación, en especial, de los programas de atención psicológica especializados.
 13. En todo el proceso de acompañamiento e intervención social se debe respetar y potenciar la autonomía de la mujer. Pero para que las mujeres puedan tomar decisiones responsables y ser protagonistas de su propio proceso de recuperación, han de ser informadas de las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, de las consecuencias probables de actuar o no actuar, de los beneficios y riesgos esperados, también y además, como medida para garantizar su seguridad.
 14. Se favorecerán en todo momento mecanismos de refuerzo de su autonomía y autoestima y medidas para evitar el aislamiento al que las víctimas suelen ser sometidas por sus agresores. En caso de que existan en la zona asociaciones que traba-

jen con mujeres víctimas de la violencia, y teniendo en cuenta la importancia de la labor de apoyo que éstas pueden llevar a cabo, si así lo desearse, se le facilitará a la víctima el contacto con ellas.

15. La o el profesional de los servicios de atención social realizará un seguimiento del caso durante todo el proceso, en coordinación con los diferentes servicios y programas de atención a las víctimas, a fin de apoyar a la mujer y a sus hijas e hijos en el restablecimiento de una vida normalizada y la consecución de su autonomía personal.

e.4. Intervención en el ámbito educativo

La escuela es una pieza fundamental en el ámbito de la prevención de la violencia Doméstica y violencia Intrafamiliar, porque en ella es donde los patrones de socialización sexista, origen y causa de la violencia contra la mujer, puede encontrar su contrapeso.

En este apartado, nos centraremos en la detección del maltrato en el ámbito educativo, en cómo ha de actuarse en caso de sospecha o constatación de que existen víctimas de violencia contra la mujer entre el alumnado.

En el caso de que se conozca, o exista sospecha fundada, de que alguna alumna es objeto de maltrato o de violencia sexual, por parte de algún alumno de un centro educativo, la Dirección del centro, o bien las personas designadas por ésta para el seguimiento del caso, seguirán los siguientes pasos:

1. Recogida de información: Se recogerán los datos identificativos del centro y alumnado afectado y sobre el tipo y gravedad de la agresión.
2. Análisis previo del caso e intervenciones de urgencia: El equipo directivo convocará a la o al orientador, consultor y/o aquellas persona/s del centro a quien considere más adecuadas o competentes para analizar y valorar la intervención necesaria en cada caso y se adoptarán las medidas que garanticen la inmediata seguridad de la alumna agredida, incluidas aquellas medidas correctoras dirigidas a la persona agresora que se estimen oportunas.
3. Primera comunicación a las familias: Se citará, en entrevista individual, por un lado, a la alumna víctima y a su familia y, por otro lado, al alumno agresor y a su familia, con el fin de: Dar a conocer y recoger información sobre los hechos; determinar si éstos son conocidos por las familias y qué medidas han tomado al respecto; informar sobre las medidas de urgencia adoptadas o que se van a adoptar, recogiendo su opinión y las aportaciones que pudieran realizar; y comunicar la posibilidad de interponer una denuncia o de que esta pueda ser interpuesta, si existen indicios de que los hechos tienen carácter delictivo.
4. Completar, contrastar y analizar la información: Se completará la información disponible mediante cuestionarios, entrevistas u otros procedimientos que se consideren oportunos, los cuales se realizarán con la mayor discreción posible.
5. Determinar si es o no un caso de maltrato entre iguales, a efectos educativos, a la vista de la información obtenida.

6. Poner en conocimiento de las familias implicadas las medidas propuestas en el Plan de Actuación: Debe de informarse a las familias implicadas de las medidas de carácter individual adoptadas con el alumnado afectado, así como del resto de medidas de carácter organizativo y preventivo.
7. Seguimiento y Evaluación de las medidas adoptadas: La Dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas previstas en el Plan de Actuación.
8. De constatare que los hechos pueden constituir un delito de violencia intrafamiliar, el Centro Educativo pondrá los mismos en conocimiento inmediato del Ministerio Público o del Juzgado de la Niñez.
9. Si, como consecuencia de las investigaciones o informaciones recabadas cuando se produzca una incidencia en comportamientos violentos de cualquier alumno, se detectase que están inmersos en una situación de violencia contra la mujer en sus propios entornos familiares, el Centro Educativo dará inmediata cuenta al Ministerio Público de los hechos de que hubiere tenido conocimiento.
10. Los Centros Educativos promoverán la participación de sus alumnos en conferencias y actividades formativas que los distintos operadores del sistema de la atención a víctimas de violencia Doméstica y violencia Intrafamiliar, deberán realizar periódicamente en aquéllos colegios que se encuentren en sus respectivos territorios.

Es importante que se acompañen de trífolios y material gráfico adaptado a las edades de los alumnos a quienes vayan dirigido, que les ayude a identificar y prevenir la violencia Doméstica y violencia Intrafamiliar.

Es un hecho constatado que en buen número de parejas de adolescentes, las jóvenes, que estaban siendo víctimas de manifestaciones de violencia contra las mujeres (acoso, manipulaciones, aislamiento y control, etc) no percibían estos hechos como violencia sino como actuaciones naturales dentro de la dinámica de la relación de pareja, sintiéndose, incluso, halagadas, al percibir tales manifestaciones como una muestra del amor que sus parejas les profesan.

Por ello, resulta esencial que los centros educativos ofrezcan a las chicas jóvenes y adolescentes suficiente información para que les ayude a identificar aquéllas señales que puedan llevarles a darse cuenta de que están inmersas en una relación de pareja violenta (si ha intentado aislarla de sus amigos o familiares, si se burla de ella, la insulta, la ridiculiza, la acusa injustamente de coquetear con otros chicos, si la trata como si fuera menos competente que él, critica constantemente sus opiniones o forma de pensar, intenta saber quién la llama, escribe al móvil o quiénes son sus contactos en las redes sociales, controla su manera de vestir, maquillarse, hablar, etc.).

11. Las autoridades educativas garantizarán la escolarización inmediata de los menores dependientes de la víctima, en el caso de que se vean afectados por un cambio de residencia derivado de una situación de violencia Doméstica y violencia Intrafamiliar.

F. Servicios de Salud

f.1. Servicios de Salud

Tienen la obligación de denunciar y registrar los actos de violencia doméstica contra las mujeres, de los que tengan conocimiento durante el ejercicio de sus actividades, los médicos, farmacéuticos, odontología, estudiantes de medicina u odontología, enfermeros, paramédicos, parteras/os y demás personas relacionadas con el ejercicio de profesiones, oficios o técnicas vinculadas con la salud.

La Violencia Doméstica y violencia Intrafamiliar, en cualquiera de sus manifestaciones, tiene siempre repercusiones en la salud física, emocional, sexual, reproductiva y social de la mujer, que persisten, incluso después de que la situación haya terminado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado la violencia contra la mujer como un problema de salud de primera magnitud que afecta a las mujeres a lo largo de todas las etapas de su ciclo de vida.

Desde los servicios de salud, ya sean públicos o privados, se puede desempeñar un papel crucial para ayudar a las mujeres que sufren violencia Doméstica y violencia Intrafamiliar, ya que la mayoría de las mujeres entran en contacto con ellos en algún momento de su vida. Y los profesionales de estos servicios son el primer o único contacto que muchas mujeres víctimas tienen con las instancias públicas cuando precisan apoyo o información. Tanto los centros de salud, como de medicina especializada y los servicios de emergencia hospitalaria deben dispensar a las mujeres víctimas de agresión una adecuada atención médica, una valoración precisa de su seguridad y sistemas efectivos para movilizar los recursos propios para cada situación de violencia.

Los servicios de salud tienen, por ello, un importantísimo rol en la detección, prevención y el abordaje de la violencia contra la mujer. Si el personal de los servicios de salud es capaz de profundizar, mediante una escucha activa y empática, en aquellos elementos psicosociales y de género que tienen que ver con la forma y condiciones de vida de quien la padece, con sus problemas y su situación familiar, se podría obtener un diagnóstico acertado y precoz.

La detección de la situación de violencia por parte del personal de salud, predispondrá a la ruptura del silencio, lo que supone el primer paso para la comprensión y visualización del problema. Por el contrario, el no reconocimiento de una situación de maltrato como condicionante de un problema de salud, especialmente por figuras dotadas de “autoridad” como es el personal de salud, puede conllevar una nueva victimización para la mujer que podría contribuir a la cronificación del maltrato y a la medicalización del problema.

Asimismo, es imprescindible cuidar el lenguaje y evitar preguntas que la culpabilicen, contribuyendo a su victimización secundaria.

La OMS, en su informe Violencia contra las mujeres: Un tema de salud prioritario, recomienda al personal de salud que: *“No tenga miedo de preguntar: Contrariamente a la creencia popular, la mayoría de las mujeres están dispuestas a revelar el maltrato cuando se les pregunta en forma directa y no valorativa. En realidad, muchas están esperando silenciosamente que alguien les pregunte”*.

Define además, que las funciones mínimas a desarrollar en este tema desde el sistema de salud, son las siguientes:

- Preguntar con regularidad, cuando sea factible, a todas las mujeres sobre la existencia de violencia doméstica, como tarea habitual dentro de las actividades preventivas.
- Estar alerta a posibles signos y síntomas de maltrato y hacer su seguimiento.
- Ofrecer atención de salud integral y registrarla en la historia de salud o historia clínica.
- Ayudar a entender su malestar y sus problemas de salud como una consecuencia de la violencia y el miedo.
- Informar y remitir a las pacientes a los recursos disponibles de la comunidad.
- Mantener la privacidad y la confidencialidad de la información obtenida.
- Estimular y apoyar a la mujer a lo largo de todo el proceso, respetando su propia evolución.
- Evitar actitudes insolidarias o culpabilizadoras ya que pueden reforzar el aislamiento, minar la confianza en ellas mismas y restar la probabilidad de que busquen ayuda.
- Establecer una coordinación con otros y otras profesionales e instituciones.
- Colaborar en dimensionar e investigar el problema mediante el registro de casos.

En este apartado, pues y dependiendo de las circunstancias en que se encuentre la víctima que accede a los servicios de salud, deben definirse dos escenarios posibles de la intervención:

A) Episodio de violencia que genera lesiones físicas o psíquicas detectables y evidentes

1. La asistencia de salud se iniciará de acuerdo al plan de actuaciones terapéuticas que corresponda.
2. Si existen indicios de agresión o abuso sexual, se solicitará la presencia del Médico Forense, en los lugares donde exista. En otro caso, la del profesional de la medicina o profesional de salud que asuma su función. En esta cuestión resulta evidente que deben reducirse al menor número posible los impactos psíquicos que sufra la mujer tras la agresión. Por eso no solo está justificado, sino que es recomendable, que la evaluación ginecológica y la médico forense se realicen en un solo acto, con independencia entre las actuaciones de salud y las periciales, pero procurando que no se precisen nuevos reconocimientos.

El personal de salud de los Centros de Salud o de otro dispositivo de salud no hospitalario que atienda una agresión sexual, y salvo en supuestos de gravedad y riesgo vital que obliguen a tratamiento médico inmediato, remitirá a la víctima lo más

rápido posible y en ambulancia al hospital más cercano, sin que medien lavados ni cambios de ropa. En caso de una felación forzada, es importante en la medida de lo posible, evitar la toma de líquidos o alimentos antes del reconocimiento de la víctima en el hospital.

Es necesario propiciar un trato comprensivo hacia la mujer, creando un ambiente que facilite la comunicación, la confidencialidad así como la mayor intimidad posible, debiendo recoger la información con el mayor tacto, sensibilidad y cuidado del lenguaje, no forzando a la mujer a responder si no lo desea. Si la víctima lo desea, puede estar presente alguien de su confianza.

Es preciso informar a la mujer de todas las exploraciones que se le van a hacer y la finalidad de las mismas, comentando en todo momento lo que se está haciendo, y recabando el consentimiento cuando sea necesario

3. Tras la asistencia médica, se procederá a cumplimentar la parte de evaluación. Es un documento médico que se traslada al Ministerio Público, a través de los servicios legales correspondientes con que cuente el centro de salud en que se realice la asistencia. Su finalidad es poner en conocimiento del mismo la posible existencia de lesiones que pueden ser derivadas de la comisión de un delito o de una falta. Este debe incorporar al menos los siguientes apartados:

- Datos de filiación de la víctima (nombre, edad, sexo, dirección).
- Motivos de la asistencia según declaración de la víctima (Fecha, hora y lugar de la agresión, persona agresora si se conoce y tipo de violencia, física, psíquica o ambas).
- Antecedentes personales en relación con las lesiones.
- Exploración física (descripción de las lesiones: forma, tamaño o dimensiones, ubicación y aspectos descriptivos del color, siendo aconsejable la toma de fotografías previo consentimiento de la víctima).
- Estado emocional en el momento del parte.
- Diagnóstico y tratamiento.
- Plan de actuación y observaciones: tomando en cuenta las circunstancias de cada caso, determinará dónde se deriva a la víctima, a Centro de Salud, a un Hospital para su ingreso, a Asistencia Social, o a otro.

Es también relevante reflejar los antecedentes médicos que pudieran estar relacionados con el maltrato con el fin de dar la visión cronológica de la historia de violencia y la posible existencia de violencia habitual, relacionando los datos recogidos con la historia clínica de la víctima, si por el Ministerio Público o el Juzgado competente fuera reclamada.

4. Una vez que el parte de evaluación ha sido confeccionado, se hace lectura del mismo a la víctima y se remite, por el cauce indicado, a la mayor brevedad posible al Ministerio Público. En los lugares en que no exista presencia del Ministerio Público, el parte puede ser remitido al Juzgado. Debería entregarse a la víctima una copia de dicho parte que, en todo caso, debe registrarse y archivararse también en la historia clínica de la víctima.
5. Si esta primera actuación médica se realiza desde los servicios de emergencia o de atención especializada, se deberá cumplimentar además un informe médico que

pueda ser utilizado por el médico de cabecera que se hará cargo de la evolución del tratamiento.

6. Los profesionales de salud deben conocer cuáles son los recursos de carácter social con que cuenta el centro de salud para ofrecérselos a la víctima y en caso de que no existan o sean insuficientes se les proporcionará el contacto con los servicios de atención social del municipio o los de Atención a la Víctima que correspondan, y estén más cercanos a su domicilio.

El personal de salud ha de tener siempre presente que en el proceso de atención y recuperación de la víctima no está solo y que en sus intervenciones en situaciones de violencia contra las mujeres debe contar con otros profesionales, disponibles tanto en los centros de salud como en la atención hospitalaria.

Por ello, es importante que cada profesional tenga a su alcance información acerca de los protocolos, los recursos y servicios específicos que hay disponibles y sus características, con el fin de orientar adecuadamente a la mujer en su utilización y derivación.

7. Se debe valorar si existe un riesgo objetivo para la seguridad o integridad física de la mujer: y en el caso de que sí existiera, deberá solicitarse la presencia policial en el centro de salud.

B) Episodios de violencia que no generan lesiones detectables y evidentes

Nos encontramos aquí, ante esas situaciones, en las que el personal de salud tiene fundadas sospechas de que puede existir maltrato, de acuerdo a los indicios detectados en una revisión o una atención en base a otra dolencia. Está estudiado que las mujeres objeto de agresiones acuden al centro de salud transcurrido un tiempo por lo general largo, en torno a un año después de inicio del maltrato.

Existen una serie de signos y síntomas que pueden hacer pensar que una mujer sufre violencia Doméstica y violencia Intrafamiliar (lesiones u otros problemas de salud frecuentes, abuso de alcohol, psicofármacos u otras drogas; historia de abortos repetidos; insomnio, depresión, ansiedad, aislamiento, escasas relaciones y actividades fuera de la familia, bajas laborales, incumplimiento de citas o tratamientos uso repetitivo de los servicios de urgencias etc.).

Los centros de salud deben dotar de herramientas a sus profesionales para que los conozcan y mantengan una actitud de alerta para catalogar y detectar los signos de este tipo de violencia, de manera que la detección pueda realizarse lo más tempranamente posible. Para tal efecto disponen de la hoja de tamizaje y detección de violencia doméstica, distribuida por la Secretaría de Salud, que contiene una guía de preguntas para identificar estos signos y debe ser de cumplimiento obligatorio en los centros sanitarios, ya sean públicos o privados a nivel nacional.

Si se detectara alguno de estos signos, pueden producirse los siguientes supuestos y situaciones:

1. Si la mujer reconoce estar en una situación de violencia, se debe proceder a realizar una exploración minuciosa para detectar posibles lesiones o valorar su estado emocional, informándole de las exploraciones que se vayan a realizar y de su finalidad.
2. Si la víctima no quiere denunciar los hechos, se le ha de explicar, que denunciar no es sólo un derecho, sino también una forma de romper con la relación violenta que está sufriendo y la manera de acceder a los mecanismos de protección del sistema de justicia: alejamiento de la persona agresora, protección policial, suspensión de los derechos del padre respecto al hijo o hija, uso de la vivienda, pensión de alimentos, etc.
3. Dado de que deben considerarse delitos o infracciones de acción pública, los profesionales de la salud están obligados a reportar estos hallazgos al Ministerio Público, informando a la víctima de este hecho y las consecuencias que pueden derivarse de ello.
4. En el caso de que la víctima, tras ser informada de las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, de las consecuencias probables de actuar o no actuar, de los beneficios y riesgos esperados, también y además, como medida para garantizar su seguridad, no reconozca estar en situación de violencia y no se dispongan de elementos de juicio suficientes para poder considerar que existe una sospecha fundada, se registrarán en la historia clínica los indicios existentes y la actuación realizada, se prestará atención a los problemas físicos/psíquicos/sociales encontrados y se le ofertarán visitas de seguimiento. En todo caso, se le informará de la ubicación y teléfono de la Oficina Municipal de la Mujer (OMM), de otros posibles recursos de atención a las víctimas y de las ONGs que actúen en defensa de las mujeres más próximos al lugar de su domicilio, recomendándole que se ponga en contacto con alguno de estos servicios.

f.2. Consejerías de Familia

Es un programa de salud mental con un enfoque preventivo de atención individual y grupal, adscritos a cada Centro de Salud y algunos hospitales públicos, dependen funcional, legal y administrativamente de la Secretaría de Salud, estos programas fueron creados mediante decreto N° 079 el 9 de junio de 1993, y están integrados por personal multidisciplinario como ser: Médico, Trabajadora Social, Psicólogo (a), Abogados.

Atiende los casos referidos de los JVD y Juzgados de Familia, de detección temprana referidos de los Centros de Salud, de las redes de apoyo comunitario por demanda espontánea.

Brinda capacitación en prevención de la VD a víctimas y grupo familiar, redes de apoyo, a personal de enfermería de los CESAMOS, estudiantes de Colegios de educación secundaria.

Remite el informe mensual o dictamen sobre el cumplimiento de medidas precautorias de los sancionados, a los Juzgados VD, no especializados.

Sus actividades se coordinan con los Juzgados de VD, Juzgados de Familia, Ministerio Público, medicina forense, Centros de Salud, ONG, redes de apoyo comunitario, Colegios de educación secundaria.

f.3. Hospitales y Centros de Salud Pública o Privada

Prestan servicios de atención primaria, preclínica, clínica y especializada en salud a las víctimas, cuando se les solicita realizan evaluaciones físicas a las víctimas en aquellos lugares donde no existe servicios de medicina legal.

Dependen funcionales, administrativa y legalmente de la Secretaria de Salud Pública.

VIII. Recomendaciones

1. Deberá crearse un Registro Central Único, en el que se inscribirían todas las decisiones adoptadas por los Juzgados competentes en materia de medidas de protección, adoptadas en procedimientos seguidos por violencia doméstica o violencia intrafamiliar, así como las sentencias que impongan sanciones o penas al agresor por cualquiera de estos hechos, inmediatamente después de su dictado. Ello permitiría conocer a todos los operadores del sector justicia (Policía, Ministerio Público y Juzgados o Tribunales) prácticamente en tiempo real, los antecedentes de violencia contra la mujer que pueda tener cualquier implicado en un procedimiento de esta naturaleza.
2. Todos los Juzgados con competencia en la materia, deberían disponer de un equipo de atención psicosocial, atendido por profesionales con capacitación especializada en violencia contra la mujer.
3. Las sentencias que se dicten en los procedimientos por violencia contra la mujer deberían notificarse siempre a la unidad de Policía que hubiese intervenido en el inicio del procedimiento. Del mismo modo, les debieran ser notificadas las decisiones del Ministerio Público dejando sin efecto las medidas de seguridad que le hubieren sido impuestas policialmente, en especial, si se hubiera producido la detención del agresor.
4. Para evitar situaciones de especial conflictividad en las que, frecuentemente, se producen riesgos de sufrir violencia para la mujer, deberán implementarse Puntos Neutros de entrega institucionalizada o tutelada donde efectuar las entregas de los hijos e hijas menores al padre que no tuviere su custodia para que las visitas y comunicaciones con respecto a ellos puedan llevarse a efecto con normalidad.
5. En los casos que sea necesario, o cuando exista la imposibilidad de hacer llegar el dictamen forense practicado con la agilidad que se requiere al Juzgado competente o Ministerio Público, se podrá hacer entrega del dictamen preliminar directamente a la persona evaluada.
6. Se debe procurar que las comunicaciones que tengan que realizarse entre los diferentes operadores del sistema se verifiquen por el medio más rápido posible, preferentemente, por vía telemática.
7. Deberán crearse por parte del Estado, Casas Refugio destinadas a acoger a las víctimas de violencia contra la mujer que se encuentren en situación de emergencia y

fortalecer las ya existentes, para dotarles de mayores medios y recursos, procurando su implementación progresiva a todo el territorio nacional.

8. Dado el importante papel de coordinación institucional y de dinamización en la implementación de las políticas y actuaciones en los distintos ámbitos que intervienen en la lucha contra la violencia sobre las mujeres, se recomienda que la Unidad de apoyo a las Comisiones Interinstitucionales de Justicia (UNACIJ) apoye, entre otras, a la Comisión Técnica de Seguimiento de la Aplicación de la Ley contra la Violencia Doméstica, en procura de su expansión, a través de la creación de Subcomisiones en todo el territorio nacional.
9. Deberá habilitarse una línea telefónica específica y exclusiva de emergencias para la atención de llamadas relacionadas con la violencia contra la mujer, asignándole una numeración corta y fácilmente memorizable.

IX. Anexos

FOLIO NÚMERO ()

JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPARTAMENTO DE _____, Municipio de _____, a los _____ de _____ del año dos mil _____.

Winforme sobre la última actuación de las presentes diligencias.- CUMPLASE.

Juez

Secretario

INFORME: La infrascrita Secretaria del Juzgado Especial Contra Violencia Doméstica de _____, procede a informar que la última actuación fue en fecha _____, _____, Municipio de _____, _____ del mes de _____ de dos mil _____.

Secretario

JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DE DEPARTAMENTO DE _____, Municipio de _____, a los _____ de _____ del año dos mil _____.

VISTO: El informe que antecede, habiéndose determinado el abandono de la causa, en consecuencia, se tiene por abandonadas las presentes diligencias, debiendo remitirse al Archivo Judicial oportunamente, conforme al trámite de Ley respectivo.- Artículos 3 y 19 párrafos 7 y 8 de la Ley Contra la Violencia Doméstica; 492 del Código Procesal Civil. CUMPLASE.

Juez

Secretario



**SECRETARÍA DE SALUD
REGIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA
HOJA DE TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE VIOLENCIA DOMÉSTICA**



Nombre de Unidad de Salud:	Código Establecimiento:	Expediente:
Nombre de Usuario: 1º apellido 2º apellido Nombres		Identidad:
Fecha:		Fecha nacimiento:

Debido a que el abuso y la violencia son comunes en la vida de las mujeres, haremos estas preguntas a todas las mujeres que asistan a consulta

Violencia Psicológica:

¿Se ha sentido durante el último año dañada emocionalmente o psicológicamente por su pareja actual o una ex pareja? (Ejemplos: insultos constantes, humillaciones, destrucción de objetos apreciados, ridiculizar, rechazar, aislar, etc.)

Sí ☐ No ☐ No sabe ☐ No contesta ☐
 Cuanto Ocurrió: Días ☐ Semanas ☐ Meses ☐ Menos de un año ☐ No sabe / No contesta ☐
 Primera vez que ocurrió ☐ No ocurrió antes ☐

Violencia Física:

¿En el último año, su pareja actual o una ex pareja le ha hecho daño físico? (Ejemplos: golpes, bofetadas, mutilaciones, quemaduras, pastadas, pellizcos, empujones, etc.)

Sí ☐ No ☐ No sabe ☐ No contesta ☐
 Cuanto Ocurrió: Días ☐ Semanas ☐ Meses ☐ Menos de un año ☐ No sabe / No contesta ☐
 Primera vez ☐ Reincidencia ☐

Violencia Sexual:

¿Durante el último año, se ha sentido forzada a tener contacto o relaciones sexuales con su pareja actual o una ex pareja?

Sí ☐ No ☐ No sabe ☐ No contesta ☐
 Cuanto Ocurrió: Días ☐ Semanas ☐ Meses ☐ Menos de un año ☐ No sabe / No contesta ☐
 Primera vez ☐ Reincidencia ☐

Violencia Patrimonial:

¿En el último año, su pareja actual o una ex pareja no le ha apoyado económicamente en los gastos familiares, le quita el dinero que usted gana, controla los gastos, ha tirado objetos, dado portazos, destruido muebles, le ha corrido de la casa, quemado cosas de la casa, la controla a través del manejo de las propiedades y todos los bienes de la familia?

Cuanto Ocurrió: Días ☐ Semanas ☐ Meses ☐ Menos de un año ☐ No sabe / No contesta ☐
 Primera vez ☐ Reincidencia ☐

Seguridad:

En el último año, ha estado en peligro de muerte por su pareja o ex pareja?	SÍ	NO	NO SABE	Si contesta Sí haga o refiera para elaborar plan de seguridad.
	SÍ	NO	NO SABE	Si contesta Sí haga o refiera para elaborar plan de seguridad.
	SÍ	NO	NO SABE	Si contesta Sí haga o refiera para elaborar plan de seguridad.

Nombre de la persona que atendió: _____

Registre en el ACTA la atención brindada anotando T NEGATIVO si la mujer contesta que NO a todas las preguntas y T POSITIVO (Con el Código correspondiente) si la mujer contesta que SÍ a alguna de las preguntas.

Si contesta que SÍ a alguna de las preguntas refiera a la usuaria con una corcheta dentro de la US pero sin dar la Vigilancia Epidemiológica.

Programa Conjunto de Seguridad Humana
Secretaría de Salud de Honduras, Dirección General de Promoción de la Salud
Programa Nacional de Salud Mental
Ficha de Vigilancia Epidemiológica de Violencia Doméstica e Intrafamiliar

Datos de la persona que ha sufrido violencia		
1. Fecha de nacimiento Día Mes Año	2. Nº de expediente	3. Código establecimiento
Referido de:		Edad en años:
4.1 Juzgado <input type="checkbox"/> 4.3 Ministerio Público <input type="checkbox"/> 4.5 Otro <input type="checkbox"/>	4.2 Policía <input type="checkbox"/> 4.4 Centro de Salud/Hospital <input type="checkbox"/> 4.6 Nódulo <input type="checkbox"/>	6. Sexo <input type="checkbox"/> 6.1 M <input type="checkbox"/> 6.2 F <input type="checkbox"/>
B. País de nacimiento		7. Identidad
8.1 Honduras <input type="checkbox"/>	8.2 Otro país de C.A. <input type="checkbox"/>	8.3 Calle y nº de casa
8.4 Otro país <input type="checkbox"/>	8.5 Residencia último año	9.1 País <input type="checkbox"/>
9.1 País <input type="checkbox"/>	9.2 Depto. <input type="checkbox"/>	9.3 Municipio <input type="checkbox"/>
10. Estado Civil	11. Ocupación	12. Escolaridad
10.1 Soltero / a <input type="checkbox"/>	11.1 Oficio doméstico <input type="checkbox"/>	12.1 Primaria <input type="checkbox"/> 12.2 Unversitaria <input type="checkbox"/>
10.2 Casado / a <input type="checkbox"/>	11.2 Comerciante <input type="checkbox"/>	12.3.1 P. Incompleta <input type="checkbox"/> 12.3.1 U. Incompleta <input type="checkbox"/>
10.3 Viudo / a <input type="checkbox"/>	11.3 Obrero / a <input type="checkbox"/>	12.3.2 P. Completa <input type="checkbox"/> 12.3.2 U. Completa <input type="checkbox"/>
10.4 Divorciado / a <input type="checkbox"/>	11.4 Estudiante <input type="checkbox"/>	12.2 Secundaria <input type="checkbox"/>
10.5 Unión libre <input type="checkbox"/>	11.5 Profesional ejerciendo <input type="checkbox"/>	12.2.1 S. Incompleta <input type="checkbox"/>
10.6 No aplica <input type="checkbox"/>	11.6 Trabajador / a del sexo <input type="checkbox"/>	12.2.2 S. Completa <input type="checkbox"/>
11.7 Otro <input type="checkbox"/>		
13. Tipo de Violencia	14. Lugar del Hecho	15. Secuencia de la Violencia
13.1 Doméstica <input type="checkbox"/> 13.2 Intrafamiliar <input type="checkbox"/>	14.1 Hogar <input type="checkbox"/>	15.1 Física <input type="checkbox"/>
13.3 Emocional <input type="checkbox"/> 13.3.1 Emocional <input type="checkbox"/>	14.2 Trabajo <input type="checkbox"/>	15.2 Sexual <input type="checkbox"/>
13.3.2 Física <input type="checkbox"/> 13.3.2 Física <input type="checkbox"/>	14.3 Vía Pública <input type="checkbox"/>	15.3 Psicológica <input type="checkbox"/>
13.3.3 Sexual <input type="checkbox"/> 13.3.3 Sexual <input type="checkbox"/>	14.4 Escuela <input type="checkbox"/>	15.4 Social <input type="checkbox"/>
13.3.4 Psicológica / Económica <input type="checkbox"/> 13.3.4 Psicológica / Económica <input type="checkbox"/>	14.5 Otro <input type="checkbox"/>	15.5 Otro <input type="checkbox"/>
13.3.5 Negligencia / Abandono <input type="checkbox"/>		
16. La persona viene acompañada / a	17. Relación con la persona que la lo acompaña	
16.1 Si <input type="checkbox"/> 16.2 No <input type="checkbox"/>	17.1 Familiar <input type="checkbox"/> 17.2 Amigo/a Vecino/a <input type="checkbox"/> 17.3 Otro <input type="checkbox"/>	
18. Relación con el ofensor/a	19. Caso nuevo	
18.1 Esposa <input type="checkbox"/> 18.2 Ex-esposa <input type="checkbox"/> 18.3 Padre <input type="checkbox"/> 18.4 Madre <input type="checkbox"/>		
18.5 Esposa <input type="checkbox"/> 18.6 Compañera <input type="checkbox"/> 18.7 Madre <input type="checkbox"/> 18.8 Otro <input type="checkbox"/>		
18.9 Esposa <input type="checkbox"/> 18.10 Compañera <input type="checkbox"/> 18.11 Madre <input type="checkbox"/> 18.12 Otro <input type="checkbox"/>		
20. Número de denuncias interpuestas		
20.1 Nódulo <input type="checkbox"/> 20.2 Compañera <input type="checkbox"/> 20.3 Padre <input type="checkbox"/>		
Datos del presunto Ofensor/a		
21. Conocimiento al ofensor/a	22. Nombre	23. Sexo: Masculino <input type="checkbox"/> Femenino <input type="checkbox"/>
21.1 Conocido <input type="checkbox"/> 21.2 Desconocido <input type="checkbox"/>	22. Edad en años:	24. Sexo: Masculino <input type="checkbox"/> Femenino <input type="checkbox"/>
25. Estado Civil	26. País de nacimiento	27. Residencia Habitual
25.1 Soltero / a <input type="checkbox"/>	26.1 Honduras <input type="checkbox"/>	27.1 País <input type="checkbox"/>
25.2 Casado / a <input type="checkbox"/>	26.2 Otro país de C.A. <input type="checkbox"/>	27.2 Depto. <input type="checkbox"/>
25.3 Viudo / a <input type="checkbox"/>	26.3 Otro país <input type="checkbox"/>	27.3 Ciudad <input type="checkbox"/>
25.4 Divorciado / a <input type="checkbox"/>	26.4 No sabe <input type="checkbox"/>	27.4 Aída o casero <input type="checkbox"/>
25.5 Unión libre <input type="checkbox"/>		27.5 Barrio o colonia <input type="checkbox"/>
25.6 No sabe <input type="checkbox"/>		27.6 Calle y Nº de casa <input type="checkbox"/>
		27.7 No sabe <input type="checkbox"/>
28. Adicciones	29. Ocupación	30. Escolaridad
28.1 Alcohol <input type="checkbox"/>		30.1 Primaria <input type="checkbox"/> 30.2 Unversitaria <input type="checkbox"/>
28.2 Drogas <input type="checkbox"/>		30.3.1 P. Incompleta <input type="checkbox"/> 30.3.1 U. Incompleta <input type="checkbox"/>
28.3 Juegos de azar <input type="checkbox"/>		30.3.2 P. Completa <input type="checkbox"/> 30.3.2 U. Completa <input type="checkbox"/>
28.4 Ninguna <input type="checkbox"/>		30.2 Secundaria <input type="checkbox"/>
28.5 No sabe <input type="checkbox"/>		30.2.1 S. Incompleta <input type="checkbox"/> 30.4 Ninguna <input type="checkbox"/>
		30.2.2 S. Completa <input type="checkbox"/> 30.5 No sabe <input type="checkbox"/>
31. Forma de capturar	32. Intervención recibida	33. Referencia
31.1 Referencia <input type="checkbox"/>	32.1 Reeducación <input type="checkbox"/>	33.1.1 Grupo de masculinidad <input type="checkbox"/>
31.2 Denuncia <input type="checkbox"/>	32.2 Atención Psicológica <input type="checkbox"/>	33.1.2 Consejería de familia <input type="checkbox"/>
31.3 Demanda espontánea <input type="checkbox"/>	32.3 Atención Psiquiátrica <input type="checkbox"/>	33.1.3 Psiquiatra <input type="checkbox"/>
31.4 No capturado <input type="checkbox"/>	32.4 Ninguna <input type="checkbox"/>	33.1.4 Médico general <input type="checkbox"/>
		33.1.5 Otro <input type="checkbox"/>
34. Información brindada por:		
34.1 Presunto ofensor/a <input type="checkbox"/>		
34.2 Otra persona <input type="checkbox"/>		
Otra información		
35. Fecha de llenado de la ficha: Día Mes Año		
36. Nombre de la persona que llenó:		

REGIÓN SANITARIA METROPOLITANA
SALUD MENTAL

CONSEJERÍA DE FAMILIA
UNIDAD DE EVALUACIÓN JURÍDICA
HOJA DE INGRESO

I. DATOS GENERALES

NOMBRE _____

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO _____

EDAD _____

ESCOLARIDAD _____

NOMBRE DE LOS PADRES _____

PARENTESCO _____

DIRECCIÓN _____

MOTIVO DE _____

FECHA DE REMISIÓN _____

REMITIDO POR _____

II. OBSERVACIONES



SECRETARÍA DE SALUD

**REGIÓN SANITARIA METROPOLITANA DEL DISTRITO CENTRAL
DE FRANCISCO MORAZÁN
DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
CONSEJERÍA DE FAMILIA
ASESORÍA LEGAL**

CONSTANCIA DE MUJERES

El (La) Suscrito (a) Asesor(a) Legal de la Consejería de Familia del Centro de Salud

Por este medio Hace Constar que la señora _____
_____ referido a esta consejería por el Juzgado con
el expediente número _____, en la Consejería de Familia
ubicada en _____
ha culminando su proceso de fortalecimiento de la autoestima de la mujer en base a las
Reformas de la Ley Contra la Violencia Doméstica artículo 6 numeral 2 literal (b). Inicio su
proceso _____
finalizando _____
Y para los fines que a la interesada estime conveniente se le extiende la presente en la ciu-
dad de _____ M.D.C. a los _____ días del mes de _____ del año _____

Abogado (a). _____



SECRETARÍA DE SALUD

REGIÓN SANITARIA METROPOLITANA DEL DISTRITO CENTRAL

DE FRANCISCO MORAZÁN

DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL

CONSEJERÍA DE FAMILIA

ASESORÍA LEGAL

SOLICITUD DE PERMISO

Señor (es) _____

Departamento: _____

Dependencia _____

Su oficina _____

Por este medio se le solicita se solicita su colaboración para que conceda un permiso de salida en sus horas laborables al señor (a) _____

_____ a fin de que se de estricto cumplimiento a las medidas impuestas por el juzgado _____

_____ sin que eso cause ningún perjuicio de carácter laboral enmarcadas dentro de las Reformas a la Ley Contra la Violencia Doméstica según Decreto Legislativo 253-2005 artículo 5 numeral 2 literal (b) 3 párrafo y lo aplicable a las normas y procedimientos para el abordaje de la violencia Intrafamiliar Doméstica en la Consejería de Familia del Centro de Salud _____

dependencia de la Región Sanitaria Metropolitana del Distrito Central de Francisco Morazán de la Secretaría de Salud ubicada _____ Los días la hora _____ una vez a la semana o dos horas diarias durante (2) _____ (3) _____

meses, Permiso que iniciara en fecha _____ finalizando

El incumplimiento a lo ordenado por los Juzgados correspondientes dar lugar al delito de Desobediencia Artículo 346 del Código Penal.

En la ciudad de _____ M.D.C., A los _____ días del mes _____ del año _____

Abogado (a). _____ CC: _____

Asesor Legal

Responsable del Proceso

ACTA DE IMPOSICIÓN Y NOTIFICACIÓN DE MEDIDAS

En la ciudad de _____, M.D.C, Francisco Morazán, siendo las horas, del día del _____ mes _____ del año _____, Vista la denuncia No. _____ interpuesta por la señora _____ por hechos constitutivos de VIOLENCIA DOMÉSTICA cometidos según denuncia, por su (su esposo, compañero de hogar, novio, ex esposo, ex compañero de hogar o ex novio) el señor _____, en aras de la protección y seguridad de la señora _____, esta con las facultades que le confiere la Ley contra la Violencia Doméstica, IMPONE las siguiente medidas de seguridad por el término de _____ partir de la fecha que sean notificadas al denunciado, las que podrán ser prorrogadas por el Juzgado _____ a quien le corresponde conocer del caso en audiencia oral, para lo cual citará oportunamente a las partes involucradas; Medidas de Seguridad que se detallan a continuación:

1. Se detiene al señor _____ por un término de 24 horas.
2. Se notifica al señor _____, que a partir de esta fecha _____ se le separa temporalmente del hogar que comparte con la señora _____.
3. Se le prohíbe al señor _____ transitar por la casa de habitación, centro de trabajo o lugares habitualmente frecuentados por la señora _____ (siempre y cuando esta medida no interfiera con el trabajo o estudio del denunciado).
4. Se retienen temporalmente la (s) arma (s) encontradas en poder del señor _____ que se describe a continuación: _____
(siempre y cuando esta medida no interfiera con el trabajo o estudio del denunciado).
5. Se notifica al señor _____ que se ha entregado a domicilio a la señora _____ y a sus menores hijos (as).
6. Se le advierte al señor _____ que si realiza nuevos actos de intimidación o perturbación contra la ofendida, incurrirá en delito y se le iniciará proceso por la vía criminal.

Nombre, Cargo y Firma de la Autoridad que impuso las Medidas

En este acto se notifican personalmente al señor _____ las medidas impuestas, quien queda entendido y firma para constancia, a los _____ días del mes de _____ del año dos mil _____, siendo las _____ horas.

Firma del denunciado

ACTA DE ENTREGA DE CITACIÓN FISCALÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO

En la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a los _____ días del mes de _____ del año _____, constituidos en el domicilio del señor _____, sita en la colonia o barrio _____, caso No. _____, él/la oficial de investigación No. _____, con el objeto de citarlo para que comparezca a la Fiscalía del Ministerio Público, ubicada en la colonia o barrio _____, de esta ciudad, el día de hoy _____, a las _____ horas, con el objeto de NOTIFICARLE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPUESTAS en virtud de DENUNCIA No. _____, presentada en su contra por hechos constitutivos de Violencia Doméstica, que se produjeron según denuncia el día _____ del mes de _____ del año _____ en perjuicio de la señora _____ y en aras de la protección y seguridad de la misma se procede de la siguiente manera:

1. Se notifica al señor _____ que a partir de esta fecha se le separa temporalmente del hogar que comparte con la señora _____.
2. Se le prohíbe al señor _____ transitar por la casa de habitación, centro de trabajo o lugares habitualmente frecuentados por la señora _____ (siempre y cuando esta medida no interfiera con el trabajo o estudio del denunciado).
3. Se notifica al señor _____ que se ha reintegrado a su domicilio a la señora _____ y a sus menores hijos/as.
4. Se le advierte al señor _____ que si realiza nuevos actos de intimidación o perturbación contra la ofendida incurrirá en delito y se le iniciará proceso por la vía criminal.

Se le hace la advertencia que de no comparecer el día y hora señalados, se tendrá por bien hecha la citación y por notificadas las Medidas de Seguridad que se detallaron anteriormente.

Firma del Fiscal

Firma del Agente D.G.I.C. o
Policía Preventiva

Firma de Recibido

**ACTA DE CITACIÓN
FUJADA EN LA PUERTA DE ENTRADA DEL DOMICILIO
DEL DENUNCIADO**

En la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a los _____ días del mes de _____ del año _____, constituidos en la casa del señor _____, de la colonia o barrio _____, caso No. _____, sector _____, de la ciudad de _____, él/la _____ con el objeto de citarlo para que comparezca a la _____, de esta ciudad, el día _____ a las _____ horas, con el objetivo de **NOTIFICARLE PERSONALMENTE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPUESTAS** en virtud de **DENUNCIA No. _____** presentada en su contra por hechos constitutivos de Violencia Doméstica, que se produjeron según denuncia el día _____ del mes _____ del año _____ en perjuicio de la señora _____.

No habiéndose recibido la cédula de citación por persona alguna que habita la morada, se adhirió la misma en la puerta de su vivienda, y en donde se hace de su conocimiento las medidas aplicadas, siendo las _____ horas _____ del día _____ del año _____.

Para constancia y en cumplimiento de los artículos 1 y 5 de la Ley contra la Violencia Doméstica, firman como testigos:

TESTIGO

TESTIGO

**TIPO DE VIOLENCIA**

FÍSICA ☐ SEXUAL ☐ PATRIMONIAL Y/O ECONÓMICA ☐ PSICOLÓGICA ☐

NARRACIÓN DE LOS HECHOS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN _____

NOMBRE Y GRADO DE AUTORIDAD POLICIAL

REMITE**FIRMA**



**REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
POLICÍA NACIONAL
UNIDAD DE GÉNERO**

RECEPCIÓN Y REMISIÓN DE DENUNCIA POR VIOLENCIA DOMÉSTICA

JUZGADO _____
UNIDAD POLICÍA _____ LUGAR _____
FECHA _____
DENUNCIA No. _____

DATOS DEL (A) PERJUDICADA (O)

NOMBRE _____
EDAD _____ IDENTIDAD _____
OCUPACIÓN _____
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO _____
TELÉFONO _____
LUGAR Y DIRECCIÓN DE TRABAJO _____
TELÉFONO _____
NACIONALIDAD _____

DATOS DEL DENUNCIADO (A)

NOMBRE _____
EDAD _____ IDENTIDAD _____
OCUPACIÓN _____
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO _____
TELÉFONO _____
LUGAR Y DIRECCIÓN DE TRABAJO _____
TELÉFONO _____
NACIONALIDAD _____
NOMBRE DE PERSONA QUE INTERPONE LA DENUNCIA _____

TIPO DE RELACIÓN CON EL DENUNCIADO (A):

Esposo ☐ ex esposo ☐ compañero de hogar ☐ novia ☐ ex novio ☐ otro ☐

Nº DE HIJOS EN COMÚN _____

GOLPES VISIBLES QUE PRESENTA LA PERJUDICADA (O) _____

ARMA QUE SE DECOMISÓ _____



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
POLICÍA NACIONAL



**ACTA DE IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD AL DENUNCIADO
POR ACTOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA
Autoridad que impone las medidas**

Dirección General Policía Preventiva () Dirección General Investigación Criminal ()

Dirección Policial: _____

Lugar y Fecha: _____

Nombre del (a) denunciado (a): _____

Nº. de identidad: _____ Dirección: _____

IMPOSICIÓN DE MEDIDAS AMPARADAS EN DENUNCIA Nº _____

Y EN EL ARTÍCULO Nº 6 DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA PARA DETENER LA VIOLENCIA Y
PREVENIR MALES MAYORES, EN CONTRA DE: _____

Identidad Nº _____ Dirección: _____

MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE IMPONEN

Marque con un círculo la letra de la medida que impone:

- a) Separar temporalmente al denunciado del hogar que comparte con la denunciante.
- b) Prohibir al denunciado (a) transitar por la casa de habitación, centro de trabajo o lugares habitualmente frecuentados por la (e) denunciante, siempre y cuando esta medida no interfiera en las relaciones laborales o de estudio del denunciante (a).
- c) Detener por un término no mayor de veinticuatro (24) horas, al denunciado in fraganti.
- d) Prohibir al denunciado realizar actos de intimidación o perturbación contra la mujer, contra cualquier miembro del grupo familiar o las personas relacionadas con la denunciante.
- e) Retener inmediatamente y de forma temporal las armas que se encuentren en poder del denunciado.
- f) Reintegrar al domicilio a petición de la mujer que ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal o del grupo familiar, así como la restitución de los bienes que le pertenecen y el menaje, debiendo en este caso imponer inmediatamente la medida establecida en el inciso a), siempre y cuando la denunciante no se oponga.
- g) Ingresar o allanar el domicilio sin necesidad de procedimiento alguno en casos de flagrancia o por orden judicial en el caso de que el denunciado incumpla la medida establecida en el inciso a); entendiendo por flagrancia como: detener a la persona en el momento de cometer el acto para evitar males mayores.

- h) Conceder el Menaje de la Vivienda (cuando la mujer se vea obligada por razones de seguridad a salir del hogar que comparte con el denunciado, podrá llevar consigo aquellos bienes que garanticen su bienestar y del grupo familiar) y,
- i) Remitir a un Domicilio Seguro a la afectada.

Medidas de Seguridad que deberán ser cumplidas por el denunciado por un término de dos (2) meses, precediéndose a notificarse: Personalmente: () Por medio de la entrega a persona mayor de 14 años () Fijada en la Puerta del Domicilio ().

Se le advierte al denunciado (a) que en caso de incumplimiento de las Medidas, se le sancionará por el Delito de Desobediencia a la Autoridad.

NOMBRE DEL DENUNCIADO

NOMBRE Y GRADO DE LA AUTORIDAD QUE IMPONE LA MEDIDA

El Ministerio Público y la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad serán competentes para vigilar la ejecución y cumplimiento de las medidas de seguridad que impongan, cesando esta obligación hasta la celebración de la audiencia que será asumida por el Juzgado correspondiente (art. 21 LCVD)

**SE REMITE DENUNCIA POR HECHOS CONSTITUTIVOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA.-
SE PONE EN CONOCIMIENTO DE ESE JUZGADO LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN
IMPUESTOS.- SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS.- SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA.**

Juzgado Especializado contra la Violencia Doméstica del Departamento de Francisco Morazán.

Yo, _____ en mi condición de _____

Con mi acostumbrado respeto comparezco ante usted remitiendo la denuncia siguiente: _____

Fecha y Número de la denuncia: _____

Denunciantes: _____

Col: _____ Casa: _____ Bloque: _____

Sector: _____ Teléfono: _____

Denunciado: _____

Col: _____ Casa: _____ Bloque: _____

Sector: _____ Teléfono: _____

PRIMERO: _____

SEGUNDO: Se desprende de los hechos anteriormente narrados que la violencia que sufre la señora _____

_____ se enmarca dentro de la violencia

(física, psicológica, sexual, y/o patrimonial).

TERCERO: Que en base a los hechos anteriormente narrados y por considerar el caso urgente, en aras de la protección y seguridad de la señora _____

consideró procedente aplicar las Medidas de Seguridad, contempladas en el artículo 6, numeral 1, literales a, b, c y ch de la Ley contra la Violencia Doméstica (se imponen tantas medidas que sean necesarias frente al hecho que se denuncia), mismas que fueron notificadas en legal y debida forma al denunciado, tal como se acredita con el documento que se acompaña (ACTA DE IMPOSICIÓN Y NOTIFICACIÓN DE MEDIDAS).

CUARTO: Se sugiere a ese Juzgado la aplicación de las Medidas Precautorias consignadas en el artículo 6, numeral 2, literales a y b; y Cautelares, establecidas en el numeral 3, literales a, b y c del mismo artículo de la Ley contra la Violencia Doméstica.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento este escrito en los Artículos 3, 4 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Belem Do Para"; Artículo 80 de la Constitución de la

República; 1 y 40 de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 1,2,4,5, 6, 9, f 2 y demás aplicables de la Ley contra la Violencia Doméstica; 1 y 33 de la Ley del Ministerio Público.

PETICIÓN

Al (a) señor (a) Juez (a) pido: Admitir la presente denuncia, con los documentos que se acompañan, que dentro del término de 24 horas se fije audiencia con indicación de día y hora, a la que comparecerán la ofendida y el denunciado a fin de que ambos expongan sus pretensiones, que oportunamente se ratifiquen o se amplíen las medidas de seguridad impuestas, decretándose las Medidas Precautorias y Cautelares sugeridas u otro mecanismo de protección que ese Juzgado tenga a bien aplicar, de ser necesario se abra el presente juicio a pruebas y en definitiva se dicte la resolución que en derecho corresponda

Tegucigalpa, M.D.C., _____ del mes de _____ del _____

Firma y sello del Fiscal

AUDIENCIA

En la Ciudad de _____ el ____ de _____ del año _____, siendo el día y la hora señalado para la celebración de la presente audiencia.- Presentes en este Despacho de Justicia los Señores _____, (denunciante) mayor de edad, (demás datos generales) con identidad número _____.- Cédida que le fue la palabra a la señora _____ a lo que manifiesta: Si ratifico la denuncia y que a mí me gustaría que: _____ me ayude con mis hijos, a veces él me pasa gritando y la última vez que me gritó fue en este mes de enero cuando se le fue a entregar la nota para que se retire de la casa, diciéndome porque yo tenía mis hijos en la casa de mi madre y yo le dije que yo ahí lavo ropa ajena y públicamente me gritó que yo andaba con muchos hombres, eso sucedió como a las diez de la mañana del veinte de enero de este año, de esos insultos fueron testigos mi hermano _____ y mi cuñada _____, y cuando me retiré de él me trató de india.- Cédida que fue la palabra al Señor _____ a lo que manifiesta: Es cierto que yo llamo por teléfono _____ solicitándole ver a mis Hijos, y ella generalmente me responde que no, en ningún momento la he amenazado con quitarle a los niños o hacerle un daño, yo ayudo económicamente cada vez que mis hijos me piden que es a diario o la semana, aunque dinero no les doy, ya que compro la comida, la ropa y salud de ellos compro los útiles, uniformes porque ellos están en escuela pública, aunque este año no les he comprado sus útiles porque no los he visto y no sé lo que necesitan, y los niños en dos años han estado en cuatro escuelas diferentes y la niña el año pasado perdió el primer curso por responsabilidad _____ ya que le permitió tener un novio que es mayor de edad y por esto presenté una Demanda por Riesgo Social en la Fiscalía y en el Juzgado de la Niñez, y a los acuerdos que se han llegado en esos lugares _____ no los ha cumplido, es cierto que yo llegué al estanco (cantina) que tiene en la casa la madre de _____ que fue el lugar donde los Agentes de la DNIC fueron a traer a mis hijos, esto fue el día diecinueve de enero del presente año, cuando llegué a querer ver a mis hijos lo que recibí fue la notificación que me entregó _____ de las Medidas de Seguridad y lo único que le pregunté qué es esto, ya que teníamos un acuerdo de visita para compartir a los niños una semana cada uno durante ellos estuvieran de vacaciones, es cierto que ese día traté a _____ de india al ver la terquedad de ella, luego me di la vuelta y me fui, es cierto que en este mes de enero y febrero de este año no le he ayudado en nada a _____ con los gastos de nuestros hijos.- Se ratifican las MEDIDAS DE SEGURIDAD: de los incisos B) y D) impuestas por este Juzgado y por el Ministerio Público, las cuales se validan por el término de seis meses.- MEDIDAS PRECAUTORIAS: Se remite a la Señora _____ a la Consejería de Familia de; Centro de Salud del Barrio LAS CRUCITAS y al señor _____ a la Consejería de Familia del Centro de Salud VILLA ADELA, para su autoestima y su reeducación respectivamente.- En cuanto a las MEDIDAS CAUTELARES: La Guarda y Cuidado provisional de los niños _____ de 12 y 10 años de edad, ambos de apellidos _____, queda a favor de su madre la señora _____.- En cuanto al Régimen de Comunicación entre el señor _____ y sus hijos, con el consentimiento de la señora será desde el día sábado a las diez de la mañana, hasta el día domingo a las cuatro de la tarde, dicho señor recogerá y devolverá a sus hijos en el horario antes indicado en la casa de su padre _____, quien vive a ocho cuerdas de la casa que habita la señora _____.- Se fija como Pensión Alimenticia provisional la cantidad de MIL LEMPIRAS (Lps. 1,000.00) QUINCENALES, asimismo el señor _____ deberá cubrir los gastos

de útiles escolares, salud y vestuario que sean necesarios para sus dos hijos y la cantidad antes señalada la vendrá a depositar a la Secretaría de este Juzgado el día viernes de cada quincena, éstas medidas se imponen por el término de seis meses - estuvo presente en este acto la Fiscal de Ministerio Público la Abogada _____, con carné del Colegio de Abogados de Honduras número _____, quien atiende sus asuntos profesionales en la Fiscalía Especial de la Mujer, Dependencia del Ministerio Público; brindando asistencia técnica y jurídica a la señora _____. Por este acto el señor _____, Le confiere poder para que lo represente en las presentes diligencias a la Defensa Pública Abogada _____, con carné del Colegio de Abogados de Honduras número _____, les inviste de todas las facultades generales del Mandato Judicial y las Especiales de expresa mención consignadas en el Artículo 81, 82 del Código Procesal Civil, quien atiende sus asuntos profesionales Defensa Pública de esta Ciudad Capital quien manifiesta que acepta el poder a ella conferido con las facultades otorgadas EL JUZGADO RESUELVE; Tener por evacuada la presente audiencia, tener a la Fiscal del Ministerio Público la Abogada _____ en su condición de Representante legal de la Señora _____ y a la Defensora Pública Abogada _____, en su condición de Apoderada legal del Señor _____ y siendo que el señor _____ aceptó parcialmente el contenido de la Denuncia presentada por la señora _____, se procede en este acto a dictar la Sentencia Definitiva correspondiente, la cual se leerá de la siguiente manera: JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de Febrero del año dos mil once - VISTA: Para dictar Sentencia Definitiva en violencia Doméstica, interpuesta por la señora _____ mayor de edad, hondureña, soltera, de Oficios Domésticos, con domicilio en el Barrio Las Crucitas, casa _____, calle principal, con teléfono _____ contra el señor _____, mayor de edad, hondureño, unión libre, coa domicilio en la Colonia Nuevos Horizontes, bloque _____, casa _____, calle principal, con teléfonos _____ con tarjetas de identidad número _____ respectivamente.- INTERVIENEN: La Fiscal del Ministerio Público la Abogada _____ en su condición de Representante legal de la señora _____ y la Defensora Pública Abogada _____, en su condición de Apoderada Legal del Señor _____.

ANTECEDENTES

PRIMERO: Que en fecha dieciocho de enero del año dos mil once, la señora _____ se presentó ante el Ministerio Público interponiendo denuncia de Violencia Doméstica, contra el señor _____, la cual fue remitida y admitida por este Juzgado mediante auto de fecha veinticuatro de Enero de dos mil once, ver folios uno a tres del expediente - SEGUNDO: Que en fecha nueve de Febrero del año dos mil once, se celebró audiencia con la comparecencia de ambas partes y en la misma se impusieron las medidas siguientes: Medidas de Seguridad, Medidas Precautorias y medida Cautelares.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

TERCERO: Que el artículo uno de la Ley contra la Violencia Doméstica, establece que las disposiciones de dicha ley son de orden público, de ineludible observancia y tienen por objeto proteger la integridad

física, psicológica, patrimonial y sexual de la mujer, contra cualquier forma de violencia por parte de su cónyuge, ex cónyuge, compañero, ex compañero de hogar o cualquier relación afin a una pareja en la que medie, haya mediado o no cohabitación, incluyendo aquellas relacionadas en las que se sostiene o se haya sostenido una relación sentimental.- Asimismo el artículo aludido también establece que los Derechos consagrados en la Ley Contra la Violencia Doméstica son universales y que todo acto de discriminación y violencia doméstica contra la mujer será sancionado de conformidad a la misma ley, a la Convención interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y de conformidad a otras leyes que protejan los derechos de las mujeres.- CUARTO: Que el artículo cinco de la Ley contra la Violencia Doméstica define a la Violencia Psicológica: como toda acción u omisión cuyo propósito sea degradar o controlar las acciones, por comportamientos, creencias y decisiones de la mujer; por medio de intimidación, manipulación y amenaza directa, humillación, aislamiento, encierra, cualquier otra conducta u omisión que implique un perjuicio en el desarrollo Integral o la autodeterminación de la mujer o que ocasione daño emocional, disminuya la autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la mujer ejerciendo actos en descrédito de la mujer o menosprecio al valor personal o dignidad, tratos humillantes o vejatorios, vigilancia, aislamiento, insultos, el chantaje, degradación, ridiculizar, manipular, explotar o amenazar con el alejamiento de los o las hijas entre otras.- QUINTO: Que el artículo cinco de la Ley contra la violencia Doméstica define como Violencia Patrimonial y /o Económica: Todo acto u omisión que implica pérdida, transformación, negación, sustracción, destrucción, retención de objetos, documentos personales, bienes muebles e inmuebles, valores, recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer del grupo familiar; incluyendo el menoscabo, reducción a negación que afecten los ingresos de la mujer o el incumplimiento de obligaciones alimentarias. - SOTO: Que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable.- SÉPTIMO: Que Todos los hombres y mujeres nacen libres e iguales en derechos, se declara punible la discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana.- OCTAVO: Que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en su artículo 2 inciso e) establece el compromiso de los Estados Partes de adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualquier persona, organización o empresas.- NOVENO: Que la Convención para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer en su preámbulo reconoce que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.

VALORACIÓN

DÉCIMO: Que para tutelar o restituir los derechos de las mujeres que sufran de violencia doméstica se establecerán mecanismos de protección consistentes en; Medidas de Seguridad Medidas Precautorias y Medidas Cautelares. ONCEAVO: Que de acuerdo al análisis de los hechos denunciados y aceptados parcialmente por el señor _____ en la Audiencia celebrada el día de hoy nueve de Febrero de dos mil once, ya que entre otros apuntados expresó literalmente lo siguiente: "es cierto que yo llegue al estanco (cantina) que tiene en fa casa la madre de _____ que fue el lugar donde los Agente de la DNIC fueron a traer a mis hijos, esto fue el día diecinueve de enero del presente año, cuando llegué a querer ver a mis hijos lo que recibí fue la notificación que me entregó _____

de las Medidas de Seguridad y lo único que le pregunte qué es esto, ya que teníamos un acuerdo de visita para compartir a los niños una semana cada una durante, ellos estuvieran de vacaciones, es cierto que ese día traté a _____ de india al ver la terquedad de ella, luego me di la vuelta y me fui, es cierto que en este mes de enero y febrero de este año no le he ayudado en nada a _____ con los gastos de nuestros hijos". En consecuencia, procede dictar el fallo correspondiente.

PARTE RESOLUTIVA

POR TANTO: Este Juzgado Especial Contra la Violencia Doméstica del Departamento de Francisco Morazán, en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos: 59, 60, 63, 80, 82, 89, 90, 303, 304, 314 de la Constitución de la República; 1 y 40 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1,2,3,4,5, 5, 7 de la Ley Contra la Violencia Doméstica; 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 1,2,7, y 8, de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 1.2.3, de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer; 1, 2, 3, 4.5 de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1,2,3, 4,5,6,7,8, 9 de la Convención interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Oe Belem Do Para) y artículos Artículo 81,82 del Código Procesal Civil.- FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Denuncia de Violencia Doméstica, interpuesta por la señora _____, contra el señor _____ ambos de generales ya conocidos en el preámbulo de la sentencia, tipificándose los actos ejercidos como Violencia Psicológica y Económica- 2) Ratificando las Medidas de Seguridad, Medidas Precautorias y Medidas Cautelares, impuestas en la audiencia celebrada el día de hoy nueve de febrero de dos mil once.- 3) Se Impone la Sanción de prestación de servicios a la comunidad al señor _____ por el termino de UN MES el cual será cumplido en el periodo de dos horas dianas en la Alcaldía Municipal del Distrito Central, la cual se hará cargo de su estricto cumplimiento, gírese la nota correspondiente a dicha Alcaldía Municipal.- Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho proceda a dar lectura íntegra a la presente Sentencia Definitiva; Asimismo quede firme el fallo si dentro del término de ley las partes no interponen ningún recurso; de todo lo cual quedan debidamente notificados todos los comparecientes.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Abog. _____

Jueza

DENUNCIANTE

DENUNCIADO

Fiscal del Ministerio Público

Defensora Pública

Secretaria

FOLIO NUMERO **** (F)

AUDIENCIA A PRUEBAS

En el mismo lugar y en fecha _____ del año dos mil _____, siendo la una y treinta de la tarde, se reanuda la presente audiencia que tiene por objeto que las partes por su orden propongan y evacuen los

MEDIOS DE PRUEBA que estimen pertinentes.-

La abogada _____, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en representación de la denunciante. Por este acto el señor A confiere poder al abogado _____, con carné de colegiación número _____, quien atiende sus asuntos profesionales en _____, teléfono _____, celular: _____, a quien inviste de las facultades generales del mandato judicial y las especiales de desistir en primera instancia, absolver posiciones, renunciar de los recursos o los términos legales, conciliar, transigir, aprobar convenios, percibir, sustituir y delegar, quien manifiesta que acepta el poder que le fue conferido.-

Por este acto el señor _____ confiere poder a la abogada _____, con carné de colegiación número _____, quien atiende sus asuntos profesionales en las oficinas de la Defensa Pública, edificio de la Corte Suprema de justicia, colonia Miraflores, contiguo a Chiminike, teléfono: _____ Celular: _____ a quien inviste de las facultades generales del mandato judicial y las especiales de desistir en primera instancia, absolver posiciones, renunciar de los recursos o los términos legales, conciliar, transigir, aprobar convenios, percibir, sustituir y delegar quien manifiesta que acepta el poder que le fue conferido.-

Cedida que le fue la palabra a la abogada a la abogada _____, manifiesta que propone los siguientes Medios de Pruebas:

MEDIO DE PRUEBA TESTIFICAL, el cual consiste en la declaración de los testigos: 1) _____, quien es mayor de edad, _____ con identidad No. _____, hondureño (a) y de este domicilio.- 2) _____, quien es mayor de edad, _____ con Identidad No. _____, hondureño(a) y de este domicilio; testigos que depondrán sobre los hechos denunciados. -

MEDIO DE PRUEBA PERICIAL, el cual consiste en la realización de un estudio psicosocial a las partes y a su grupo familiar por medio de las facultativas adscritas a este Despacho.

MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL, el cual consiste en: 1) _____; 2) _____; 3) _____; 4) _____.

Cedida que le fue la palabra a la abogada _____ o al abogado _____, manifiesta que propone los siguientes Medios de Prueba:

MEDIO DE PRUEBA TESTIFICAL, el cual consiste en la declaración de los testigos: 1) _____, quien es mayor de edad, con Identidad No. _____, hondureño(a) y de este domicilio.- 2) _____, quien es mayor de edad, con Identidad No. _____, hondureño y de este domicilio; testigos que depondrán sobre los hechos denunciados.-

MEDIO DE PRUEBA PERICIAL, el cual consiste en la realización de un estudio PSICOSOCIAL a las partes y a su grupo familiar por medio de las facultativas adscritas a este Despacho.

MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL, el cual consiste en: 1) _____ 2) _____ 3) _____; 4) _____.

Este **JUZGADO RESUELVE:** 1) Admitir el **MEDIO DE PRUEBA TESTIFICAL** propuesto también por LA APODERADA LEGAL DE LA DENUNCIANTE, para lo cual se procederá a su inmediata evacuación.-

2) Admitir el **MEDIO DE PRUEBA PERICIAL** propuesto por LA APODERADA LEGAL DE LA DENUNCIANTE, el cual se ordena su realización por medio de las facultativas adscritas a este Despacho, mismo que deberá ser agregado al expediente de mérito previo a citar a las partes para oír sentencia definitiva.-

3) Admitir el **MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL** propuesto por LA APODERADA LEGAL DE LA DENUNCIANTE, el cual se tiene por evacuado.-

4) Admitir el **MEDIO DE PRUEBA TESTIFICAL** propuesto por EL APODERADO LEGAL DEL DENUNCIADO, para lo cual se procederá a su inmediata evacuación.-

5) Admitir el **MEDIO DE PRUEBA PERICIAL** propuesto por EL APODERADO LEGAL DEL DENUNCIADO, el cual se ordena su realización por medio de las facultativas adscritas a este Despacho, mismo que deberá ser agregado al expediente de mérito previo a citar a las partes para oír sentencia definitiva.-

6) Admitir el **MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL** propuesto por EL APODERADO LEGAL DEL DENUNCIADO, el cual se tiene por evacuado.-

En consecuencia, este Juzgado procede a evacuar el **MEDIO DE PRUEBA TESTIFICAL** propuesto por LA APODERADA LEGAL DE LA DENUNCIANTE.- Presente en este Despacho el Testigo _____, quien juramentado (a) en legal y debida forma y advertido de la pena que la Ley impone al delito de falso testimonio en materia civil, declara: _____, no tengo motivos de enemistad personal con el denunciado no ha sido condenado por delito de falso testimonio.

PREGUNTADO QUE FUE EL TESTIGO POR LA APODERADA LEGAL DE LA DENUNCIANTE: PREGUNTA: ¿ _____ ? **CONTESTA:** _____; **PREGUNTA:** ¿ _____ ?

REPREGUNTADO QUE FUE EL TESTIGO POR EL APODERADO LEGAL DEL DENUNCIADO: PREGUNTA: ¿ _____ ? **CONTESTA:** ' _____; **PREGUNTA:** ¿ _____ ? **CONTESTA:** _____; **PREGUNTA:**

Presente en este Despacho el Testigo _____, quien juramentado (a) en legal y debida forma y advertido de la pena que la Ley impone al delito de falso testimonio en materia civil, declara: no tengo motivos de enemistad personal con el denunciado no he sido condenado por delito de falso testimonio.

PREGUNTADO QUE FUE EL TESTIGO POR LA APODERADA LEGAL DE LA DENUNCIANTE: PREGUNTA: **CONTESTA:** _____; **PREGUNTA:** ¿ _____ ? **CONTESTA:** **REPREGUNTADO QUE FUE EL TESTIGO POR**

EL APODERADO LEGAL DEL DENUNCIADO: PREGUNTA: ¿ _____ ? **CONTESTA:** _____; **PREGUNTA:** ¿ _____ ? **CONTESTA:** _____; **PREGUNTA:** En consecuencia, este Juzgado procede a evacuar el

MEDIO DE PRUEBA TESTIFICAL propuesto por EL APODERADO LEGAL DEL DENUNCIADO.- Seguidamente presente en este Despacho el testigo _____, quien juramentado (a) en legal y debida forma y advertido de la pena que la Ley impone al delito de falso testimonio en materia civil, declara: " _____, no tengo motivos de enemistad personal con la denunciante, no he sido condenado por delito de falso testimonio.

PREGUNTADO QUE FUE EL TESTIGO POR EL APODERADO LEGAL DEL DENUNCIADO: PREGUNTA: ¿ _____ ? **CONTESTA:** _____; **PREGUNTA:** ¿ _____ ? **CONTESTA:** ' _____ **PREGUNTA:** ¿ _____ ?

REPREGUNTADO QUE FUE EL TESTIGO POR SU APODERADA LEGAL DE LA DENUNCIANTE: PREGUNTA: ¿ _____ ? **CONTESTA:** " _____; **PREGUNTA:** ¿ _____ ? **CONTESTA:** _____; **PREGUNTA:**

Seguidamente presente en este Despacho el testigo _____, quien juramentado(a) en legal y debida forma y advertido de la pena que la Ley impone al delito de falso testimonio en materia civil, declara:

"_____, no tengo motivos de enemistad personal con la denunciante, no he sido condenado por delito de falso testimonio. **PREGUNTADO QUE FUE EL TESTIGO POR EL APODERADO LEGAL DEL DENUNCIADO:**

PREGUNTA: ¿_____? **CONTESTA:** _____; **PREGUNTA:** ¿_____?

REPREGUNTADO QUE FUE EL TESTIGO POR LA APODERADA LEGAL DE LA DENUNCIANTE: PREGUNTA: _____? **CONTESTA:** _____; **PREGUNTA:** ¿_____? **CONTESTA:** _____; **PREGUNTA:**

En este estado se suspende la presente audiencia siendo las dos y veinte minutos de la tarde.- Asimismo, previo a dar a las partes para oír Sentencia Definitiva, que se este a la espera del Estudio Psicosocial ordenado; precediéndose a leer la presente acta quedando debidamente notificadas las partes, firmando los comparecientes así como los testigos para constancia ante la infrascrita Juez y Secretaria del Despacho que da fe.

Abog.
Juez

Abog.
Fiscal del Ministerio Público

Denunciado

Abog.
Defensora Pública del Denunciado

Abog.
Apoderado Legal del Denunciado

Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

FOLIO NÚMERO ****..... (f)

Exp. XXX-2013

AUDIENCIA CON SENTENCIA

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ____ días del mes de _____ del año dos mil trece, siendo el día y la hora señalado para la celebración de la presente audiencia.- Presentes en este Despacho de Justicia los Señores _____, quien es mayor de edad, hondureña, soltera, ama de casa, con domicilio en el Barrio _____, identidad número XXX, xx años teléfono XX.

Y el señor _____, quien es mayor de edad, hondureño, unión libre con otra pareja, Policía, con tarjeta de identidad número _____, ____ años, con domicilio en _____, con teléfono _____.

Cedida que le fue la palabra a la señora _____, a lo que manifiesta: Sí ratifico la denuncia y quiero agregar que _____.

Cedida que fue la palabra al Señor _____, a lo que manifiesta: _____.

Se ratifican las MEDIDAS DE SEGURIDAD A) B) y D) impuestas por este Juzgado, las cuales se validan por el término de seis meses.-

MEDIDAS PRECAUTORIAS: Se remite a la Señora _____ a la Consejería de Familia del Centro de Salud del _____, y al señor _____ a la Consejería de Familia del Centro de Salud del barrio _____, para su autoestima y su reeducación respectivamente.

En cuanto a las MEDIDAS CAUTELARES: La Guarda y Cuidado de la niña _____ de doce años de edad, queda a favor de su madre la señora _____.

En cuanto al Régimen de Comunicación entre el señor _____ y su hijo, queda sin perjuicio, ya que la señora _____ se las enviara al puesto que tiene en el mercado en un horario que no afecta las horas de estudio y dormida de las niñas.-

Como Pensión Alimenticia provisional se señala la cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPÍRAS (Lps. 1,250.00) QUINCENALES, los cuales el señor _____ vendrá a depositarlos a la Secretaría de este Juzgado el último viernes de cada quincena, estas medidas se imponen por el término de seis meses.-

Estuvo presente en este acto el Procurador _____, en su condición de Representante Procesal de la señora _____.

Estuvo presente en este acto la Fiscal del Ministerio Público Abogada _____, con carné del Colegio de Abogados de Honduras número _____, quien atiende sus asuntos profesionales en la Fiscalía Especial de la Mujer, Dependencia del Ministerio Público, brindando asistencia técnica y jurídica a la señora _____, quien dice: en base al artículo 5 del Ministerio Público y 4 de la ley de la Violencia Doméstica, me persono en la presente causa.

Por este acto la señora _____, le confiere poder para que lo represente en las presentes diligencias al Abogado _____, con carné del Colegio de Abogados de Honduras número _____ a quien inviste de todas las facultades generales del Mandato Judicial y las Especiales de expresa mención consignadas en Artículos 81, 82, 84 del Código Procesal Civil, quien atiende sus asuntos profesionales en la Fiscalía Especial de la Mujer, Dependencia del Ministerio Público, y manifiesta que acepta el poder a él conferido con las facultades otorgadas, quien dice: _____.

Por este acto el señor _____, le confiere poder para que lo represente en las presentes diligencias a la Defensora Pública Abogada _____, con carné del Colegio de Abogados de Honduras número _____ a quien inviste de todas las facultades generales del Mandato Judicial y las Especiales de expresa mención consignadas en Artículos 81, 82, 84 del Código Procesal Civil, quien atiende sus asuntos profesionales en la Defensa Pública de esta Ciudad Capital, y manifiesta que acepta el poder a ella conferido con las facultades otorgadas, quien dice: _____.

Por este acto el señor _____, le confiere poder para que lo represente en las presentes diligencias al Abogado _____ con carné del Colegio de Abogados de Honduras número 13587 a quien inviste de todas las facultades generales del Mandato Judicial y las Especiales de expresa mención consignadas en Artículos 81, 82, 84 del Código Procesal Civil, quien atiende sus asuntos profesionales en Bufete Roque y Asociados, edificio Concepcion, cubículo 202, teléfono _____ correo electrónico _____ y manifiesta que acepta el poder a él conferido con las facultades otorgadas, quien dice: _____.

EL JUZGADO RESUELVE: Tener por evacuada la presente audiencia, tener al Abogado _____ en su condición de Representante Procesal de la Señora _____, Tener al Procurador _____ y a la Defensora Pública Abogada _____, en su condición de Representante Procesal del Señor _____.

CUANDO SE ABRE A PRUEBAS LA DENUNCIA

y siendo que el señor _____, ha negado el contenido de los hechos denunciados por la señora _____, se abre a pruebas la denuncia presentada, y se cita a las partes para que comparezcan nuevamente ante este Despacho de Justicia el día MIÉRCOLES DOS (02) DE MARZO de año dos mil once, a la UNA CON TREINTA MINUTOS DE LA TARDE, acompañados de sus medios probatorios respectivos, de todo lo cual quedan debidamente notificados todos los comparecientes.- No habiendo nada más que agregar se da por suspendida la presente audiencia, firmando para constancia ante el Infrascrito Juez y Secretaría del despacho que da fe.-

ESTUDIO

EL JUZGADO RESUELVE: Abrir el juicio a pruebas y admitir como único medio de prueba el denominado PERITAJE consistente en Estudio Psicosocial con investigación de campo, por medio de las facultativas asignadas al área Psicosocial de este Juzgado, estudio que se ordena a fin de conocer si en el presente caso el señor XXX ha cometido violencia doméstica contra la señora _____ y dictaminen si existe secuelas psíquicas o daños emocionales como producto de la supuesta violencia denunciada por la señora _____, asimismo una vez se tenga por presentado el informe se dictar la sentencia en el termino correspondiente.- Y no habiendo nada más que agregar, se da por finalizada la presente audiencia, de todo lo cual quedan debidamente notificados todos los comparecientes, firmando para constancia ante el Infrascrito Juez y Secretaría del Despacho que da fe.

CUANDO SE ORDENA ESTUDIOS PSICOSOCIAL

y en vista de lo expresado por los señores _____ y _____, debido a la complejidad de los hechos agregados por cada uno de dichos señores, la suscrita Jueza considera necesario pedir apoyo especializado para que, previo a citar a las partes para dictar la Sentencia Definitiva correspondiente, que se realice a dichos señores un Estudio Psicosocial con investigación de campo, por medio de las facultativas asignadas al área Psicosocial de este Juzgado, estudio que se ordena a fin de conocer si en el presente caso el señor _____ ha cometido violencia doméstica contra la señora _____ y dictaminen si existe secuelas psíquicas o daños emocionales como producto de la supuesta violencia denunciada por la señora _____.- Y no habiendo nada más que agregar, se da por finalizada la presente audiencia, de todo lo cual quedan debidamente notificados todos los comparecientes, firmando para constancia ante el Infrascrito Juez y Secretaría del Despacho que da fe.

CUANDO EN EL ACTO ACEPTA LOS HECHOS SE DICTA SENTENCIA

y siendo que el señor _____ aceptó parcialmente el contenido de la Denuncia presentada por la señora _____, se procede en este acto a dictar la Sentencia Definitiva correspondiente, la cual se leerá de la siguiente manera: **JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.-** Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de Junio de dos mil trece.- **VISTA:** Para dictar Sentencia Definitiva en la Denuncia de Violencia Doméstica, interpuesta por la señora _____, quien es mayor de edad, hondureña, soltera, Perito Mercantil y Contador Público, con tarjeta de identidad número _____, con domicilio en Residencial _____, con teléfono _____ y _____, contra el señor _____, quien es mayor de edad, hondureño, soltero, con tarjeta de identidad número _____, con domicilio en _____, con teléfono _____.- **INTERVIENEN:** El Abogado _____ en su condición de Representante Procesal, La Abogada _____ junto con el Procurador _____ en su condición de Representantes Procesales de la señora _____ la Abogada _____ en su condición de Defensora Pública y en representación del señor _____.-

ANTECEDENTES

PRIMERO: Que en fecha catorce de Junio de dos mil once, la señora _____, se presentó ante la Secretaría de este Juzgado, interponiendo denuncia de Violencia Doméstica, contra el señor _____, la cual fue admitida mediante auto de la misma fecha de su presentación, ver folios uno al dos frente y vuelto del expediente.- **SEGUNDO:** Que en fecha dos de Junio de dos mil doce, se celebró audiencia con la comparecencia de ambas partes y en la misma se impusieron: Medidas de Seguridad, Medidas Precautorias y Medidas Cautelares.-

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

TERCERO: Que el artículo uno de la Ley contra la Violencia Doméstica, establece que las disposiciones de dicha ley son de orden público, de ineludible observancia y tienen por objeto proteger la integridad física, psicológica, patrimonial y sexual de la mujer, contra cualquier forma de violencia por parte de su cónyuge, ex cónyuge, compañero, ex compañero de hogar o cualquier relación afín a una pareja en la que medie, haya mediado o no cohabitación, incluyendo aquellas relacionadas en las que se sostiene o se haya sostenido una relación sentimental.- Asimismo el artículo aludido también establece que los Derechos consagrados en la Ley Contra la Violencia Doméstica son universales y que todo acto de discriminación y violencia doméstica contra la mujer será sancionado de conformidad a la misma ley, a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y de conformidad a otras leyes que protejan los derechos de las mujeres.- **CUARTO:** Que el artículo cinco de La Ley Contra la Violencia Doméstica define la como Violencia Física: Toda acción u omisión que produce un daño o menoscabo a la integridad corporal de la mujer, no tipificada como delito en el Código Penal.- Violencia Psicológica: Toda acción u omisión cuyo propósito sea degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de la mujer, por medio de la intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento, encierro o cualquier otra conducta u omisión que implique un perjuicio en la salud psicológica, el desarrollo integral o la autodeterminación de la mujer, o que ocasione daño emocional, disminuya la autoestima, perjudique o perturbe al sano desarrollo de la mujer, ejerciendo actos en descrédito de la mujer o menosprecio al valor personal o dignidad, tratos humillantes o vejatorios, vigilancia, aislamiento, insultos, el chantaje, degradación, ridiculizar, manipular, explotar o amenazar con el alejamiento de los (as) hijos (as) entre otras.- Violencia Sexual: Toda conducta que entrañe amenaza o intimidación que afecte la integridad o la autodeterminación sexual de la mujer, tal como las relaciones sexuales no deseadas, la negación a anticoncepción y protección, entre otras, siempre que dichas acciones no se encuentren tipificadas como Delito en el Código Penal.- Violencia Patrimonial y/o Económica: Como todo acto u omisión que implica pérdida, transformación, negación, sustracción,

destrucción, retención de objetos, documentos personales, bienes muebles e inmuebles, valores, derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer o del grupo familiar, incluyendo el menoscabo, reducción o negación que afecten los ingresos de la mujer o el incumplimiento de obligaciones alimentarias.- QUINTO: Que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable.- SEXTO: Que Todos los hombres y mujeres nacen libres e iguales en derechos, se declara punible la discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana.- SÉPTIMO: Que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en su artículo 2 inciso e) establece el compromiso de los Estados Partes de adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualquier persona, organización o empresas.- OCTAVO: Que la Convención para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer en su preámbulo reconoce que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.- NOVENO: Que para tutelar o restituir los derechos de las mujeres que sufran de violencia doméstica se establecerán mecanismos de protección consistentes en: Medidas de Seguridad, Medidas Precautorias y Medidas Cautelares.

VALORACIÓN

DECIMO: Que de acuerdo al análisis de los hechos denunciados y aceptados parcialmente por el señor _____ en la Audiencia celebrada el día de hoy tres de junio de dos mil trece, ya que dicho señor expresó literalmente lo siguiente: _____, en consecuencia, procede dictar el fallo correspondiente.-

PARTE RESOLUTIVA

PORTANTO: Este Juzgado Especial Contra la Violencia Doméstica del Departamento de Francisco Morazán, en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos: 59, 60, 63, 80, 82, 89, 90, 303, 304, 314 de la Constitución de la República; 1 y 40 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la Ley Contra la Violencia Doméstica; 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 1, 2, 7, y 8, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1, 2, 3 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer; 1, 2, 3, 4, 5 de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención De Belem Do Para) y artículos 24, 81, 82, 84, 200, 202, 206, 207, 208, 915 del Código Procesal Civil.- FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Denuncia de Violencia Doméstica, interpuesta por la señora MARÍA LOPEZ, contra el señor JUAN PÉREZ, ambos de generales ya conocidas en el preámbulo de la sentencia, tipificándose los actos ejercidos como Violencia Física y Psicológica.- 2) Ratificando las Medidas de Seguridad, Medidas Precautorias y Medidas Cautelares, impuestas en la audiencia celebrada el día de hoy tres de Junio del año dos mil trece.- 3) Se Impone la Sanción de prestación de servicios a la comunidad al señor JUAN PÉREZ por el termino de UN MES el cual será cumplido en el periodo de dos horas diarias en la Alcaldía Municipal del Distrito Central, la cual se hará cargo de su estricto cumplimiento, gírese el oficio correspondiente a dicha Alcaldía Municipal.- Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho proceda a dar lectura íntegra a la presente Sentencia Definitiva; Asimismo quede firme el fallo si dentro del término de ley las partes no interponen ningún recurso; de todo lo cual quedan debidamente notificados todos los comparecientes.- NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.

ABOG.
JUEZ

DENUNCIANTE
Representante Procesal/Procurador

DENUNCIADO
Defensora Pública/Representante Procesal

SECRETARÍA ADJUNTA



**JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA
DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN**

CONSTANCIA DE SANCIÓN

En la ciudad Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los _____ días del mes de _____ del año dos mil _____, en mi condición de Secretaria Adjunta a la Juez que conoce la presente Causa () en este **Juzgado Especial Contra La Violencia Doméstica del Departamento** de _____, **HAGO CONSTAR:** Que procedí a notificar al _____ la SANCIÓN que consiste en la PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD por el término de DOS MESES, impuesta en la SENTENCIA DEFINITIVA de fecha siete de mayo del año en curso, por haber sido declarada CON LUGAR la Denuncia de Violencia Doméstica interpuesta por la señora _____, en contra del señor_____. Asimismo se le hace la advertencia que de incumplir con la sanción a él impuesta, su conducta será considerada como delito y se penalizará de acuerdo a lo establecido en el artículo 346 del Código Penal referente al delito de desobediencia a la Autoridad - Quien queda entendido y firma para constancia.

Denunciado

Secretaria Adjunta

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

El infrascrito Receptor del Juzgado Especial Contra la Violencia Doméstica del Departamento de _____, sita segundo nivel de la Corte Suprema de Justicia al señor _____,

HACE SABER: Qué se recibió denuncia por Violencia Doméstica, promovida por _____, con número de entrada _____, en donde literalmente el auto DICE: JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA.- _____, Municipio de _____, del año dos mil _____.- Admitase la Denuncia de Violencia Doméstica que antecede.- Por medio del Señor Receptor del Despacho notifíquese a los Señores: _____ Y _____ para que comparezcan a la audiencia señalada para el día del año dos mil _____ a las _____ debiéndoles hacer entrega dicho Funcionario Judicial de las respectivas cédulas de notificación.- Haciéndoles saber que pueden comparecer a la audiencia antes señalada con sus Apoderados Legales y si los hechos fueren controvertidos, podrán en dicha audiencia evacuar las pruebas que estimen pertinentes; Si no se pudiere evacuar en la misma se evacuaran dentro de los dos días hábiles siguientes.- Asimismo se imponen las MEDIDAS DE SEGURIDAD siguientes.-A) Separar temporalmente al denunciado del hogar que comparte con la denunciante, el denunciado podrá llevar consigo únicamente sus objetos personales y utensilios de trabajo y/o de estudio.- La Seguridad la salud y la vida de la víctima prevalecerán frente al derecho de educación de la vivienda por el denunciado.- B) Prohibir al denunciado(a) transitar por la casa de habitación, centro de trabajo y lugares habitualmente frecuentados por la (el) denunciante, siempre y cuando esta medida no interfiera en las relaciones laborales a de estudio del denunciado (a). D) Prohibir al denunciado realizar actos de intimidación o perturbación contra la mujer, contra cualquier miembro del núcleo familiar o las personas relacionadas con la denunciante.-Artículos 3.4, 5, 6, 11, 12, 14.18 y 19 reformados de la Ley Contra la Violencia Doméstica.- CÚMPLASE.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los _____ del mes _____ de _____ del año _____.

Receptor

ESCALA DE VALORACIÓN DEL RIESGO EN CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y/O INTRAFAMILIAR

Nombre de la mujer:

Fecha:

Número de expediente:

Nº	I. DATOS PERSONALES DE LA MUJER	VALORACIÓN			
		X	NO	X	SÍ
1.	Nombre de la mujer				
II	SITUACIÓN DE LA PAREJA EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES				
2	¿Está separada del denunciado o en trámites de separación?	0		1	
3	¿Ha denunciado con anterioridad al agresor?	0		1	
4	¿Ha incumplido las medidas de protección impuestas con anterioridad?	0		2	
III	TIPO DE VIOLENCIA EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES				
5	¿Le provocó lesiones como: moretones, magulladuras, arañazos u otras?	0		2	
6	¿La agredió en presencia de sus hijos u otros familiares?	0		2	
7	¿Ha aumentado la frecuencia o gravedad de la violencia?	0		3	
8	¿La ha amenazado con matarla a usted, sus hijos u otros familiares?	0		3	
9	¿La ha amenazado con armas de cualquier tipo u otro objeto peligroso?	0		3	
10	¿Le provocó lesiones que requiera atención médica de urgencia? (fracturas, golpes, lesiones internas)	0		3	
11	¿La obliga a mantener relaciones sexuales no deseadas por usted?	0		2	
IV	PERFIL DEL AGRESOR				
12	¿Es muy celoso, la manipula, controla u obliga hacer cosas en que no está de acuerdo?	0		3	
13	¿Ha tenido comportamientos violentos con una pareja anterior?	0		2	
14	¿Ha tenido comportamientos violentos con otras personas? (amigos/as, compañeros/as de trabajo, etc.)	0		3	
15	¿Presenta él un consumo problemático de alcohol o drogas?	0		3	
16	¿El médico le ha diagnosticado una enfermedad mental y no sigue su tratamiento?	0		1	
17	¿La trata frecuentemente con crueldad, menosprecio, la humilla y no manifiesta arrepentimiento alguno?	0		3	
18	¿Justifica su conducta y niega su responsabilidad por diversas causas? (alcohol, drogas, stress o provocación de la víctima)	0		3	
V	VULNERABILIDAD DE LA VÍCTIMA				
19	¿Usted siente que está en peligro que pueda matarla a usted, sus hijos o familiares?	0		3	
20	¿Ha retirado usted anteriormente alguna denuncia o se ha echado atrás en la decisión de denunciarle?	0		3	
21	¿Tiene usted enfermedad, discapacidad, está embarazada, depende económicamente de él?	0		2	
22	¿Está dispuesta a continuar con la denuncia?				
23	¿Cree usted que el denunciado la agredirá si sabe de la denuncia?	0		3	

Valoración del riesgo:

Bajo: 0 a 10

Moderado: 11 a 25

Alto: 26 en adelante

*0 significa NO; 1,2,3 significa SÍ



**DIRECCIÓN DE MEDICINA FORENSE
SECCIÓN DE CLÍNICAS**

PROTOCOLO DE EXAMEN FÍSICO

MÉDICO: _____ FECHA: _____ HORA: _____

NOMBRE: _____

IDENTIDAD: _____ EDAD: _____ SEXO: _____

FECHA NACIMIENTO: _____ OCUPACIÓN: _____

ESTADO CIVIL: _____ ESCOLARIDAD: _____

ACTIVIDAD MANUAL: _____

DIRECCIÓN: _____

ACOMPAÑANTE: _____

RELACIÓN: _____ IDENTIDAD: _____

Nº DE EXPEDIENTE: _____ HOSPITAL: _____

HISTORIA MÉDICO LEGAL:



DIRECCIÓN DE MEDICINA FORENSE
PROTOCOLO DE DELITOS SEXUALES

FECHA DE EXAMEN: _____ HORA: _____ MÉDICO: _____

NOMBRE DEL PACIENTE: _____

IDENTIDAD N°: _____ SEXO: _____

FECHA DE NACIMIENTO: _____ EDAD: _____

OCUPACIÓN: _____ ESCOLARIDAD: _____

DIRECCIÓN: _____

ACOMPAÑANTE: _____

IDENTIDAD: _____ RELACIÓN: _____

INSTITUCIÓN HOSPITALARIA: _____

EXPEDIENTE: _____

¿ACEPTA EL (LA) PACIENTE EL EXAMEN A REALIZAR? SÍ: _____ NO: _____

HISTORIA MÉDICO LEGAL: _____

¿HUBO EYACULACIÓN? SÍ _____ NO _____ DÓNDE (SITIO) _____

¿REQUIRIÓ ASISTENCIA MÉDICA? SÍ _____ NO _____

ACTIVIDAD DEL PACIENTE TRAS LA AGRESIÓN

¿TOMO DUCHA VAGINAL? SÍ _____ NO _____

¿BAÑÓ? SÍ _____ NO _____ ¿CAMBIÓ ROPA? SÍ _____ NO _____

¿ORINÓ? SÍ _____ NO _____ ¿COMIÓ? SÍ _____ NO _____

¿FUMÓ? SÍ _____ NO _____ ¿CEPILLÓ LOS DIENTES? SÍ _____ NO _____

¿SE PUSO TAMPÓN? SÍ _____ NO _____ ¿SE SACÓ TAMPÓN? SÍ _____ NO _____

¿USÓ PAÑO SANITARIO? SÍ _____ NO _____

¿MEDICACIÓN? _____

LESIONES PARAGENITALES:

LESIONES EXTRAGENITALES:

MUESTRAS RECOLECTADAS:

EXÁMENES DE LABORATORIO SOLICITADOS:

EVALUACIÓN POR PSIQUIATRÍA: SÍ _____ NO _____

EXAMEN DEL AGRESOR: SÍ _____ NO _____

HALLAZGOS: _____

COMENTARIO MÉDICO LEGAL:This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

CONCLUSIONES:

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

DATOS DEL AGRESOR:

SEXO: _____ **RAZA:** _____ **EDAD:** _____

COMPLEXIÓN: _____ **Nº DE PARTICIPANTES:** _____

RELACIÓN AFECTIVA: _____ **PARENTESCO:** _____

OTRAS CARACTERÍSTICAS: _____

ANTECEDENTES GINECO – OBSTÉTRICOS: MENARQUÍA _____

FECHA ÚLTIMA MENSTRUACIÓN: _____ **GESTACIONES:** _____

PARTOS: _____ **ABORTOS:** _____ **CESÁREAS:** _____ **HIJOS VIVOS:** _____

VIDA SEXUAL ACTIVA: SÍ _____ **NO** _____

FECHA ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL: _____

PRIMERA RELACIÓN SEXUAL: SÍ _____ **NO** _____

UTILIZÓ EL SIGUIENTE MÉTODO ANTICONCEPTIVO DURANTE EL ATENTADO: _____

EXAMEN FÍSICO: APARIENCIA GENERAL

ESTADO MENTAL:

EXAMEN GENITAL:

VULVA: _____ **PERINÉ:** _____

HIMEN DE FORMA: _____

ESCOTADURAS CONGÉNITAS: SÍ _____ **NO** _____

DILATOS: SÍ _____ **NO** _____ **DILATABLE: SÍ** _____ **NO** _____

RUPTURAS: SÍ _____ **NO** _____ **LOCALIZACIÓN** _____

ANTIGUAS: _____ **RECIENTES:** _____ **VAGINA:** _____

CUELLO: _____ **ÚTERO:** _____ **ANEXOS:** _____

ÁREA ANO RECTAL: _____

EVIDENCIA DE EMBARAZO: OTROS HALLAZGOS _____

GUÍA DE ADECUACIÓN TÉCNICA PARA SU APLICACIÓN

GUÍA DE ADECUACIÓN TÉCNICA PARA SU APLICACIÓN

I. Objeto de la Guía

La aprobación del Protocolo de Atención Integral a las Víctimas de la Violencia contra la Mujer en supuestos de Violencia Doméstica y Violencia Intrafamiliar, suscrita por la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal (CIJP), ha determinado que su aplicación resulte vinculante y obligatoria para las instituciones que integran la “Comisión Técnica para el seguimiento de la Aplicación de la Ley contra la Violencia Doméstica”.

Con carácter previo, conviene precisar que el Protocolo surgió de la necesidad de abordar de una manera ordenada y eficaz la atención que deba brindarse a las víctimas de la violencia contra la mujer, a través de una actuación coordinada, integral y con perspectiva de género, identificando el conjunto de pautas homogéneas de actuación adecuadas, de las buenas prácticas aplicables por los distintos operadores del sector justicia y otros actores que intervienen en la ruta de atención integral y protección a las víctimas. (Ámbitos judicial, policial, fiscal, social, salud y, en alguna medida, también, el educativo)

Tomando como base la idea de que la adecuada atención a las mujeres que sufren violencia exige la colaboración intersectorial y la coordinación de todos ellos para evitar la reiteración de actuaciones, a veces contradictorias, o, por el contrario, la omisión de cualquiera de ellas, cuando su realización sea necesaria.

Resultando esencial, por tanto, que cada profesional tenga a su alcance la información más completa posible sobre los recursos y servicios disponibles y sus características, para orientar adecuadamente a la víctima en su utilización y derivación, determinando cuándo, cómo y dónde procede derivar a la víctima a otro recurso o institución.

En este sentido, el Protocolo de Atención Integral, fue concebido y desarrollado para proveer a los y las operadores(as) de justicia y el resto de actores(as) involucrados (das) de una herramienta de trabajo idónea para identificar las buenas prácticas y los cauces de coordinación precisos, en el establecimiento de un sistema estructurado de atención integral a las mujeres víctimas de esta violencia. Con el fin de mejorar los servicios que se prestan por cada uno de ellos, evitando, en lo posible, su victimización secundaria.

En el diseño y descripción de la ruta crítica, el Protocolo distingue las diferentes fases o ámbitos integrados en la intervención, identificando las actuaciones que se comprenden en cada una de ellas, y presentando la secuencia lógica de los pasos a seguir para brindarles a las víctimas la atención integral, de carácter multidisciplinario, necesaria para completar el proceso, con la claridad y exhaustivo detalle de las pautas de actuación de cada uno de los y las actores(as) involucrados (as).

Avanzando un paso más en esta dinámica de actuación, la presente Guía surge de la necesidad de facilitar, a modo de instructivo, la aplicación y desarrollo del Protocolo por parte de las instituciones mencionadas y de las que puedan surgir en el desarrollo de este tema.-

Tiene por objeto, por tanto, identificar y precisar los mecanismos e instrumentos que resulten necesarios para una adecuada aplicación práctica y efectiva del Protocolo de Atención, en aquéllos ámbitos y aspectos en que ello resulte necesario, sin que, en ningún caso, pretenda reiterar la descripción de las pautas de actuación ya delimitadas en aquél.

Se incluyen, asimismo, un conjunto de medidas y mecanismos de apoyo, coordinación y cooperación sugeridos como estrategia de intervención para los y las profesionales de los servicios indicados.

Para su elaboración, se han tenido en cuenta las dinámicas de actuación real y cotidiana en cada uno de los ámbitos de intervención enunciados, así como su capacidad y disponibilidad para desarrollar cada una de las propuestas que se formulan, partiendo de su realidad normativa y de los recursos, servicios y concreta dinámica de funcionamiento en cada uno de ellos.

Asimismo, y esencialmente, como ha podido constatare en las distintas reuniones celebradas previo a la elaboración de la presente Guía, por el compromiso e implicación de las instituciones y servicios intervinientes en la línea de mejora constante en sus actuaciones y buenas practicas así como la idea compartida de la necesidad de implementar el modelo de atención integral, de la forma más generalizada.

Así pues, y siguiendo el orden del propio Protocolo de Atención Integral, se enuncian, tras una breve exposición justificativa de las mismas, las propuestas de adecuación, desarrollo y coordinación de las actuaciones que puedan servir de guía a los y las profesionales de los servicios implicados.

Como puede constatare, se destaca, respecto de cada uno de los y las actores que se contemplan en la Guía, los mecanismos de coordinación y derivación con respecto a los demás que integran el sistema. Con ello se destaca el papel nuclear y, en cierto

modo, garantizador de la coordinación en el correcto y adecuado funcionamiento del modelo de atención integral que se diseña en el Protocolo.

Se hace la salvedad de que, dadas las especificidades de las actuaciones del personal del sector salud en sus funciones relacionadas con la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar y los instrumentos normativos y regulatorios que han de orientar su trabajo, además de su inclusión en esta Guía, con el mismo carácter indicado para el resto de los actores, se ha elaborado un documento complementario propio destinado a los y las operadores (as) de este sector.

No obstante su relevancia en el desarrollo de una posible y eficaz intervención del ámbito educativo ante las situaciones de maltrato, no se ha podido profundizar en la implementación de las pautas de actuación necesarias para su integración en el sistema.

Debe, por ello, destacarse aquí que sería deseable su implicación, tanto por la posibilidad de detección de situaciones de violencia contra la mujer que no pudieran advertirse en otros ámbitos, como por su importancia en el ámbito de la prevención de la violencia contra la mujer, a través de la educación, en sus distintos niveles.

Es importante recalcar que todas las acciones propuestas en la presente Guía, deben ser de cumplimiento obligatorio y generalizado por parte de los actores que intervienen en la atención Integral a Víctimas de la Violencia contra la Mujer en Supuestos de Violencia Domestica y de Violencia Intrafamiliar, contando con el apoyo incondicional de sus autoridades superiores y llevando a cabo el seguimiento y monitoreo de dicho cumplimiento por parte de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal y la Comisión Técnica Interinstitucional contra la Violencia hacia la Mujer.

Asimismo los actores y estas comisiones de seguimiento y monitoreo deberán contar con un documento que describa las variables e indicadores necesarios, para que se pueda medir el cumplimiento y resultados de las acciones propuestas.

II. Criterios de actuación por sectores

1. Secretaría de Seguridad

A) Introducción

Uno de los aspectos destacados en la práctica diaria de las intervenciones de la policía en esta materia es el de la posibilidad de que los y las agentes que reciben una denuncia o requerimiento de auxilio por parte de una víctima de violencia doméstica pueden imponer las medidas de seguridad que resulten necesarias para detener la violencia y evitar males mayores, conforme a la Ley Contra La Violencia Doméstica (LCVD).

Sin embargo, se ha puesto de manifiesto que en este momento, cuando se reciben en las dependencias policiales requerimientos de auxilio en este ámbito, tras realizar las diligencias de investigación que resulten pertinentes, incluida la detención del agresor, se procede al traslado de ambos al Ministerio Público, donde la víctima formula la denuncia correspondiente.

Esta práctica no tiene una incidencia negativa si se trata de un Centro Integrado, en el cual, las dependencias de la Unidad Policial se integran con los/las Fiscales del Ministerio Público y el/la Médico/a Forense, Tales Centros resultan especialmente adecuados en este ámbito, por la atención inmediata de las víctimas, especialmente si, por presentar algún tipo de lesión u otros signos externos relacionados con la violencia sufrida, precisan, también de la realización de un examen médico, físico, psicológico, toxicológico y otros pertinentes.

Pero cuando ello no sea posible, resulta esencial que, en el caso de que quiera hacerlo, se reciba la denuncia de la víctima, y/o que se impongan las medidas de protección que resulten adecuadas a cada caso concreto, de la manera más inmediata posible, utilizando los formatos establecidos al respecto.

En todo caso, y permitiéndolo la actual normativa, recursos, organización y gestión policial, deben crearse en cada una de las dependencias policiales un grupo o sección especializada dedicado a la persecución y Monitoreo de la violencia doméstica

e intrafamiliar y la atención a las víctimas de estos hechos. Atención a las víctimas, la formación debe producirse de forma conjunta, al menos en una parte significativa de la misma.

La gestión digital de las intervenciones policiales no contiene un formato específico para los hechos relacionados con la violencia contra las mujeres. Consecuentemente, el Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL) no permite disponer de datos estadísticos desagregados por el sexo de las víctimas.

Se destaca, finalmente, que la ausencia de una comunicación efectiva en las dependencias policiales correspondientes a los domicilios de los implicados, los datos relativos a las posibles condenas, medidas de seguridad o cualquier otra de protección a las víctimas, por parte del Ministerio Público o del Juzgado Contra la Violencia Doméstica o del Juzgado en que se siga el procedimiento penal por violencia intrafamiliar, impide su adecuado control y seguimiento, lo que tiene una incidencia negativa en la seguridad de las víctimas.

B) Acciones propuestas

Primera. El Protocolo de Atención Integral a las Víctimas establece las actuaciones que la Policía debe llevar a cabo en los supuestos de violencia contra la mujer, que aquí contemplamos, los principios que deben regir su actuación, y las cautelas a adoptar e informaciones que ha de dispensar a las víctimas, por lo que la primera de las propuestas ha de ser, necesariamente, la de insistir en el cumplimiento obligatorio y generalizado del mismo por parte de todas las dependencias policiales con competencias en la materia.

Segunda. Se generalizará la integración del Ministerio Público y el Médico Forense en las mismas dependencias de la Unidad Policial, estableciendo Centros Integrados que permitan la derivación inmediata a el o la Fiscal de turno, de las víctimas de la violencia doméstica o violencia intrafamiliar, para que formulen la denuncia, las mismas sean reconocidas por el/la Médico/a Forense y se impongan las medidas de protección oportunas.

Tercera. Cuando la víctima acuda a una Unidad de Policía Nacional en que no esté presente el Ministerio Público, se le recibirá la denuncia, de acuerdo con los criterios de actuación establecidos en el Protocolo, adoptándose las medidas de seguridad que resulten necesarias, de la forma más inmediata posible. Todas las actuaciones se documentarán en los formatos correspondientes. (Acta de denuncia y de imposición de medidas incorporadas como Anexos en el Protocolo).

Cuarta. Se creará en cada una de las dependencias policiales un grupo o sección especializado, dedicado a la persecución de la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar y la atención a las víctimas de estos hechos.

Quinta. Deberán contemplarse planes de formación en el área educativa especializada en violencia contra la mujer y derechos humanos a todo el colectivo policial. En

todo caso, deberá procurarse una adecuada capacitación, permanente y conjunta con el resto de colectivos implicados en la persecución de esta violencia y la atención a las víctimas, respecto de los/las funcionarios/as que se ocupen, de forma prioritaria o exclusiva de los hechos relacionados con la misma.

Sexta. En los sistemas informáticos de gestión digital de los reportes y actuaciones policiales se incorporarán los programas específicos adecuados para documentar las infracciones a la LCVD y los delitos de violencia intrafamiliar, en los que la víctima sea una mujer, conformes con las pautas de actuación contenidas en el Protocolo.

Séptima. Dentro de dicho programa deberán integrarse, en todo caso, las diligencias de información de los derechos de las víctimas, tanto los de carácter procesal, como los que le corresponden en el ámbito de la atención social, incluyendo la información actualizada sobre los recursos sociales y los teléfonos de emergencia disponibles.

Octava. También se integrará en dicho programa la diligencia destinada a valorar la situación del posible riesgo vital en que pueda encontrarse la víctima, incorporando al sistema informático de gestión la "Escala de Valoración del Riesgo en Casos de Violencia Doméstica y/ o Intrafamiliar" que consta como formato Anexo al Protocolo.

Novena. Deberán comunicarse a las dependencias policiales correspondientes a los domicilios de los implicados, todas las decisiones que se adopten por el Ministerio Público o por los Juzgados correspondientes, relativas a la imposición de medidas de seguridad o cualquier otra de protección a las víctimas, así como las sentencias condenatorias dictadas en los procedimientos de Violencia Doméstica o en procedimientos penales por violencia intrafamiliar, para que puedan llevar a cabo un adecuado control y seguimiento de las mismas.

Décima. Para garantizar la adecuada recepción de tales comunicaciones por las dependencias policiales que resulten territorialmente competentes, la Dirección General de Policía Nacional o el Departamento que corresponda, designará un punto de recepción centralizada de las mismas, desde el que se repartirán a aquéllas, con la eficacia y rapidez necesarias.

Undécima. Se mejorarán las comunicaciones entre las dependencias policiales competentes en la materia, con el Ministerio Público y los Juzgados competentes, estableciendo un sistema ágil de intercambio de información, que permita la recíproca, rápida y segura transmisión de todas las comunicaciones que resulten necesarias entre todos ellos, especialmente, las que puedan afectar a la seguridad de las víctimas.

C) Coordinación con otros actores

1. La Policía Nacional coordina sus actuaciones en la ruta de atención crítica diseñada en el Protocolo, esencialmente, y en todo caso, con el Ministerio Público y con los Juzgados especializados y no especializados.

Actúa bajo la dirección técnico-jurídica del Ministerio Público, a quien debe proveer de los elementos probatorios necesarios en el ejercicio de la acción penal pública, para lo que, una vez recibida la denuncia o, en su caso, la actuación de oficio,

realizará las investigaciones necesarias para acreditar los hechos y dará traslado de las diligencias realizadas al Ministerio Público, dentro de las veinticuatro horas siguientes. Si se hubiere detenido al agresor, la Policía dará cuenta inmediata al Ministerio Público o, en todo caso, dentro de las 6 horas siguientes a la detención.

En aquellos lugares donde no exista Ministerio Público, remitirá las actuaciones directamente al Juzgado competente.

Colaborará, también, en la realización de las investigaciones ordenadas por el Ministerio Público y los Juzgados y auxiliará a éstos en la ejecución de las sentencias y el cumplimiento de las sanciones, medidas de seguridad y demás mecanismos de protección impuestos por el órgano judicial.

2. A su vez, y dependiendo de las circunstancias en que pueda encontrarse la víctima, puede coordinar sus actuaciones con los servicios del sector salud y con los servicios sociales de atención y protección.

Si la víctima presentara golpes o lesiones, la derivará al recurso de salud correspondiente, asegurándose de la constancia de la actuación médico-sanitaria recibida, remitiéndola al Ministerio Público o al Juzgado junto con las diligencias practicadas.

Si la víctima y sus hijos e hijas se encontraren amenazados en su integridad física o moral por el denunciado, o en situación de necesidad o riesgo de exclusión social, la policía coordinará con las ONGS o alcaldías municipales (OMM) que cuentan con albergues o casas refugio en la derivación a estos recursos, respetando, en todo caso, sus protocolos y políticas de atención institucional.

Las dependencias policiales derivarán a la víctima al Punto de Coordinación de la Administración determinado en su ámbito territorial. En ausencia del mismo, deberán tener a su alcance la información más completa y actualizada posible sobre los recursos y servicios disponibles y sus características, para orientar adecuadamente a la víctima en su utilización y derivación.

3. Así mismo las organizaciones no gubernamentales y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos deberán remitir aquellos casos que llegasen a su conocimiento dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su recepción, al Juzgado competente de acuerdo al Artículo 11, o en su defecto al Ministerio Público o a la Secretaría de Seguridad. Dichas organizaciones podrán sugerir la imposición de los mecanismos de protección que se consideren necesarios.

2. Ministerio Público

A) Introducción

El Ministerio Público ha incorporado ya en su estructura, organización y funcionamiento muy destacados avances en la persecución y sanción de la violencia doméstica y los delitos de violencia intrafamiliar, así como, muy especialmente, en la atención a las mujeres víctimas de estas específicas manifestaciones de violencia en la idea de un modelo de atención integral.

De este modo, las actuaciones desarrolladas en este ámbito corresponden, en lo esencial, con el contenido del Protocolo de Atención Integral a las Víctimas de la Violencia contra la Mujer en supuestos de Violencia Doméstica y Violencia Intrafamiliar, en el apartado relativo al Ministerio Público, que forma parte de la ya referida Comisión Interinstitucional de Justicia Penal.

No se han advertido, en general dificultades técnicas de adecuación del Protocolo a las concretas dinámicas de actuación, directrices y normativas seguidos por los y las Fiscales en el normal desempeño de sus actuaciones en esta materia y los formatos utilizados en la formalización de las denuncias y solicitud de actuaciones ante los Juzgados.

Sí ha de destacarse, sin embargo, la necesidad de adaptar algunos aspectos de las actuaciones cotidianas en relación con la atención a las víctimas, y la necesidad de evitar la reiteración de actuaciones y/o traslados de la misma, para evitar las perniciosas consecuencias de su revictimización secundaria, así como de garantizar del mejor modo posible, la adecuada comprensión por ellas de los derechos que le incumben.

En íntima relación con ello, se encuentran, también, las propuestas que inciden en el ámbito de la cooperación y coordinación del Ministerio Público con el resto de instituciones involucradas en la ruta de atención que diseña el Protocolo.

Que debe intensificarse respecto de los otros dos actores del sector justicia (Policía y Juzgados) para proporcionar una respuesta más ágil a las víctimas, especialmente en las comunicaciones, notificaciones y señalamientos de las audiencias.

Propuestas que, en todo caso, son susceptibles de incorporación sin dificultades en el modelo de atención integral a las mujeres víctimas de esta violencia, ya incorporado, según se ha anticipado, en su concreta dinámica de funcionamiento, y de los recursos y los servicios disponibles en su actuación cotidiana.

Al igual que en todas las instituciones y servicios integrados en la CIJP, ha de aplicar las pautas de actuación descritas en el Protocolo de forma vinculante y obligatoria.

B) Acciones propuestas

Primera. El Protocolo de Atención Integral a las Víctimas establece las actuaciones que el Ministerio Público debe llevar a cabo en los supuestos de violencia contra la mujer que aquí contemplamos, los principios que deben regir su actuación, y las cautelas a adoptar e informaciones y atención que ha de dispensar a las víctimas, por lo que la primera de las propuestas ha de ser, necesariamente, la de insistir en el cumplimiento obligatorio y generalizado del mismo por parte de las y los Fiscales con competencia en la materia.

Segunda. Se generalizará la integración del Ministerio Público y el Médico Forense en las mismas dependencias de la Unidad Policial, estableciendo Centros Integrados que permitan la derivación inmediata al Fiscal de turno de las víctimas de la violencia doméstica o violencia intrafamiliar, para que formulen la denuncia, sean reconocidas por el/la Médico/a Forense y se impongan las medidas de protección oportunas.

Tercera. Cuando la víctima acuda o llame directamente al Ministerio Público, se le recibirá la denuncia verbal o escrita, de acuerdo con los criterios de actuación establecidos en el Protocolo, aplicándose las medidas de seguridad que resulten necesarias, de la forma más inmediata posible. En todo caso, se dejará constancia documental de las diligencias de información de los derechos de las víctimas, tanto los de carácter procesal, como los que le corresponden en el ámbito de la atención social, incluyendo la información actualizada sobre los recursos sociales y los teléfonos de emergencia disponibles.

Cuarta. El Ministerio Público comunicará a las dependencias policiales correspondientes a los domicilios de los implicados o al servicio de recepción centralizada que desde la DGPN fuere designado todas las decisiones que se adopten relativas a la imposición de medidas de seguridad, para que puedan llevar a cabo un adecuado control y seguimiento de las mismas.

C) Coordinación con otros actores

1. El Ministerio Público coordina, en todo caso, sus actuaciones en este ámbito con la Policía y los Juzgados, especializados o no. Recabará el auxilio de la policía -Policía Preventiva o de Investigación Criminal- para que controle el cumplimiento de las medidas seguridad impuestas y/o realice las investigaciones necesarias para acreditar los hechos.

Recibida la denuncia y practicadas las investigaciones necesarias remitirá las actuaciones al Juzgado competente, acompañando a la víctima al Juzgado, y cerciorándose de que se le fije la audiencia.

Participa en la práctica de las audiencias para la ratificación, modificación o prórroga de medidas de seguridad, cautelares y precautorias, y práctica de pruebas, así como cualquiera de las actuaciones judiciales que se realicen, ejerciendo la defensa de la víctima, y sosteniendo la acción pública durante la fase de enjuiciamiento. También auxiliará a los Juzgados, finalmente, en la ejecución de las sentencias, y el cumplimiento de las sanciones, medidas de seguridad y demás mecanismos de protección impuestos por el órgano judicial.

2. En segundo lugar, y dependiendo de las circunstancias en que pueda encontrarse la víctima, el Ministerio Público debe coordinar sus actuaciones con los servicios del sector salud y con los de protección y atención social.

Así, si la víctima presentara golpes o lesiones, la derivará al recurso de salud correspondiente, asegurándose de la constancia de la actuación médico-sanitaria recibida, remitiéndola al Juzgado junto con las actuaciones practicadas.

Si la víctima y sus hijos e hijas se encontraren amenazados(as) en su integridad física o moral por el denunciado, o en situación de necesidad o riesgo de exclusión

social, el Ministerio Público derivará a la víctima a las oficinas municipales de la mujer (OMM), consejerías de familia y otras instituciones públicas o privadas (ONG) que presten servicios de albergues temporales o casa refugio a la víctima y su grupo familiar, respetando, en todo caso, los protocolos y políticas de atención institucional de estos recursos.

El Ministerio Público cuenta en algunos lugares con unidades de atención integral a las víctimas (MAI), en las que se brinda atención integral a las víctimas, con el propósito de evitar la re-victimización y los efectos e impacto de la agresión o el delito sufrido, y están conformadas por un equipo interdisciplinario de profesionales: Abogados(as), Trabajadores(as) Sociales, Psicólogos(as) y Médicos(as) Forenses.

En los lugares donde no existan tales Unidades, el Ministerio Público derivará a la víctima al Punto de Coordinación de la Administración determinado en su ámbito territorial. En ausencia, también, del Punto, las Fiscalías, especializadas o no, deben tener a su alcance la información más completa y actualizada posible sobre los recursos y servicios disponibles y sus características, para orientar adecuadamente a la víctima en su utilización y derivación.

3. Así mismo las organizaciones no gubernamentales y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos deberán remitir aquellos casos que llegasen a su conocimiento dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su recepción, al Juzgado competente de acuerdo al Artículo 11, o en su defecto al Ministerio Público o a la Secretaría de Seguridad. Dichas organizaciones podrán sugerir la imposición de los mecanismos de protección que se consideren necesarios.

3. Órganos judiciales

A) Introducción

El Poder Judicial -como el Ministerio Público- ha incorporado ya en su estructura, organización y funcionamiento muy destacados avances en la persecución y sanción de la violencia doméstica y los delitos de violencia intrafamiliar, así como, muy especialmente, en la atención a las mujeres víctimas de estas específicas manifestaciones de violencia en la idea de un modelo de atención integral.

Consecuentemente, las actuaciones desarrolladas en este ámbito se corresponden, en lo esencial, con el contenido del Protocolo de Atención Integral a las Víctimas de la Violencia contra la Mujer en supuestos de Violencia Doméstica y Violencia Intrafamiliar, en el apartado relativo al Poder Judicial, pues no en vano ha sido el impulsor de su elaboración y participado decisivamente en su desarrollo y aprobación por parte de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal.

No se han advertido, en general dificultades técnicas de adecuación del Protocolo a las concretas dinámicas de actuación, directrices y normativas seguidos por los y las

Jueces y Juezas con competencias en la materia, en el normal desempeño de sus actuaciones en esta materia y los formatos utilizados en el habitual desarrollo de los procedimientos (celebración de las audiencias, prácticas de pruebas, actos de comunicación con las partes, y el dictado y ejecución de las sentencias, sustancialmente).

Sin embargo, también en relación con la actuación de los Juzgados, debe destacarse que se ha evidenciado la necesidad de mejorar algunas de las prácticas habituales cotidianas, especialmente, en relación con la comunicación, información y atención a las víctimas, y la necesidad de evitar la reiteración de actuaciones y/o traslados de las mismas, para evitar las perniciosas consecuencias de su victimización secundaria, así como de garantizar del mejor modo posible, la adecuada comprensión por ellas de los derechos que les otorga la ley.

En esta línea de actuación inciden las propuestas que se incorporan en relación con el ámbito de la cooperación y coordinación del Poder Judicial con el resto de instituciones involucradas en la ruta de atención que diseña el Protocolo.

Que debe intensificarse respecto de los otros dos actores del sector justicia (Policía y Ministerio Público) para proporcionar una respuesta más ágil a las víctimas, especialmente en las comunicaciones, notificaciones y señalamientos de las audiencias.

Propuestas que, en todo caso, son susceptibles de incorporación sin dificultades en el normal y cotidiano desarrollo de los procedimientos judiciales, ya se sigan por el procedimiento especial de violencia Doméstica o en el proceso penal por violencia Intrafamiliar, y en la ejecución de las sentencias correspondientes. Cuando menos, en aquéllos lugares que cuenten con Juzgados especializados, de donde pueden irse extendiendo a otros ámbitos territoriales en la medida que los recursos y servicios disponibles puedan irlo permitiendo.

Y que, al igual que en todas las instituciones y servicios integrados en la CIJP, ha de aplicar las pautas de actuación descritas en el Protocolo de forma vinculante y obligatoria.

B) Acciones propuestas

Primera. El Protocolo de Atención Integral a las Víctimas establece las actuaciones que los órganos judiciales que integran el Poder Judicial debe llevar a cabo, en los supuestos de violencia contra la mujer que aquí contemplamos, los principios que deben regir su actuación, y las cautelas a adoptar e informaciones y atención que ha de dispensar a las víctimas, por lo que la primera de las propuestas ha de ser, necesariamente, la de insistir en el cumplimiento obligatorio y generalizado del mismo por parte de las y los Jueces y Juezas con competencias en la materia.

Segunda. Cuando la víctima acuda directamente al Juzgado, se le recibirá la denuncia de acuerdo con los criterios y principios de actuación determinados en el Protocolo,

imponiéndose las medidas de seguridad que puedan resultar necesarias, de la forma más inmediata posible. Se dejará constancia documental de las diligencias de información de los derechos a las víctimas, tanto los de carácter procesal, como los que les correspondan en el ámbito de la atención social, incluyendo la información actualizada sobre los recursos sociales y los teléfonos de emergencia disponibles así como donde acudir si sus derechos son afectados por el operador de justicia para su respectiva sanción.

Tercera. Los Juzgados comunicarán a las dependencias policiales correspondientes a los domicilios de los implicados o al punto de recepción centralizada que hubiese designado la DGPN, todas las decisiones que se adopten relativas a la imposición de medidas de seguridad, para que puedan llevar a cabo un adecuado control y seguimiento de las mismas.

Cuarta. Se mejorarán las comunicaciones entre los Juzgados con competencias en la materia, el Ministerio Público y las dependencias policiales, estableciendo un sistema ágil de intercambio de información, que permita la recíproca, rápida y segura transmisión de todas las comunicaciones que resulten necesarias entre todos ellos, especialmente, las que puedan afectar a la seguridad de las víctimas.

Quinta. Se establecerá un sistema ágil de comunicación e información entre los Juzgados de Ejecuciones, las dependencias policiales, Consejerías de Familia y otras instituciones que puedan llevar a cabo las medidas de seguridad, cautelares o precautorias impuestas por los juzgados competentes, que permita mejorar entre ellos el intercambio de información necesaria para la vigilancia y control de la ejecución de los mecanismos de protección, medidas de seguridad, medidas precautorias y medidas cautelares, prorroga de medidas y sanciones impuestas por los Juzgados.

C) Coordinación con otros actores

1. Los Juzgados coordinan, en todo caso, sus actuaciones con el Ministerio Público, con la Policía Nacional, Defensa Pública, Alcaldía Municipal, Centros de Salud y Consejerías de Familia.
 - a) Dependiendo de las circunstancias en que se encuentre la víctima, los órganos judiciales deberán coordinar, también, sus actuaciones con los servicios del área de salud y los de protección y atención social.
 - Si la víctima presenta lesiones que requieran asistencia de salud, o si se sospecha de su existencia aunque no sean visibles, se dispondrá el traslado y acompañamiento de la mujer al servicio médico correspondiente, incorporando al procedimiento la constancia documental de la atención realizada
 - En los casos en que la mujer se presente por primera vez en el Juzgado a formular la denuncia, si ella misma y sus hijos e hijas se encontraran amenazados(as) en su integridad física o moral por el denunciado, o en situación de necesidad o riesgo de exclusión social, derivará a las víctimas a los servicios del INAM, Oficinas Municipales de la Mujer, Consejerías de familia y otras instituciones públicas o privadas, (ONG) que cuenten con albergues temporales o casas

refugio o aquellas que desarrollen programas de atención legal y emocional a mujeres que sufran violencia doméstica. En tales derivaciones se respetarán, en todo caso, los protocolos y políticas de atención institucional de estos recursos.

- En los Juzgados que cuenten con un equipo psicosocial, siempre que la víctima se encuentre en una situación emocional de especial afectación, se deberá efectuar una intervención previa de contención y acompañamiento para permitir a la mujer afrontar su declaración de forma razonable y una vez hubiera recuperado la presencia de ánimo. En el caso de que no dispusieran de un equipo psicosocial adscrito al órgano judicial, el Juez o Jueza ante el que se desarrollen las actuaciones procurará los medios de apoyo precisos para que la víctima reciba la necesaria atención de esta naturaleza.
 - En estos casos, se derivará a la víctima al Punto de Coordinación de la Administración determinado en su ámbito territorial. En ausencia de designación de este Punto, los Juzgados, especializadas o no, deben tener a su alcance la información más completa y actualizada posible sobre los recursos y servicios disponibles y sus características, para orientar adecuadamente a la víctima en su utilización y derivación.
2. Una vez que las sentencias dictadas en los procedimientos por violencia doméstica sean firmes, los Juzgados de Ejecución, donde los hubiere, o, en su defecto, aquéllos que las hubieren dictado, deben dar seguimiento y ejecución a las mismas, controlando el cumplimiento de las sanciones, las medidas de seguridad y demás mecanismos de protección impuestos.
- En esta función el Ministerio Público auxiliará a los Juzgados comprobando el cumplimiento de los trabajos comunitarios y/o actividades que se hubieren impuesto, ejercitando las acciones penales correspondientes en caso de incumplimiento.
 - La Policía auxiliará a los Juzgados en la ejecución de las sentencias, en la vigilancia y cumplimiento de las medidas de protección que se hubiesen impuesto.
 - Coordinan, también, con las Consejerías de Familia dependientes de la Secretaría de Salud en la derivación de las víctimas y su grupo familiar para el cumplimiento de la atención psicológica y psicosocial establecido para la elevación de su autoestima.
 - En el caso de los denunciados, coordinan con las Alcaldías Municipales, Consejerías de Familia y otras instituciones públicas o privadas que puedan colaborar para el cumplimiento de los procesos de rehabilitación y reeducación, reinserción, y los trabajos comunitarios impuestos. Las instituciones correspondientes notificarán al Juzgado el cumplimiento de los trabajos y/o actividades formativas que se hubiesen determinado, o, en su caso, si se hubiere producido algún incumplimiento.
3. Así mismo las organizaciones no gubernamentales y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos deberán remitir aquellos casos que llegasen a su conocimiento

dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su recepción, al Juzgado competente de acuerdo al Artículo 11, o en su defecto al Ministerio Público o a la Secretaría de Seguridad. Dichas organizaciones podrán sugerir la imposición de los mecanismos de protección que se consideren necesarios.

4. Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

A) Introducción

Una de las características más destacadas de este actor en la ruta crítica de atención integral a las víctimas de la violencia contra la mujer es la amplitud y diversidad de actuaciones que se comprenden en este ámbito de intervención: desde prestarles apoyo y brindarles el necesario acompañamiento, durante el desarrollo de todo el proceso, hasta apoyarle con los recursos de asistencia precisos para su recuperación personal y familiar: psicológicos, económicos, socioeducativos, de alojamiento, de empleo, de vivienda, entre otros. Para lograr, no sólo el cese de la situación de violencia, sino también su incorporación a una vida plenamente normalizada.

Las intervenciones en este ámbito, aun formando parte del modelo de atención multidisciplinaria, colaborativa y coordinado de los servicios implicados, deben regirse por los protocolos y políticas de atención institucional específicos de estos recursos, que son quienes tienen los conocimientos y experiencia necesarios para determinar cuáles son los servicios y prestaciones que resulten más idóneos en función de las circunstancias personales y sociales que concurren.

La valoración de las circunstancias de la víctima en cada caso y el establecimiento del itinerario de la intervención procedente requiere un conocimiento exhaustivo y actualizado de los servicios disponibles en el ámbito geográfico concreto de actuación, además de la necesaria colaboración entre todas las instituciones y servicios implicados. Sin coordinación previa entre las instituciones la derivación no es posible.

La determinación de un Punto de Coordinación Único por parte de la Autoridad Política y Administrativa con competencias sobre los servicios y recursos afectados ha de permitir la adecuada coordinación de todos ellos, y facilitar el seguimiento y evaluación periódica de las medidas adoptadas.

El Protocolo de Atención integral define en este apartado las tareas que corresponde efectuar a todos aquéllos organismos e instituciones públicas, así como a aquéllos de carácter privado, especialmente las ONGs que tienen como objeto esencial brindar servicios de atención integral a las víctimas y su grupo familiar, proporcionar servicios de albergue temporal o casa refugio a las víctimas, su acompañamiento y orientación a lo largo de todo el proceso, y, en su caso, la reeducación de los agresores.

B) Acciones propuestas

Primera. El Protocolo de Atención Integral a las Víctimas establece las actuaciones que los Servicios de Protección Social que debe llevar a cabo en los supuestos de violencia contra la mujer que aquí contemplamos, distinguiendo las diferentes situaciones que puedan presentarse y la forma en que la víctima acceda a los recursos de esta naturaleza, por lo que la primera de las propuestas ha de ser, necesariamente, insistir en el cumplimiento obligatorio y generalizado del mismo por parte de los/las profesionales que desempeñan sus funciones en las unidades de género.

Segunda. Las Administraciones con competencias en la materia elaborarán un mapeo con todos los recursos existentes en materia de protección social en cada área de actuación (Estado, municipio, departamento, etc.) que se actualice de forma permanente y que incluya tanto recursos públicos como privados. Incluirá los datos necesarios de contacto y la identificación de sus responsables, y estará disponible para todos los operadores del sector justicia (Policía, Ministerio Público y Juzgados), preferiblemente en formato electrónico y accesible a través de internet.

Tercera. La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social determinará un Punto de Coordinación Único por cada circunscripción territorial, que recibirá, de forma centralizada, las peticiones de atención social a las víctimas de la violencia contra las mujeres que efectúen la Policía, el Ministerio Público y los Juzgados, coordinando la actuación de los distintos servicios y realizando el seguimiento y evaluación de la atención prestada.

Cuarta. De presentarse la ausencia de un Punto de Coordinación, el recurso o servicio a quien la Policía, el Ministerio Público o el Juzgado remitan, en primer lugar, para su atención, a una víctima de violencia contra la mujer, asumirá, también, la obligación de coordinar todas las actuaciones que precise para su recuperación procesal, efectuando el seguimiento y evaluación de la atención integral prestada, de la que informará periódicamente a la institución remitente.

Quinta. Se promoverá la convocatoria de reuniones periódicas de cooperación entre los diferentes recursos, servicios e instituciones que intervienen en este ámbito en situaciones de violencia contra la mujer, para evaluar su funcionamiento, así como su seguimiento considerando los beneficios ofrecidos por el Programa Vida Mejor, la cooperación y coordinación entre ellos, la identificación de los problemas que impidan una atención correcta, y el establecimiento pautas de actuación homogénea, asegurando estándares de calidad y atención comunes a todas las víctimas. Reuniones que pueden tener un ámbito global, por áreas de intervención o ámbitos geográficos.

C) Coordinación con otros actores

Dependiendo del modo en que se inicie la ruta crítica de la intervención, la coordinación de los servicios de protección social con el resto de los actores tendrá, también, diferente desarrollo.

1. En el caso de que el recurso de protección social hubiera tenido la primera noticia de la existencia de la situación de violencia, coordinará con la Policía sus actuaciones, cuando la víctima presente golpes o lesiones y requiera asistencia sanitaria, o de que, en su caso, existiese riesgo para su seguridad o integridad física. En cualquiera de estos casos, y actuando con la rapidez e inmediatez que resulte necesaria para evitar la continuación de los actos violentos, se solicitará la presencia policial para que acompañe a la víctima al servicio médico, y adopte las medidas de seguridad precisas y oportunas.
2. En el supuesto de que la víctima, u otra persona o institución -o desde el propio servicio- hubiesen formulado la denuncia y se hubiese iniciado, ya, el correspondiente proceso judicial, y la derivación al recurso de atención social se hubiese realizado desde la Policía, el Ministerio Público o el Juzgado, el servicio requerido realizará un seguimiento del caso durante todo el proceso, brindando apoyo y acompañamiento emocional a la víctima, realizando la evaluación de los daños psicológicos, socioeconómicos o de otra naturaleza derivados de la violencia, y elaborando los informes necesarios que remitirá a la institución remitente con la periodicidad que se señale y, en todo caso, con carácter mensual.
Corresponde al mismo, también, informar a la mujer de los recursos existentes en su municipio o departamento territorial para situaciones de malos tratos (psicológicos, económicos, socioeducativos, de alojamiento, de empleo, de vivienda, etc.), estableciendo, en su caso, el itinerario de intervención adecuado a sus necesidades personales y las circunstancias en que pueda encontrarse, gestionando, cuando proceda, la derivación al servicio especializado o de otro tipo correspondiente, y coordinando las actuaciones de los diferentes recursos involucrados en la intervención.

5. Secretaría de Salud

A) Introducción

Como ya se ha anticipado, las específicas y complejas implicaciones del personal de salud en el desempeño de sus funciones relacionadas con la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar, de una parte, pero también de la existencia de un disperso y numeroso elenco de los instrumentos normativos y regulatorios que han de orientar su trabajo, se ha elaborado un documento complementario propio e individualizado destinado a servir de apoyo y orientación a los y las operadores del personal sanitario.

Ello no excluye, sin embargo, su inclusión en esta Guía, con el mismo carácter y metodología indicados para el resto de los actores de la ruta crítica de atención a las víctimas, pues, no obstante las especialidades en cada uno de los ámbitos contemplados, no puede perderse la perspectiva de que la actuación de todos ellos converge en el

desarrollo del sistema estructurado, intersectorial y coordinado, de atención a las víctimas de la violencia contra la mujer.

El Protocolo de Atención Integral define en este apartado las tareas que corresponde llevar a cabo en relación los actos de violencia contra las mujeres de que tenga conocimiento el personal de la secretaria de salud, relacionadas con el ejercicio de profesiones, oficios o técnicas vinculadas con la salud.

Que, al igual que en todas las instituciones y servicios integrados en la CIJP, ha de aplicar las pautas de actuación descritas en el Protocolo de forma vinculante y obligatoria.

Se incorporan en esta Guía las estrategias de abordaje desde el sistema de salud, diseñadas a partir de los preceptos que enuncian las Normas de Atención para la Violencia Doméstica en Honduras. Son el modelo rector que ha de guiar el contenido de los programas de salud, la actuación del personal de otras instituciones u organizaciones que se dedican a la detección, prevención, registro y vigilancia epidemiológica, de la Violencia Intrafamiliar y Doméstica en los diferentes niveles de complejidad, así como la promoción de formas de conveniencia solidaria en el sistema nacional de salud. Su cumplimiento es, también, obligatorio para todo el personal sanitario en los diferentes niveles de atención en este ámbito.

B) Acciones propuestas

Primera.- El Protocolo de Atención Integral a las Víctimas establece las actuaciones que los servicios de salud, ya sean públicos o privados, deben llevar a cabo en los supuestos de violencia contra la mujer que en el mismo se contemplan, distinguiendo los posibles escenarios de la intervención, según la forma y circunstancias en que se encuentre la víctima, acceda a los recursos de esta naturaleza, por lo que la primera de las propuestas ha de ser, necesariamente, la de insistir en el cumplimiento obligatorio y generalizado del mismo por parte de los/las profesionales que desempeñen sus funciones en este ámbito de actuación.

Segunda.- El cumplimiento de las disposiciones contenidas en las Normas y Procedimientos para el abordaje de la Violencia Doméstica y la Violencia Intrafamiliar es obligatorio para los/las profesionales que desempeñen sus actuaciones en los diferentes niveles de servicios del sector salud.

Tercera.- El Sistema de Salud se sustenta sobre un modelo piramidal en el que se definen tres niveles de actuación:

- 1. Promoción y Prevención:** En este nivel de intervención se comprenden todos aquellos servicios de atención primaria, preclínica, clínica y especializada en salud a las víctimas, que se prestan por los Hospitales y Centros de Salud Pública o Privada,

cuando se les solicita realizar evaluaciones físicas a las víctimas en aquellos lugares donde no existe servicios de medicina legal.

Las actuaciones del personal de salud tienen la responsabilidad de identificar y atender de forma integral a las personas afectadas y sobrevivientes de Violencia Doméstica conforme a las pautas de actuación desarrolladas en el Protocolo.

Estas actividades serán realizadas por la Consejería de Familia dependientes de la secretaría de salud pública con sujeción a las Normas y a su propio Reglamento de actuación.

- 2. Acciones de detección, registro y denuncia de casos:** A este nivel se refieren todas las actuaciones encaminadas a la detección de la situación de violencia por parte del personal de salud. En el Protocolo de Atención se describen, de forma detallada, las prácticas que han de regir las actuaciones en este ámbito, los principios rectores que deben informar su desarrollo, especialmente los de profundizar en la escucha activa y empática de las mujeres que puedan encontrarse inmersas en una situación de maltrato, y el cuidado del lenguaje, evitando preguntas que puedan culpabilizarla y contribuir a su victimización secundaria.

Se ha de incidir aquí en el llenado de la Hoja de Tamizaje y Detección de Violencia Doméstica, que es de cumplimiento obligatorio por el personal médico a cargo de las consultas.

En el caso de un Tamizaje Positivo, el personal médico debe referir a la víctima de violencia a la Consejería de Familia, donde se continuará con las actuaciones pertinentes, conforme a las pautas descritas en el Protocolo de Atención Integral. En el mismo se definen dos escenarios posibles de intervención, distinguiendo según se trate de un episodio de violencia que genere lesiones físicas o psíquicas detectables y evidentes o no.

- 3. Atención especializada:** Todas las actuaciones de atención a mujeres víctimas por violencia doméstica que vienen remitidas de los Juzgados para la Consejería de Familia que tienen por objeto brindar a las víctimas la capacitación en prevención de la violencia doméstica.

A este efecto, se realizará un proceso de fortalecimiento de la autoestima de la mujer, con atención individualizada o grupal según sea el caso. De dos meses de duración. Finalizado el mismo, se extenderá a la mujer la constancia de finalización del proceso para que la misma usuaria la lleve al juzgado competente.

C) Coordinación con otros actores

Dependiendo del modo en que se inicie la ruta crítica de la intervención, la coordinación de los servicios de salud con el resto de los actores tendrá, también, diferente desarrollo:

- 1.** Si la víctima es remitida por la Policía, el Ministerio Público o el Juzgado, una vez realizadas las actuaciones terapéuticas que correspondan en función de las lesiones sufridas, se cumplimentará el parte de evaluación médica entregando una

copia a la víctima y/o al profesional de la institución o servicio que la acompañe dejando constancia de la actuación.

2. Si es el recurso integrado en el sector salud el primer contacto de la víctima de violencia contra la mujer, también deben distinguirse, dependiendo del estado psicológico en que se encuentre, dos escenarios posibles de la intervención:
 - Si se trata de un episodio de violencia que genera lesiones físicas o psíquicas detectables y evidentes:
 - Una vez cumplimentado el parte de evaluación médica, será remitido, a la mayor brevedad posible, al Ministerio Público, a través de los servicios legales con que cuente el recurso de salud en que se realice la asistencia. En los lugares en que no exista presencia del Ministerio Público, el parte debe ser remitido al Juzgado.
 - Si se trata de un supuesto de violencia que no genera lesiones detectables y evidentes:
 - Tras prestarle la atención correspondiente a los problemas físicos o psíquicos encontrados, se derivará a la víctima a la Consejería de Familia, donde se informará a la víctima de las diferentes alternativas y posibilidades de actuación. Si la víctima decide no denunciar, y no existen elementos de juicio suficientes para denunciar, se le informará de la ubicación y teléfono de la Oficina Municipal de la Mujer (OMM), de otros posibles recursos de atención a las víctimas y de las ONGs que actúen en defensa de las mujeres más próximos al lugar de su domicilio, recomendándole que se ponga en contacto con alguno de estos servicios.
3. En la ejecución de las sentencias dictadas en los procedimientos por violencia doméstica, los Juzgados coordinan con las Consejerías de Familia, dependientes de la Secretaría de Salud Pública en la derivación de las víctimas y su grupo familiar para el cumplimiento de la atención psicológica y psicosocial establecido para la elevación de su autoestima
 - También coordinan Consejerías de Familia, y otras instituciones públicas o privadas, en el caso de los denunciados, para el cumplimiento de los procesos de rehabilitación y reeducación obligatoria que les hubieran impuesto.
 - Desde las mismas se remite a los Juzgados un informe mensual o dictamen sobre el cumplimiento de medidas precautorias de los sancionados, y, en su caso, si se hubiere producido algún incumplimiento.

Consortio Liderado por



Socios Coordinadores



Participan más de 80 Socios Operativos y Entidades Colaboradoras de Europa y América Latina



EUROsocial es un programa de cooperación regional de la Unión Europea con América Latina para la promoción de la cohesión social, mediante el apoyo a políticas públicas nacionales, y el fortalecimiento de las instituciones que las llevan a cabo. EUROsocial pretende promover un diálogo euro-latinoamericano de políticas públicas en torno a la cohesión social. Su objetivo es contribuir a procesos de reforma e implementación en diez áreas clave de políticas, en ciertas temáticas, seleccionadas por su potencial impacto sobre la cohesión social. El instrumento del que se dota es el de la cooperación institucional o aprendizaje entre pares: el intercambio de experiencias y la asesoría técnica entre instituciones públicas de Europa y de América Latina.



www.eurosocial-ii.eu